

CONGRESO NACIONAL

CAMARA DE DIPUTADOS

AGOSTO 21 DE 1917

49a REUNIÓN — 31a SESIÓN ORDINARIA

PRESIDENCIA DE LOS DRES. D. MARIANO DEMARIA (hijo) y D. MARIO BRAVO

DIPUTADOS PRESENTES: Agote Luis, Aguirre Diógenes, Aguirre Rafael M., Aldao Ricardo, Anquín Ireneo de, Arancibia Rodríguez Alberto, Araya Perfecto, Arce José, Atencio Juan V., Avellaneda Marco Aurelio, Barceló Alberto, Barco Jerónimo del, Bonifacio Benjamín, Bravo Mario, Bunge Augusto, Camaño Melitón, Carranza Wenceslao C., Castellanos Joaquín, Cordero Octavio, Cornejo Julio, Correa Francisco E., Costa Julio A., Cúneo Francisco, Demarchi Alfredo, Demaría (hijo) Mariano, Dickmann Enrique, Echagüe Alfredo, Escobar Adrián C., Frugoni Zavala Domingo, Gallo Vicente C., Carro Allende Juan E., Giménez Angel M., Goyeneche Arturo, Iriondo Néstor de, Iturbe Miguel, Jaramillo José M., Jerez Ernesto, Jiménez Beltrán Dámaso, Justo Juan B., Lagos Lauro, Maidana Julián, Marchini Emilio, Marcó Celestino I., Martínez Zuviría Gustavo, Massa Arturo H., Melo Carlos F., Mihura Emilio, Montes José Antonio, Morán Gregorio, Moreno J. Alejandro, Moreno (hijo) Rodolfo, Nougues Ambrosio, Pagés Pedro T., Pinedo Federico, Pradere Carlos M., Reibel Martín, Riú Francisco A., Rodríguez Alfredo, Rodríguez Carlos J., Rodríguez Jorge Raúl, Salvatierra Nicanor, Santamarina Antonio, Saravia David, Solari Benjamín T., Tomaso Antonio de, Usandi varas Agustín, Vaca Narvaja Jesús, Valle Delfor del, Varela Horacio C., Vedia Mariano de, Veyga Tomás de Videla Horacio C., Zaccagnini Antonio, Zalazar José María, Zavalla José María. DIPUTADOS AUSENTES: CON LICENCIA: Oyhanarte Horacio B., Saguier Fernando, Solanet Pedro, CON AVISO: Acosta Juan P., Ave Hueda Nicolás A., Barrera Roberto, Berho Martín S., Bonastre Manuel, Colina Félix M. de la, Contte Adolfo, Gallandez Francisco Ramón, Garzón Félix T., Gatica Teófilo I., Le Breton Tomás A., Lencinas José Néstor, Molina Víctor M., Padilla Miguel M., Paiz Juan Cruz, Paz Eduardo, Pereyra Iraola Leonardo, Pérez Virasoro Evaristo, Puch Angel E., Redoni Agustín, Repetto Nicolás, Rojas Guillermo, Silveti Luis F., Sosa Leopoldo, Cribura Francisco M., Vergara Tomás A., Vidart Roberto, Zavalla Guzmán Alberto. SIN AVISO: Caballero Ricardo, Carrasco Alejandro M., Cornet Pedro L., Corvalán Santiago E., Duffy Eduardo, Hernández Diógenes, López Buchardo J. Cecilio, Mercaño Angel E., Salas Oroño Nicasio.

SUMARIO:

- 1.—Se da por aprobada el acta de la sesión anterior.
- 2.—Asuntos entrados.
- 3.—Proyecto de ley del señor diputado doctor José M. Jaramillo sobre prosecución de las obras del camino carretero de Nonogasta a Vinchina.
- 4.—Proyecto de ley de varios señores diputados, fundado por don Francisco Cúneo, por el que se dispone el cierre de las casas de comercio en la capital federal y territorios nacionales a las 8 de la noche.
- 5.—Proyecto de ley del señor diputado, doctor Horacio B. Oyhanarte, sobre amnistía a los infractores del enrolamiento y servicio militar.
- 6.—Proyecto de ley de los señores diputados doctores Gustavo Martínez Zuviría y Alejandro Carrasco, fundado por el primero, por el que se dispone la construcción de un puente sobre el arroyo Carupá, entre Candelaria y Posadas.
- 7.—Rectificación al Diario de sesiones respecto a la sanción recaída en el ar-

tículo 30. del proyecto de ley sobre amparo del hogar.

- 8.—Termina la consideración del despacho de la comisión de agricultura en el proyecto de ley del señor diputado D. Julio A. Costa, sobre amparo del hogar (homestead), quedando aprobado.
- 9.—Aprobación del despacho de la comisión de agricultura en el proyecto de ley del señor diputado doctor Adrián C. Escobar, por el que se modifica la ley número 5559 en lo relativo al régimen de las tierras fiscales.
- 10.—La honorable cámara resuelve tratar los despachos de la comisión de legislación ferroviaria como primer asunto después de terminadas las interpelaciones promovidas por los señores diputados Cúneo y Martínez Zuviría.
- 11.—Moción del señor diputado doctor Melitón Camaño, para acordar preferencia a dos despachos de la comisión de agricultura en los proyectos de ley sobre combustibles nacional y perforación de pozos. Sin votarse esta moción se resuelve pasar a la orden del día.

12.—Autorízase a la comisión especial de petróleo para retirar el despacho que tiene a la consideración de la honorable cámara sobre administración y explotación de los yacimientos de Comodoro Rivadavia.

13.—Moción aprobada, del señor diputado, doctor Carlos F. Melo, para considerar después del despacho de la comisión de códigos en el proyecto de modificación del código de minas, el despacho de la comisión de legislación en el proyecto de ley sobre propiedad nacional de las minas de hierro, petróleo y hulla.

14.—Consideración del despacho de la comisión especial de legislación penal y carcelaria en el proyecto de código penal para la nación.

—En Buenos Aires, a 21 de agosto de 1917, siendo las 4 y 30 p. m., dice el

Sr. Presidente (Demaría). — Queda abierta la sesión con 61 señores diputados en el recinto y 63 en la casa.

1

ACTA

Sr. Presidente (Demaría). — Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

Sr. Pradere. — Pido la palabra.

Hago indicación de que se suprima su lectura y se dé por aprobada.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Demaría). — Habiendo asentimiento, se dará por aprobada.

Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

2

ASUNTOS ENTRADOS

Peticiones particulares

Vecinos de San Francisco de Córdoba se adhieren al proyecto de divorcio. (*A la comisión de legislación*).

—Alumnos del colegio de la Inmaculada Concepción (Santa Fe), solicitan la sanción del proyecto sobre nacionalización de los títulos expedidos por la universidad de aquella ciudad. (*A la comisión de instrucción pública*).

—El centro socialista de Campana (Buenos Aires), solicita el pronto despacho del proyecto de divorcio presentado por el señor diputado Bravo y otros. (*A la comisión de legislación*).

—La comisión Pro templo de Saladas, solicita un subsidio. (*A la comisión de presupuesto*).

—Empleados del Ferrocarril Sud se adhieren a las observaciones formuladas por la asociación ferroviaria nacional al proyecto de jubilaciones y pensiones. (*A la comisión especial de legislación ferroviaria*).

—S. A. Orbea y compañía reiteran su solicitud sobre exoneración de derechos a los materiales para fabricar artículos de caza. (*A la comisión de presupuesto*).

—La municipalidad de Tucumán, por la empresa "La eléctrica del norte", solicita la liberación de derechos de aduana para la introducción de materiales. (*A la comisión de presupuesto*).

—La Liga comercial de Punta Alta solicita aprobación del proyecto sobre construcción de un ramal férreo de Punta Alta a Bahía Blanca. (*A la comisión de obras públicas*).

—La junta ejecutiva del congreso notarial argentino solicita la sanción del proyecto de reformas al código de procedimientos en lo civil y comercial. (*A la comisión de códigos*).

—La Unión Industrial Argentina solicita que los cascos o toneles de madera se graven con el 25 por ciento *ad valorem*. (*A la comisión de presupuesto*).

—El congreso notarial argentino solicita el pronto despacho del proyecto sobre ejercicio de la procuración. (*A la comisión de justicia*).

—El asilo San Ildefonso de las hermanas terciarias solicita la inclusión de una partida en el presupuesto para su sostenimiento. (*A la comisión de presupuesto*).

—El Colegio de niños pobres solicita un subsidio. (*A la comisión de presupuesto*).

—Luis Garbóa solicita equiparación de sueldos. (*A la comisión de peticiones*).

SOLICITUDES DE PENSIÓN:

—Delina C. de Sosa, Martina H. de Leguizamón, Carmen González. (*A la comisión de peticiones*).

3

CAMINO CARRETERO DE NONOGASTA A VINCHINA

PROYECTO DE LEY

Artículo 1o. — Modifícase el plan de obras públicas para la provincia de La Rioja, de la ley 8573, destinándose las sumas fijadas por las partidas 3 y 4 para la prosecución de las obras del camino carretero de Nonogasta a Vinchina, pasando por Miranda.

Art. 2o. — Comuníquese al poder ejecutivo.

J. M. Jaramillo.

de la propiedad minera es un proyecto venido en revisión del honorable senado; el proyecto de los señores diputados Melo y Moreno ha sido iniciado recién en las sesiones del día. De manera que si se consideraran conjuntamente, eso importaría nada menos que la obstrucción...

Sr. de Tomaso. — ¿Cómo la obstrucción?

Sr. Jaramillo. — ... la obstrucción de la reforma al código de minería por la reforma que podría traer en el articulado del proyecto, cuya discusión se ha fijado para la sesión de mañana.

Sr. de Tomaso. — ¿Sabe el señor diputado...?

Sr. Jaramillo. — Señor presidente: rido que no me interrumpa el señor diputado...

En esta forma nosotros no pretendemos eludir el debate que plantea el proyecto de los señores diputados Melo y Moreno. Como lo dijo tan elocuentemente el señor diputado Arancibia Rodríguez, estamos dispuestos a encararlo bajo el punto de vista práctico, demostrando su visible inconveniencia, bajo el concepto constitucional, porque él hiere principios fundamentales de nuestra organización política.

No es posible alterar en este momento nuestra organización constitucional con reformas de códigos.

El proyecto sólo podría encararse dentro del concepto de la reforma propuesta por el señor diputado Melo a la constitución, pero es inadmisibles bajo el régimen constitucional vigente. Esa reforma vendría a herir conceptos tan claros que, francamente, el régimen del gobierno federal habría desaparecido por completo por medio de una reforma del código de minería, estableciendo el sistema unitario, desde que hace desaparecer los límites territoriales de las provincias y el dominio legítimo que le corresponde dentro de esos límites.

Sr. Rodríguez (A.) — Hago indicación para pasar a la orden del día.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Bravo). — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

—Se vota, y resulta negativa contra 24 votos.

Sr. Rodríguez (A.) — Que se rectifique.

—Rectificada la votación, resulta igualmente negativa por el mismo número de votos.

Sr. Presidente (Bravo). — Continúa la discusión de la moción formulada por el señor diputado por la capital.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Massa. — Para pronunciar muy breves, señor presidente, a objeto de dejar constancia de las razones que tengo para votar en contra de la proposición formulada por el señor diputado Melo, de que la cámara trate conjuntamente los despachos de las comisiones de códigos y de legislación sobre este asunto de minería.

No necesito decir a la cámara, en primer término, que no conozco estos asuntos, que no tengo idea sobre ellos, y que esperaba precisamente el debate para formar juicio sobre los mismos y votar en consecuencia.

Pero la moción formulada por el señor diputado de Tomaso en días anteriores, que la cámara rechazó en gran mayoría, a objeto de que se hiciera una discusión conjunta de dos despachos de comisión, y que ahora renueva el señor diputado por la capital, dió motivo para que la cámara escuchara las juiciosas explicaciones que estaba dando el señor presidente de la comisión de códigos, doctor Arancibia Rodríguez, y en las cuales se destaca principalmente la opinión que esa comisión tiene acerca de que el proyecto presentado por los señores diputados Melo y Moreno atacaba la autonomía, el dominio y la soberanía de las provincias.

Como se ve, es una cuestión, seria, grave y de importancia, que debe discutirse detenidamente y por separado, ya que, como se sabe por la cámara y por los señores diputados, los asuntos deben discutirse uno a uno. De tal ma-

nera, que pretender involucrarlos aquí, en una discusión conjunta, es traer una verdadera perturbación a la cámara y muy especialmente a los que, como yo, reconocen y declaran que no conocen bien estos asuntos.

Cuando el señor diputado Arancibia Rodríguez hacía esas observaciones, hizo una objeción, no recuerdo cuál, interrumpiéndolo el señor diputado doctor Melo, y fué entonces que yo tuve oportunidad de decir que me parecía más bien que estaba dando en la llaga el señor diputado, sobre todo por el recuerdo que el señor diputado doctor Melo me inspira en cuanto a la interpretación y al respeto que a él le merecen las autonomías provinciales.

Y para terminar, diré que sin que yo espere la lección de derecho constitucional que quería el señor diputado Melo del doctor Arancibia Rodríguez, yo espero el debate en que, si el señor miembro informante de la comisión de códigos habría de traer una lección, no habría de ser, seguramente, perdida para todos los señores diputados, por más que algunos no la necesiten.

Nada más.

Sr. Melo. — He pedido la palabra, señor presidente.

Sr. Presidente (Bravo). — Tiene la palabra el señor diputado Melo.

Sr. Melo. — Es simplemente para contestar las observaciones que acaba de oír.

Respecto a lo que ha dicho el señor presidente de la comisión de códigos, solamente manifestaré que estoy de acuerdo en que se trate inmediatamente después, a objeto de no hacer mayores discusiones sobre el asunto, el despacho de la comisión de legislación.

En cuanto a lo que ha expresado el señor diputado por La Rioja, diré que ésa es una cuestión que hemos de tratar mañana y que no tengo mayor apresuramiento por tratarla hoy. Y por lo que hace a lo que acaba de expresar el señor diputado por Buenos Aires, no me extraña lo que dice, porque él acaba de manifestar que, en realidad, no estaba informado de este asunto.

Sr. Presidente (Bravo). — No haciéndose uso de la palabra, se va a vo-

tar la moción formulada por el señor diputado por la capital, de que se trate inmediatamente después del despacho de la comisión de códigos, el despacho de la comisión de legislación.

Sr. Massa. — De manera que si lo que se va a votar es que se trate después, es otra moción.

Sr. Presidente (Bravo). — El señor diputado por la capital ha aceptado la indicación formulada por el señor presidente de la comisión de códigos.

Se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Bravo). — Queda resuelto. Se pasará a la orden del día.

14

CODIGO PENAL DE LA NACION

Sr. Presidente (Bravo). — Está en discusión el despacho de la comisión especial de legislación penal y carcelaria en el proyecto de código penal para la nación.

A la honorable cámara de diputados.

Vuestra comisión especial de legislación penal y carcelaria ha estudiado el proyecto de código penal para la nación argentina, presentado por el doctor Rodolfo Moreno (hijo) y, a mérito de las razones que se contienen en el presente informe, os aconseja la sanción del que se acompaña.

Leyes vigentes y sus reformas.

En la exposición que presentó a vuestra honorabilidad el diputado antes mencionado, cuando sometió su trabajo a vuestra consideración, se hizo notar la necesidad de sancionar el código penal de la nación, que reuna el conjunto de los preceptos represivos, hoy dispersos y contradictorios. Se aludió, entonces, a los graves defectos de la legislación en vigor y se hizo referencia a los diferentes esfuerzos hechos en el sentido de la reforma.

Desde que se inició en 1890 la tarea de redactar el código cuatro años después de sancionado el proyecto, que tuvo por base el del doctor Tejedor, la crítica ha sido continua y uniforme porque sobre todos los detalles a que la misma se ha referido se ha hecho sentir unánimemente la ase-

ración de que es malo e incompleto lo que existe entre nosotros en materia de legislación penal.

El proyecto de 1891 no llegó completo a la discusión legislativa, dando lugar al mismo, doce años después de su presentación, a la ley 4189, conocida con el nombre de ley de reformas al código penal. Pero esa ley, que modifica sólo una parte del código, no resolvió el problema, dando lugar, después de su promulgación, a críticas aun más intensas que aquellas que se habían hecho sentir sobre el código mismo.

La ley 4189, lejos de resolver el problema de nuestra legislación penal, lo agravó, pues se dictó sin tener en cuenta al pronunciar sus represiones lo que ya establecían los preceptos vigentes. El código elaborado a base del proyecto del doctor Tejedor, inspirado a su vez principalmente en el código de Baviera, era, con todos sus defectos, una unidad que obedecía a un criterio. El proyecto del 1891 constituía otra unidad, inspirada, sobre todo, en el código holandés y conteniendo una orientación diferente de la que presidió a la ley en vigor.

De manera que al tomarse del proyecto de 1891 una serie de disposiciones y colocarlas sin preocuparse de la concordancia, en reemplazo de otras del código vigente, se destruyó el conjunto de ambos cuerpos y se complicó el problema. El código pudo modificarse, teniendo en cuenta su conjunto al introducir disposiciones nuevas, pero nunca debieron zureirse al articulado existente preceptos que respondían a otra unidad. Esas mezclas, en materia legislativa producen los resultados que hemos tenido oportunidad de palpar en la aplicación de nuestro código represivo.

Bastará, para no dejar estos asertos sin comprobación, observar algunas de las particularidades derivadas de la curiosa amalgama a qué antes nos hemos referido.

Nuestra ley penal con criterio anticuado admitía la sustitución de ciertas penas corporales, por el pago de una suma de dinero.

Este procedimiento poco democrático, puesto que permitía al rico liberarse de condenas que el pobre debía sufrir, reposaba en que no era indispensable hacer efectivas, corporalmente, las penas leves de encierro, en ciertos casos. Todos sabemos que para determinadas personas, la prisión produce efectos morales más perjudiciales que la libertad, porque en la primera adquieren hábitos inconvenientes e interrumpen las labores útiles que desempeñan en la vida libre.

La ciencia penal, penetrada de la importancia del asunto, encontró la solución en la condena condicional, es decir, en la suspensión de los efectos de la pena para los condenados a encierro por corto tiempo, o multa, cuando no ofrecieran peligro para la sociedad. Y es claro que aplicado con éxito el procedimiento debió abolirse la

facultad de sustituir la pena corporal, permitida sólo al rico, puesto que el pobre carecería del dinero preciso para alcanzar el beneficio.

El proyecto de 1891 reglamentaba ya la condena condicional y como es consiguiente, suprimía la facultad de sustituir las condenas por dinero. Pues bien, la ley de reformas tomó el artículo que prohibía la sustitución de penas y no incorporó la condena condicional, empeorando la situación anterior.

Y como los jueces no pueden substraerse a las presiones del medio en que viven, antes de condenar a una prisión que debe cumplirse, prefieren en ciertos casos absolver, porque lo consideran moral y socialmente más oportuno, aunque tengan que hacer interpretaciones más o menos acomodaticias.

Nos referimos a ese caso como un ejemplo, porque no puede ser el fin de esta comisión verificar una crítica a la ley de reformas ni al sistema penal vigente.

En la parte especial, el criterio que predominó para las modificaciones fué el de aumentar las penas, creyéndose con pensamiento simplista que el crimen se atenúa con la mayor severidad en el régimen represivo. Si ese factor tuviera el valor que se pensó cuando la ley 4189 fué promulgada, el problema de la criminalidad sería muy sencillo, pues bastaría volver a las leyes de Dracón o a las más semejantes a las mismas, para tenerlo resuelto.

La ciencia penal ha comprobado por medio de la experiencia, la estadística y la observación que ese postulado primitivo no es acertado y que el crimen dependiente de factores sociales e individuales no se suprime ni se disminuye aumentando los castigos.

Pero en nuestro medio y con parte de la ley de reformas ha ocurrido un fenómeno que es corriente en los casos semejantes: cuando una ley contraría un modo de ser social, todos, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente la violan y contribuyen a que no se aplique.

La ley referida prodiga la pena de muerte en el título del homicidio, y a pesar de regir desde catorce años, solamente dos ejecuciones han tenido lugar en la capital de la república y ninguna en las provincias y territorios.

Los jueces, como si se hubieran puesto de acuerdo, han evitado la aplicación de la pena capital, y en los contados casos en que se ha pronunciado, los poderes ejecutivos de la nación o de las provincias han concurrido con la salvadora conmutación.

Lo que demuestra una vez más que no basta sancionar una ley para resolver un problema, requiriéndose como elemento esencial que ella se adapte a las necesidades y al pensamiento dominante en el medio al cual ha de aplicarse.

Los ataques más violentos y más generalizados que se han hecho al sistema penal

vigente, se relacionan con las penas pronunciadas para los atentados a la propiedad.

La deficiencia en esa materia es tan notoria, que ha salido ya del dominio de los juriconsultos y aun de los curiales, para que sea comentada por la generalidad. Es frecuente observar que a un doméstico, muchas veces menor de quince o diez y seis años, se le manda a penitenciaría por dos, tres y cuatro años, por haber hurtado un objeto cuyo valor no pasa de unos centavos. La ley, en esa materia, es inexorable y contraría todo criterio científico y social. Es tan absurda que se ha repetido el caso de jueces que, después de haber condenado, se han dirigido al poder ejecutivo correspondiente requiriendo el uso de la facultad de perdonar. Así entendían que se salvaba la ley y que se evitaban las consecuencias de sanciones monstruosas.

Esa crítica acertada se repite continuamente, haciéndola sentir, más que las víctimas generalmente desamparadas, los defensores, los mismos fiscales y jueces y la prensa diaria, cada vez que se ocupa del asunto. Sin embargo, la ley se mantiene hace catorce años, y los tribunales siguen mandando a penitenciaría a pobres criaturas que hurtan, como sirvientes, objetos de escaso valor.

Todo eso debe ser modificado y con urgencia, por nuestro propio prestigio de país civilizado.

El proyecto de 1891 no motivó ningún trabajo especial, de manera que no hay al respecto bibliografía, contando sólo con la exposición de motivos y los antecedentes de doctrinas y de legislación comparada. La ley de reformas fué objeto de críticas doctrinarias que no se concretaron en libro, salvo el del doctor Duffy y el del doctor Rodolfo Moreno (hijo): "La ley penal argentina".

El proyecto de 1906, acompañado también de una exposición de motivos y orientado de manera análoga al de 1891, fué objeto de un estudio por el doctor Julio Herrera, titulado "La reforma penal".

Este proyecto fué pasado al congreso, pero ha permanecido sin despacharse en la honorable cámara de senadores, donde varias veces se han hecho esfuerzos individuales para convertirlo en ley.

En 1910 y, como homenaje al centenario de la independencia, el doctor Rodolfo Rivarola, coautor de los proyectos de 1891 y 1906, publicó su "Derecho penal argentino", en el cual estudia la parte general de los dos proyectos referidos. Y en 1914 el congreso penitenciario reunido en Buenos Aires verificó un estudio sobre el proyecto de 1906, aconsejando su sanción con algunas modificaciones. El relator oficial fué el doctor Octavio González Roura. Además aconsejó ese congreso que se adoptasen las conclusiones del doctor Jorge E. Coll con relación a la represión de los menores delincuentes.

La bibliografía acerca de nuestro problema penal es, como puede observarse, bastante reducida, como si el asunto careciera de importancia.

El doctor Eusebio Gómez por su parte, y en un erudito trabajo, titulado "Criminología argentina", ha reunido todos los antecedentes, no sólo de nuestra reforma penal, sino de toda nuestra obra en la materia. Ese trabajo es un índice de nuestra labor. Pero la ley 4189 no ha sido la última de las leyes penales que ha dictado el honorable congreso.

En 1910, y bajo la presión de circunstancias conocidas, se dictó la ley 7029 conocida con el nombre de "Ley de seguridad social" o simplemente de "Ley social". Ese conjunto de preceptos legales agravó aún más las dificultades de nuestra deficiente legislación penal, pues modificó sin tener en cuenta lo establecido por los otros conjuntos, lo que hubiera sido indispensable para evitar discordancias, lo relativo a jurisdicción y a procedimientos, además de principios consagrados en la parte general del código penal.

La suprema corte de la nación, en diferentes casos que son del dominio público, ha resuelto que tal ley es contraria a la constitución en cuanto se refiere a jurisdicción, y los tribunales federales, ordinarios y de provincia no han dado ni podido dar cumplimiento a lo que la misma ley dispuso, sobre el procedimiento y el término de diez días para la duración de los procesos. Eso sólo demuestra que la ley ha sido en la práctica un fracaso.

Además, esa ley es contraria, a pesar de ser una ley penal, a los criterios del código y de su reforma en todo lo que se refiere a tentativa y participación criminal. Repite en algunos casos los preceptos vigentes y señala para otros penas que contradicen a las que se encuentran en vigor. Por eso decíamos que se ha empeorado con ese articulado la situación inconveniente de nuestro derecho represivo.

Posteriormente se ha dictado la ley 9143, tendiente a reprimir la trata de blancas y la cual ley, a pesar de sus deficiencias, llena una necesidad.

Todos estos antecedentes y los proporcionados por la ley 9077 sobre cheques dolosos han debido ser considerados por la comisión, al formular el despacho acompañado.

Además de esas leyes, la comisión ha tenido presente los proyectos que le fueron remitidos, cuando se instaló de acuerdo con una votación de la cámara. Los que presentaron el diputado de Tomaso sobre leyes de residencia y social y el diputado Moreno acerca de expulsión de extranjeros, fueron enviados después de examinados bajo el punto de vista penal, a la comisión de negocios constitucionales. El que presentó el diputado del Valle sobre cheques dolosos ha sido tenido en cuenta por la comisión, al redactar la parte especial, y el que se

refiere a organización carcelaria del diputado del Barco será objeto de estudio al formularse el despacho sobre el régimen de las prisiones.

Preparación del proyecto.

El proyecto sometido al estudio de la comisión es el que presentó el doctor Rodolfo Moreno (hijo), o sea el de 1906, con las modificaciones que le introdujo dicho legislador, teniendo en cuenta las leyes dictadas posteriormente.

El doctor Moreno, una vez impreso el proyecto con sus fundamentos y la exposición de motivos de la comisión de 1906, promovió una encuesta, requiriendo opinión sobre el mismo, a los profesores de derecho penal de las universidades nacionales y a los jueces, fiscales y defensores de toda la república, encargados de aplicar y usar el código represivo en sus diversas funciones.

La encuesta significaba someter el proyecto a la crítica de los más capacitados por sus estudios en la materia, y recoger una serie de observaciones acerca del mismo. Todos los grandes países, cuando han tratado de dictar sus códigos, que son expresión de justicia y de cultura, han empleado ese procedimiento, requiriendo las opiniones que pudieran servir para los mejores resultados.

La comisión, una vez constituida, aceptó la iniciativa en curso, renovándose la encuesta a nombre de la misma y requiriéndose opinión también a los principales órganos de publicidad, los que podían a su vez contribuir con la colaboración de especialistas. También se dirigió con el mismo objeto a personas de reconocida competencia en la materia, habiendo obtenido de esa manera diferentes y apreciables concursos. Para facilitar la tarea de los legisladores, la comisión remitió a cada uno de los señores senadores y diputados un ejemplar del proyecto acompañado de la nota que figura en la encuesta.

Requirió igualmente la opinión del poder ejecutivo, quien expresó por medio del señor ministro de justicia e instrucción pública que la daría en oportunidad. En el mensaje del mismo poder ejecutivo esa opinión se ha manifestado en forma francamente favorable al proyecto remitido por la comisión.

La encuesta, cuyas conclusiones se acompañan por separado, fué contestada por tres profesores de la universidad de Buenos Aires, los doctores Juan P. Ramos, Enrique B. Prack y Tomás Joffré. Los profesores de la universidad de La Plata no lo hicieron en ese carácter, porque de otra manera y en otras oportunidades habían vertido opinión completa extensa sobre el proyecto. El doctor Rodolfo Rivarola, como coautor del mismo y como autor del libro antes recordado, y el doctor Octavio González Roura, como miembro informante del congreso penitenciario de 1914 en el

estudio hecho sobre el proyecto de 1906 y además como miembro de la cámara de lo criminal y correccional de esta capital.

Respondieron, además, y algunos en forma erudita, diversos magistrados y funcionarios auxiliares de la administración de justicia, cuyas respuestas aparecen en la encuesta que se adjunta.

Además, la cámara de lo criminal y correccional de la capital envió las opiniones ya vertidas en la comisión del honorable senado acerca del proyecto de 1906, al que aconseja verificar algunas modificaciones.

Con todos estos elementos y antecedentes que sintetizan la opinión científica del país dada bajo el punto de vista de la teoría y bajo el aspecto práctico, la comisión emprendió el estudio y llegó a formular el proyecto que presenta.

Ha tenido, además, en cuenta la comisión, diversos códigos, proyectos y autores extranjeros, desde que era necesario recibir impresiones propias y extrañas para llegar a lo más acertado. Ha recibido, por lo demás, todas esas inspiraciones con cuidado, tratando de tomar lo ya experimentado y lo que se adapta a nuestra manera de ser. Las novedades que seducen a muchos autores, generalmente teóricas, suelen ser como ciertas panaceas, que entusiasman a unos pocos, pero no curan a nadie.

Para que no sea este despacho demasiado extenso, y a fin de que tenga la mayor precisión, seguiremos el orden del proyecto, título por título, dando con brevedad explicaciones donde fuese necesario e indicando las reformas con relación al proyecto de 1906, que fué tomado como base y a la legislación vigente.

Criterios generales.

Ha sido un pensamiento dominante en el seno de la comisión el de hacer obra práctica y eficiente. En materia penal las teorías, las opiniones y los enunciados, abundan. En códigos de otros estados se han ensayado instituciones que seducen porque revelan culturas superiores encaminadas a resolver el problema de la delincuencia. Pero muchas de ellas, explicables en países de población compacta e instrucción difundida, no podrían aplicarse entre nosotros por falta de los elementos necesarios para hacerlas efectivas.

Hemos debido, en consecuencia, aceptar lo que se encuentra dentro de nuestros medios, de nuestros recursos y hasta de nuestros establecimientos. ¿De qué serviría hablar en el código penal de instituciones que no existen y que no podríamos tener, por ahora al menos?

Esto no quiere decir que deban abandonarse los propósitos de perfección porque, a medida que progresamos podrían crearse los organismos necesarios para el mejoramiento de las instituciones. El proyecto no excluye en ningún caso. Se limita a consignar preceptos susceptibles de aplicarse

en la hora actual con los medios existentes y susceptibles también de hacerse prácticos con elementos más complejos.

En este sentido, el proyecto marca un camino que debe seguirse en progresión ascendente. La ley teórica, que se sabe de antemano no será aplicada por imposibilidad circunstancial, desprestigia al poder que la sanciona y al núcleo para el cual se promulga.

Las orientaciones del derecho penal han sufrido una verdadera transformación desde que los positivistas italianos aplicaron reglas y procedimientos científicos al estudio de esta rama de las ciencias jurídicas.

Cuando la ciencia pudo comprobar, después de experimentaciones numerosas, que los principios proclamados por los maestros del positivismo, que indicaban causas y remedios, eran exagerados, se notó en el mundo de los estudiosos un movimiento de desaliento. Los nuevos campeones de este derecho, recurriendo a la estadística, a la historia y al razonamiento, demostraron lo que llamaban la bancarrota de la penalidad, es decir, el fracaso de los sistemas represivos en vigor, que no sólo no suprimían el crimen, sino que ni siquiera atacaban la reincidencia de una manera eficaz. Como ellos, al mismo tiempo que demostraban la ausencia de éxito, indicaban las causas del fenómeno y anotaban los remedios, pudo pensarse en la corrección del efecto, por medio del ataque de esas causas. Se renovaba la vieja cruzada que pretendía destruir el crimen difundiendo la instrucción, por medio de otros factores, ya que esa instrucción tan decantada no había tenido influencia en la disminución del delito.

La experiencia demostró que los nuevos evangelistas, como se llamó a los portaestandartes de la campaña, estaban equivocados, y de allí el primer desaliento, después de tanto deseo compartido.

La tarea científica no se interrumpió, sin embargo, y los estudios hechos con más cuidado, mejor examen y menos ligereza, han demostrado que era necesario hacer mucho en materia represiva, si no para suprimir el delito, por lo menos para defender mejor a la sociedad contra sus ataques.

El crimen es un fenómeno social, que acompaña como acontecimiento fatal a todas las agrupaciones humanas. Suprimirlo, mientras la naturaleza humana mantenga sus actuales caracteres, es imposible. Todo lo que puede hacerse es estudiarlo y buscar los medios de hacerlo lo menos frecuente posible, tratando también de que no se repita con relación al sujeto que una vez lo realizó. Un delito demuestra la existencia de un individuo peligroso o indaptable al medio en que vive; luego, los esfuerzos sociales deben tender, no a expiaciones ni a la imposición de sufrimientos con relación al autor, sino a tomar las me-

didadas necesarias para que el individuo peligroso no repita el acto antisocial.

Todo esto no depende sólo del código penal, sino de un sistema legislativo que prevenga en todos los aspectos de las actividades sociales.

El código, sin embargo, puede tomar una serie de precauciones, partiendo siempre del peligro que represente el sujeto para la sociedad, pues la libertad individual no debe restringirse sino teniendo en cuenta las necesidades del medio social en que los sujetos viven.

El criterio antiguo era meramente personal. Se castigaba, haciendo purgar el hecho al delincuente, repeliendo el ataque que causaba dolor, ocasionaba peligros o arrancaba satisfacciones, con la imposición de otros sufrimientos a quien había violado la regla jurídica.

Se tenía en cuenta un punto de vista individual relacionado con la persona de la víctima y con la persona del autor. Pero ese criterio individual no tendía a la aplicación de la pena adecuada, a la necesidad o a la conveniencia social, sino al propósito de infligir al delincuente un sufrimiento, repitiéndose en definitiva y en el fondo, la venganza tradicional.

La ciencia ha cambiado esos principios y, considerando que el delito es un fenómeno social, ha tomado para las represiones un punto de vista también social. ¿Qué es lo que conviene a la sociedad? ¿Cuáles son sus deberes frente al hecho del crimen? Eso es lo que debe consultarse principalmente, porque, desde el momento que el fenómeno es social, y que se relaciona con causas sociales, el criterio para afrontar las soluciones debe ser también social. Esto sin perjuicio de que la pena se aplique adaptándola de la manera más precisa a la situación y condiciones de la persona que debe recibirla, pues individualizando y dando a cada uno lo que más conviene, se llena el fin social de la represión.

Los mismos enamorados del factor antropológico, eminentemente personal, han dado a los elementos sociales importancia decisiva, entendiendo que las eventualidades de esta índole presionaban a los sujetos, haciéndolos actuar de acuerdo con sus temperamentos.

Con todo eso, un código penal no debe embarcarse en escuelas, ni aceptar teorías, por atraentes que sean, porque ese es el mejor medio de incurrir en sectarismos y por consiguiente en errores. Pero tampoco conviene por tradición y por temor a innovaciones conservar términos e instituciones que han fracasado y que todos reconocen como inconvenientes.

La comisión que preparó el proyecto de 1906 decía con acierto al empezar la exposición de motivos, que un código penal no es el sitio aparente para ensayos de teorías más o menos seductoras.

Por eso agregan que han renunciado a novedades que no se encuentran abonadas

por la experiencia, sin preocuparse de averiguar si las patrocinan clásicos o postivistas.

La comisión comparte esa manera de ver sensata, pero ha creído oportuno estudiar el problema y enunciarlo, ya que no es posible proyectar en materia penal, sin tener en cuenta los esfuerzos hechos por la ciencia en esta materia. Ha entendido también, y en esto modifica un tanto el criterio de la comisión antes referida, que no había por qué mantener ciertos principios tradicionales en nuestra ley, en sus antecedentes y en los códigos españoles que hemos tomado como referencia, cuando ellos no responden a necesidades actuales. Han preferido dejarlos de lado y aceptar las orientaciones más sensatas del Código noruego y de los proyectos suizo y alemán, propiciados por los penalistas modernos más eminentes.

Un publicista argentino, Belisario J. Montero, en su libro "Estudios Sociales", sostenía en 1910 que nuestra ley penal debía orientarse de manera más moderna, aceptando las conclusiones de la experiencia, instituyendo la condenación condicional, la libertad condicional, los patronatos y los tribunales infantiles. Sostenía también con entusiasmo la individualización de la pena.

Sin plantear, por lo tanto, cuestiones relacionadas con escuelas, la Comisión, de acuerdo con los principios más adelantados en materia penal, entiende:

1.º Que el número de penas debe reducirse, porque es innecesario colocar en la ley enunciados que no serán cumplidos;

2.º Que debe tenderse a la individualización de la pena, en vista de que cada caso es diferente, debiendo estudiarse el hecho, sus circunstancias y el sujeto, para apreciar el peligro social que representa el delincuente;

3.º Que conviene a estos efectos, consignar penas elásticas y dar a los jueces amplias facultades para que puedan aplicarlas dentro de términos bien amplios;

4.º Que debe variarse el criterio legal de la responsabilidad, sin engolfarse en los tradicionales problemas del libre albedrío que complican una ley sin necesidad;

5.º Que debe autorizarse la reclusión de los individuos absueltos por razones personales cuando sean peligrosos y hasta que cese la situación de peligro;

6.º Que la imputabilidad de los menores debe sujetarse a reglas especiales, teniendo en cuenta el porvenir de los mismos;

7.º Que la reincidencia debe ser motivo de especial preocupación a fin de impedir en cuanto sea posible la repetición de delito por el mismo sujeto;

8.º Que la gracia otorgada a los penados irrevocablemente, después que cumplieron con buena conducta una parte de la pena, es más conveniente reemplazarla con la libertad condicional revocable;

9.º Que la condena condicional, o sea la suspensión de la pena para delitos leves de todo punto necesaria;

10.º Que la tentativa y la participación criminal deben legislarse con espíritu moderno, abandonando definiciones vetustas que dificultan la aplicación de la ley a los casos que se presentan.

Estos puntos de vista se desenvuelven en la parte general del proyecto y se concuerdan con la parte especial donde se enumeran delitos y se señalan las penas que corresponden a los mismos.

Con estos enunciados, conviene ahora ocuparse en concreto de las disposiciones del proyecto tal como ha sido elaborado por la comisión.

Legislación de faltas.

La comisión de 1906 incluyó en el proyecto un libro sobre faltas. En la exposición de motivos, comentando esa inclusión, se dijo: "Hemos agregado también con el mismo propósito de uniformar todas las leyes de carácter penal, un libro sobre faltas, siguiendo en esto a la mayoría de los códigos modernos, incluso el de Alemania y el proyecto para la Suiza, cuyas instituciones federativas no han sido obstáculo para que la nación se ocupe de ellas como materia de legislación general."

Sin embargo, si esta parte del proyecto suscitara escrúpulos de orden constitucional y se pensara que invade el dominio de las autonomías provinciales, su eliminación en nada alteraría la economía del código. La comisión tiene, no obstante, la creencia de que tales escrúpulos no se han de manifestar, porque piensa que si el congreso tiene por la constitución la facultad de dictar el código penal de la nación, en dicha facultad está forzosamente comprendida la autoridad necesaria para incluir en ese código todos los actos u omisiones que en cualquier parte del territorio de la nación se consideren ilícitos y merecedores de una pena. Las provincias conservarán siempre el poder de crear y reprimir faltas de carácter local, y como es este poder el único que constitucionalmente les corresponde en esta materia es evidente que sus autonomías no sufren cercenamiento alguno porque el congreso legisle sobre faltas de carácter general."

Como puede notarse por estas palabras, la comisión de 1906, se hizo cargo de la dificultad que presentaría para la sanción del proyecto la inclusión de un libro sobre faltas, y para que eso no hiciera fracasar el conjunto de aquél, se redactó el libro referido con independencia completa del código. Eso sólo probaría que los autores de aquel proyecto no estaban completamente persuadidos de la bondad del sistema que propiciaban.

Hemos creído oportuno suprimir el libro sobre faltas, de acuerdo con las ideas sostenidas por el diputado que presentó el proyecto. Diferentes razones han pesado para eso en el ánimo de los miembros de esta comisión.

Desde luego, cuando no hay motivos fundados para variar una costumbre, ésta puede invocarse con fuerza análoga a la de un artículo de ley. Y ese sería el caso con respecto a la legislación sobre faltas. Nunca, desde la organización nacional, el congreso ha legislado sobre esa materia con carácter general. Ella se ha dejado a los gobiernos de provincias y en todas éstas se han dictado leyes diversas acerca de tales infracciones. El congreso tácitamente ha aceptado esa doctrina porque ha dictado leyes creando y castigando faltas, pero como legislatura local para la capital de la república y para los territorios nacionales.

El proyecto de 1891 incluyó también en su articulado un libro sobre faltas y en un capítulo especial de la exposición de motivos estudió las razones para la inclusión de aquéllas en el código penal. El proyecto de 1906 que insistió en la misma tesis, quince años más tarde, no trajo sobre el asunto nada más que las palabras antes transcriptas pareciendo haber disminuido, si se tiene en cuenta sus términos, la mayor seguridad con que se mantiene ese propósito en el primero de los referidos proyectos.

Conviene, ya que es esta una cuestión debatida y que se ha planteado como punto principal en los debates hechos alrededor de este código, examinar brevemente nuestros antecedentes doctrinarios.

El proyecto del doctor Carlos Tejedor, de acuerdo con la modalidad preceptiva y a veces didáctica de los códigos antiguos, dividía en el artículo primero las infracciones de la ley penal en dos clases: "Unas más graves, que se llaman crímenes y otras menos graves que se dividen a su vez en delitos y contravenciones. En la nota puesta al pie del artículo se observa que esa división sirve en el derecho francés para determinar la competencia de los tribunales y clasificar los hechos ilícitos por su valor intrínseco, agregando que como nosotros no tenemos el jurado, aquí sólo puede servir para lo segundo."

En el artículo 2.º define los crímenes, los delitos y las contravenciones, entendiéndose que tienen este último nombre, las faltas a las que la ley señala penas de policía. Pero de ellas no se ocupa el proyecto, porque en el artículo 4.º, inciso 1.º, se establece que las disposiciones del mismo no corresponden a las contravenciones de policía. La nota tomada de la introducción al código penal de Baviera, explicaba en los términos siguientes la diferencia entre delitos y faltas, y las razones por las cuales el proyecto de código no se ocupa de las segundas. Dice así: "Si es

"cierto que la justicia y la policía deben unirse para afirmar la seguridad común del estado y para prestarse mutuos y continuos socorros, no es menos cierto que bajo el punto de vista de su objeto particular son dos instituciones profundamente diferentes."

"Hay actos ilícitos que perturban directamente el orden exterior del estado, que encierran un ataque a los derechos del estado o de los particulares, o que, según su carácter extrínseco y la intención del agente tienden a la realización de ataques de esta naturaleza o a la violación de derechos análogos. Pero hay también actos que si encierran directamente la violación de un derecho, no son, sin embargo, indiferentes al legislador a causa de sus consecuencias desagradables para el orden público o de su influencia directa sobre la seguridad, la moralidad y el bienestar del estado; por lo que deben ser sancionados o prohibidos con una pena. Los actos de la primera especie son ilícitos por motivo de justicia absoluta; lo son en todo tiempo y en todos los lugares: su prohibición está escrita en caracteres indelebiles en el corazón de todo hombre racional. Los actos de la segunda son muchas veces considerados en sí mismos indiferentes para el derecho, que sólo los prohíbe por motivos de utilidad relativa, y dependen de los tiempos, de las circunstancias, del carácter y costumbre de las naciones como de las instituciones particulares y otras circunstancias accidentales."

"Los actos ilícitos de la primera clase, por lo mismo que ofenden directamente un derecho forman el objeto del poder judicial, mientras que las acciones u omisiones de la segunda pertenecen al dominio de la policía. Esa diferencia sacada de la sustancia misma de los actos en cuestión, debe manifestarse en la naturaleza de las penas, en sus consecuencias legales, en el procedimiento, etc., por desemejanzas tan considerables, que toda legislación que no quiera mezclar cosas distintas entre sí, y que tema confundir el sentido moral del pueblo, debe separar también las dos clases por códigos especiales y distintos."

Sin compartir las ideas sobre inmoralidad del delito y sobre la universalidad del criterio de apreciación a que se hace referencia, pues ellas han sido desestimadas, por los pensadores modernos, hemos transcrito la nota, como un antecedente ilustrativo acerca de la materia examinada.

En el proyecto presentado por los doctores Sixto Villegas, Andrés Ugarriza y Juan Agustín García, designados para examinar el código del doctor Tejedor, por disposición de la ley 16 de octubre de 1868, se suprime, como lo dice el informe de la comisión mencionada, la división que

se establecía entre crímenes, delitos y contravenciones. La comisión desecha la división, teniendo en cuenta especialmente la opinión vertida por Rossi en su Tratado de Derecho Penal, por considerar que ella no contribuiría a la clasificación metódica y a la claridad en la exposición de las materias, ocasionando por el contrario confusiones e incertidumbres.

Con respecto a las faltas, se dice en términos concretos, que el código no se ocupa de los actos administrativos de los gobiernos de provincia que representan su autonomía, y las ordenanzas municipales, porque, como los edictos de policía, la facultad de prescribir el cumplimiento o abstención de determinados actos importa el derecho de imponer la represión, que asegura el cumplimiento del mandato.

Como consecuencia de esas opiniones, el proyecto declara en el artículo 2º que no comprende las contravenciones a las disposiciones de policía, municipales o de gobiernos locales.

El código penal modificó las definiciones de los dos proyectos a que nos hemos referido, pues se limitó a decir en el artículo 1º que era delito o falta toda acción u omisión penada por la ley. Sin embargo, aun cuando empleaba el término falta como equivalente al de delito, en ninguna parte del articulado se ocupó de faltas, reprimiendo solamente los delitos.

El proyecto de 1891, fué el primero en quebrar esas tradiciones que se legislara sobre faltas, y el de 1906 lo siguió en esos propósitos, como lo hemos recordado antes.

Por lo demás debe tenerse presente que la definición del artículo 1º del código en vigor, fué suprimida por la ley de reformas que eliminó ese precepto.

En la exposición de motivos del proyecto de 1891 se reconoce que ciertos hechos punibles presentan particularidades que los separan, si no los distinguen, de los delitos, y que esos hechos se encuentran previstos bajo la denominación genérica de faltas. Y después de referirse antecedentes, se sostiene que es conveniente incluirlos en el código penal, sin desconocer a las provincias el derecho a usar como sanción de sus disposiciones, leyes o reglamentos, la penalidad necesaria para hacer coercitiva su observancia.

El proyecto entendía, por consiguiente, que las faltas debían ser objeto de dos legislaciones: la nacional, contenida en el código y la provincial, emanada de las respectivas legislaturas. Sin embargo, no dejaba a las provincias una gran amplitud, porque el artículo 6º, solamente las autorizaba para castigar con multa hasta mil pesos e inhabilitación para el ejercicio de cargos locales o profesiones dentro de la jurisdicción. Se privaba asimismo del derecho de restringir la libertad, con excepción del caso en que no se pagara la multa.

El proyecto de 1906 que como ya se ha notado es menos resuelto en esta materia que el de 1891, pues no contenía la limitación, pareciendo de acuerdo con el mismo que la autoridad nacional y la provincial pueden legislar sobre faltas sin tener restricción de ninguna clase.

Nadie desconoce que las provincias necesitan como condición del cumplimiento de las leyes que dictan en ejercicio de derechos, imponer sanciones, es decir, erigir la infracción en falta. Si tal infracción consistente en hacer lo que se prohíbe o en no hacer lo que se ordena, careciera de una sanción, no fuera una falta, las leyes provinciales tendrían el alcance de consejos que los habitantes de dichos estados aceptarían o no. Todos estamos de acuerdo en ese enunciado, pero se dice que habiendo faltas de carácter general y otras de carácter local, el código puede ocuparse de las primeras y las provincias de las segundas.

La separación en la práctica es muy difícil. La legislación local depende de los intereses y necesidades locales, de los caracteres especiales del comercio y de la producción en cada núcleo, del grado de cultura de la población y de la distribución de la misma, de factores, en fin, que son particularísimos a cada región del país. Las faltas son las infracciones a esa legislación, que es variable y que no hay objeto ni ventaja en unificar.

Además, desde el momento que no se discute el derecho de las provincias para legislar sobre la materia, nos expondríamos a tener dos clases de faltas, las nacionales y las provinciales, y las dos podrían ser contradictorias, lo que es por cierto inconveniente.

El libro del proyecto de 1906 sobre faltas contiene un conjunto de enunciados, los que se dejan muchas veces sin sanción porque se refieren, a pesar de fijar pena, a los reglamentos locales, que serían en definitiva los llamados a establecer si deberían o no aplicarse, o en qué forma, las represiones consagradas en una ley nacional.

Hemos preferido por eso, de acuerdo con nuestra costumbre en esta materia, la que no hay objeto en contrariar, no legislar sobre faltas.

Entendemos, sin embargo, que no debe mantenerse la actual situación. La práctica hace que las provincias, en virtud del ejercicio de los derechos no delegados, y teniendo en cuenta que el código penal se ocupa sólo de delitos, legislen sobre faltas con toda amplitud. Eso puede dar lugar a que los estados particulares repriman las faltas con penas que en ciertos casos podrían ser superiores a las fijadas para los delitos. Conviene, en consecuencia, limitar a las provincias el derecho a imponer penas fijando un máximun. A esos efectos se introduce en el proyecto el artículo 5º.

Aplicación de la ley penal.

La legislación en vigor ha omitido el título sobre la aplicación de la ley penal que traen casi todos los códigos, como lo hacen notar los autores del proyecto de 1906. Hemos aceptado ese título, teniendo en cuenta las observaciones de la exposición de motivos, pero introduciendo modificaciones que eran indispensables para completar y mejorar el conjunto del proyecto.

El contenido del artículo 1º se conserva variándose su forma para dejarlo redactado de manera más precisa. La comisión ha tenido en cuenta para las referidas modificaciones lo expuesto en "La Reforma Penal" del doctor Julio Herrera.

En este artículo se ha agregado también un inciso 4º que contiene nuevas previsiones.

Puede presentarse el caso de un argentino que habiendo cometido un delito en el extranjero no fuese aprehendido por las autoridades del país en que delinquiró y lo fuese en cambio por las argentinas. En casos de esa índole, la extradición suele denegarse, pues es general la tendencia a juzgar al nacional por tribunales de su país. Nosotros hemos tenido el ejemplo en el caso tan comentado hace algunos años del hombre descuartizado. El delito se cometió en Buenos Aires, el delincuente era francés y fué aprehendido por las autoridades francesas, las que negaron la extradición y juzgaron al reo en su propio país.

El inciso a que se hace referencia para no modificar los tratados existentes y no introducir normas para los que puedan celebrarse en adelante, se limita a establecer que si la extradición fuere denegada o no fuere requerida dentro de un cierto término, el juzgamiento se hará por los tribunales del país.

De esa manera no se atacan los principios del derecho internacional, no se complica nada de lo existente, y se contiene una previsión de todo punto necesaria.

El artículo 2º del proyecto se suprime. Desde luego, como se ha observado por el doctor Herrera y en algunas de las respuestas recibidas por la comisión, era erróneo disponer el juzgamiento del extranjero que hubiere cometido un delito en el extranjero por los tribunales nacionales, cuando en el otro país no lo hubieren hecho. Pero hemos creído más oportuno no incorporarlo al código, porque la materia relativa a expulsión de extranjeros forma parte de una legislación especial que estudia en este momento otra comisión de esta misma cámara.

En el artículo 3º, donde se acepta de acuerdo con los principios en vigor el criterio de la ley más favorable al procesado o condenado, se introduce una innovación. El proyecto para hacer efectivas con relación al penado las consecuencias de la

nueva ley más benigna requiere: que el penado solicite su aplicación, y que las circunstancias invocadas consten en autos. Consideramos que ambas exigencias no son justicieras y por eso hemos proyectado la supresión de las mismas, estableciendo que los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho.

Cuando se dicta una ley nueva derogatoria de otra anterior o por lo menos modificadora de ésta, debe suponerse que la abrogada o reformada era defectuosa. Si en la ley nueva se disminuyen las represiones, para determinadas acciones o se declara que ciertos hechos antes reprimidos no son delitos, es evidente que mantener bajo el peso de un castigo a quien no ha cometido delito o conservarle la represión en la medida antigua, no es justo. Pero desde el momento que la ley nueva importa un reconocimiento de errores y la consagración de la justicia, es indudable que debe aplicarse, aun cuando los afectados no lo soliciten.

El castigo se impone por razones de interés público, y los derechos fundamentales a la libertad, a la propiedad y aun a la vida se limitan en la ley penal merced a ese factor básico. De manera que si él desaparece, la limitación del derecho debe desaparecer por ministerio de la ley misma, de pleno derecho y sin necesidad de requerimiento.

En este título 1º se han introducido dos disposiciones nuevas: la una tendiente a limitar la facultad impositiva de las provincias, llamadas a legislar sobre faltas con el objeto antes enunciado; la otra con el propósito de unificar la legislación penal.

Es sabido que uno de los propósitos que se persiguen en la sanción del código penal, es el de unificar todas las leyes dispersas de carácter represivo que existen sobre la materia. Los proyectos de 1891 y 1906 y los fundamentos dados por el diputado Moreno al presentar el suyo, demuestran lo disperso y hasta contradictorio de nuestra legislación represiva y acreditan la precisión de modificar esa situación anómala.

Por eso en el proyecto se han incluido las disposiciones de la ley federal que prevé los crímenes contra la nación, las del código penal y las de las diversas leyes que lo han modificado. Pero no basta eso. Es necesario que toda la legislación actual y la que se dicte en adelante conteniendo represiones, se vincule al código, el que debe fijar en esta materia la dirección y contener los principios a los cuales se sujetarán todas las disposiciones que se dicten. Hoy nos encontramos con que el código tiene un criterio en materia de complicidad y de encubrimiento y que él se modifica por la ley número 4189 en sentido general; pero que más tarde se cambia de manera particular para ciertos delitos en la ley número 7029,

como lo hace también entre otros asuntos en lo relativo a la pena capital para las mujeres.

Deseamos así una manera de legislar uniforme y que si se dicta una ley cualquiera que contenga represiones, después de la sanción del código, esa ley pueda referirse al mismo. A esos propósitos responde el nuevo artículo 40.

Se ha observado que el código penal debería limitarse a legislar de los delitos cuyo juzgamiento corresponde a los tribunales ordinarios, dejándose para una ley especial los crímenes contra la nación. Se invoca para eso el precedente que representa la ley del 14 de septiembre de 1863, distinta e independiente del código penal. Para llegar a conclusión semejante no exista motivo alguno de carácter doctrinario, ni práctico.

La constitución nacional dice que el congreso dictará los códigos civil, comercial, penal y de minería, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según qué las cosas o las personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones. La ley fundamental dice, de manera bien categórica, que los códigos y por consiguiente el penal, serán aplicados por los tribunales federales o provinciales, de manera que no se comprende cómo puede entenderse que deba existir una ley represiva independiente para la jurisdicción federal.

Lo que se exige por la constitución es que haya un código para toda la nación y que éste se aplique según los casos por los diferentes tribunales.

Por lo demás, la justicia federal no sólo juzga los crímenes contra la nación, sino que tiene jurisdicción sobre los delitos comunes si se hubieren cometido en un lugar sometido a la autoridad de esa justicia y a eso debe agregarse que hay jueces, como los letrados de los territorios nacionales, que son al propio tiempo jueces federales y ordinarios.

SISTEMA PENAL DEL PROYECTO DE LAS PENAS

A. — Pena de muerte—

La supresión de la pena de muerte verificada en el proyecto tiene más carácter doctrinario que práctico, puesto que en el hecho las ejecuciones capitales se encuentran fuera de nuestro sistema represivo.

Doctrinariamente, la cuestión de la pena de muerte es una de las que más se debaten en el terreno del derecho y de la ciencia penal. No hay escuelas que la sostengan o la contraríen en absoluto, puesto que en todas hay abolicionistas y antiabolicionistas. Los apóstoles mismos del positivismo italiano, se encuentran en

desacuerdo, pues mientras Garófalo la sostiene, Ferri la rechaza y Lombroso la proclama, pero sólo para los reincidentes.

La discusión de los argumentos y de los contraargumentos acerca de un asunto que ha preocupado tanto a los diversos autores, sería larga e inadecuada. Basta, por lo tanto, que la comisión exprese para fundamentar su despacho el punto de vista en que se coloca y los motivos en que se apoya.

El viejo razonamiento de Beccaria, aun cuando parte de las ideas contractuales de Rousseau, abandonadas por la ciencia, no ha sido destruido. Este niega el derecho de matar al semejante, sosteniendo que nadie ha investido a los gobiernos de semejante facultad.

Los hombres libres al constituirse no han delegado en ninguna autoridad el derecho de matarlos. Por lo demás, si ese derecho existiera y pudiera por tanto disponerse de la vida, ¿por qué y con qué fundamentos habría de inculminarse el suicidio o la ayuda para consumarlo? El que lo realizara y pidiera colaboraciones, haría uso de un derecho y nada más.

Los códigos de todos los estados civilizados admiten la posibilidad del error en las decisiones judiciales, y para repararlo, reglamentan el derecho de revisión, esto es, el derecho de pedir se juzguen de nuevo los actos y los hechos, cuando aparezcan elementos antes desconocidos. Ese derecho permitió en Francia la rehabilitación de Dreyfus.

Pero es indudable que para usarlo es necesario que el sujeto exista, puesto que si éste desaparece como consecuencia de la pena, la reparación no se puede producir. ¿Cómo, entonces, conciliaría el derecho estas dos situaciones tan precisas en su contradicción: por un lado la ley reconociendo el error posible y dando elementos para repararlo, y por otra la misma ley, negando en absoluto la reparación por imposición de una pena que suprime al sujeto?

La irreparabilidad frente a la ausencia de infalibilidad no se concibe en el terreno jurídico.

La conclusión sería y el absurdo se toca, que en los delitos gravísimos, en los más serios, en los que intervienen más factores y mayores complicaciones, no se deja margen para el error, mientras que en todos los otros sí, pues en los únicos en que no cabría la revisión sería en aquellos castigados con la última pena.

El derecho penal moderno exige que el delincuente satisfaga las responsabilidades civiles con su trabajo. Impone la asistencia a la víctima con la labor del victimario que debe dedicar el tiempo de su encierro a reparar con su obra el daño que causó. En el único caso en que esa regla se quebraría, sería en aquel en que se aplicara al delincuente la pena de muerte, pues desaparecería sin reparar,

causando, quizás con ese hecho que ya no dependería de él nuevas víctimas y nuevos desamparos.

El condenado debe vivir para reparar el perjuicio a la víctima y a su familia, debe devolver el mal que causó con los bienes que derivan de su acción y no imponerse la deserción forzosa que significa su eliminación definitiva.

El título sobre reparación de daños de nuestro código y de todos los que aceptan la pena de muerte, carecería de significado cuando se tratase de los delitos más graves, es decir, de aquellos en que es más necesaria la reparación. Esta sólo se daría para los delitos de importancia menor. ¿No resulta absurdo todo esto?

La ciencia penal conviene en que hay sujetos más peligrosos que otros y sostiene que existen algunos incorregibles o por lo menos considerados como tales. Lo difícil es decir, sin embargo, no en la teoría sino en la práctica, cuáles son los incorregibles, o más bien cuando se está en presencia de un sujeto que no podrá, sometido a cualquier régimen, ser objeto de modificación. El diagnóstico es científicamente imposible, de manera que no puede afirmarse que sea necesario matar; lo que procede es tomar medidas para que el delincuente deje de ser peligroso y cumpla con sus deberes sociales.

Pero, aparte de los motivos doctrinarios, más o menos generales, es necesario en materia jurídica tener en consideración las razones que se refieren al país para el cual van a dictarse las leyes. Nuestro código penal menciona la pena de muerte y no obstante haberse establecido para diversos casos de homicidio, las ejecuciones capitales se llevaron a cabo en contadísimas ocasiones. La ley de reformas la prodigó y a pesar de sus preceptos, después de su vigencia el número de ejecuciones no ha crecido. El hecho es revelador de lo que ocurre en la práctica.

Desde luego las provincias, usando de la facultad de dictar las leyes de forma, han colocado en los códigos de procedimientos requisitos que dificultan la aplicación de la pena capital. Otros estados han atribuido al asunto tal transcendencia que tienen los preceptos limitativos en sus constituciones. De esta manera la aplicación de esa pena no es uniforme, con lo que se contrarían los principios más elementales de la materia. Así, en la capital federal no se requiere para la condena que exista unanimidad de opiniones en los jueces llamados a fallar, mientras que ese requisito es esencial en algunas provincias.

Merced a estas dificultades, al esfuerzo de los jueces para no condenar, ya que la mayoría es contraria a la pena de muerte y a la conmutación en último término, la ejecución no se produce. De manera que el mantenimiento de la pena en la ley

tiene el inconveniente de ser un enunciado que evita la existencia de la pena que debe sustituir a la de muerte. Entre nosotros, a la persona a la cual, según el código, deberá corresponderle esta última, se le aplica la de encierro con los caracteres comunes, puesto que en el hecho, presidio, penitenciaría y prisión, son la misma cosa. Por eso también consideramos que debe eliminarse la pena de muerte y reglamentarse de una manera más seria las penas privativas de la libertad.

Invocamos también, como consecuencia de lo expuesto, razones de ambiente nacional.

La legislación comparada demuestra que la tendencia actual se encamina hacia la supresión de la pena de muerte. Grecia, Rumania, Portugal, Holanda, Noruega, Italia, Venezuela, Brasil y Uruguay, la han abolido, como asimismo diversos estados de la Unión Americana y una gran parte de los Cantones Suizos. En Francia se reclama la abolición y en Rusia, según las últimas noticias, se ha borrado de la legislación represiva. En Cuba acaba de iniciarse el mismo movimiento y una cámara ha votado ya la eliminación de la pena de muerte. En el proyecto de 1906 se mantiene, pero con restricciones que la dejan en condición de simple precepto, y nunca como pena única, pues en todos los casos para los cuales se señala, se deja a los jueces la facultad de condenar a presidio. Se coloca como pena alternativa. La comisión de 1906 contaba con dos abolicionistas, los doctores Rivarola y Beazley, habiendo presentado razones de peso para sostener su tesis el primero de los nombrados, tanto en el seno de la comisión, como en su último libro "Derecho Penal Argentino".

Esta comisión, por todos esos motivos, la ha suprimido.

B. — Penas privativas de la libertad—

El código vigente enumera cuatro clases de penas de encierro: presidio, penitenciaría, prisión y arresto. Dichas penas se diferencian poco o nada, si se tiene en cuenta la manera de cumplirlas. En casi todas nuestras cárceles se encuentran juntos los condenados a presidio, penitenciaría, prisión y arresto, y en muchos casos, juntos con los penados se colocan los procesados y aún los infractores. Estos inconvenientes se deben a la falta de establecimientos y a la circunstancia de ser las cárceles de jurisdicción provincial, no teniendo mucho de los estados federales, elementos para construirlos, ni conveniencia de hacerlo, por el escaso número de penados destinados a ocuparlas.

Desde el momento que esas penas no se cumplen, y desde que esa situación se mantiene a pesar del código y a contarse desde su vigencia, parece inadecuado, insistir en ellas, pues como dice la exposi-

ción de motivos de 1906 no hay objeto en mantener cosas inútiles. Sin embargo, si tales penalidades fueran convenientes y si la doctrina y el ejemplo extraño, ya que el nuestro no lo podemos invocar, nos demostrara que era necesario conservaras, sería preciso hacer el esfuerzo y crear los establecimientos requeridos. El movimiento científico y la experiencia ajena, nos dicen que esas divisiones de la pena de encierro con nombres diferentes, no representan ninguna ventaja, tendiéndose a la reducción de las mismas en todas partes.

La exposición de motivos de 1906, recuerda que el código de Holanda y el proyecto francés reducen las penas privativas de la libertad a dos: prisión y detención. Y recuerda acertadamente otros antecedentes doctrinarios que se pronuncian en el mismo sentido.

La ciencia y la práctica del momento repudian los artificios, tendiendo a cimentar las instituciones en bases serias que respondan a propósitos definidos.

El código de Noruega, promulgado en 1900, contiene también dos penas privativas de la libertad, que son la reclusión y la prisión, como puede verse en el artículo 15.

El proyecto alemán de 1909, acepta en los artículos 14, 15 y 19 las penas de reclusión, prisión y arresto. El proyecto suizo de 1903 admite las penas de reclusión y prisión en los artículos 26 y 27, y el proyecto también suizo de 1908 conserva la reclusión, la prisión y el arresto.

Debe advertirse que los proyectos referidos que conservan el arresto, lo hacen porque castigan dentro del código penal las simples contravenciones.

Se observa así que la tendencia general se encamina a la reducción de las penas privativas de la libertad, como lo hemos afirmado. No tenemos, por tanto, para mantener el sistema actual, ni razones doctrinarias ni precedentes nacionales, ni imposiciones de la práctica, desde que en el hecho las cuatro penas de nuestro código se reducen a dos y en algunos casos a una.

Hemos pensado por eso que deben mantenerse nada más que dos penas privativas de la libertad: la reclusión y la prisión.

La diferencia entre una y otra está en la clase del trabajo y en la disciplina carcelaria. Los condenados a reclusión podrán ser empleados en toda clase de trabajos públicos, mientras que los condenados a prisión sólo podrán ser empleados en labores dentro del establecimiento.

Lo esencial en materia carcelaria es que los penados trabajen y que aquél se imponga de manera obligatoria.

Es indispensable reglamentar por medio de una ley especial, complementaria del código penal, el cumplimiento de las penas, prescribiendo el régimen carcelario.

No hay objeto en incorporar esos pre-

ceptos al código porque la penalidad y el sistema para el cumplimiento de la misma son cosas diferentes. El código prevé los delitos y fija las represiones, debiendo ser aplicado por los jueces que absuelven o condenan.

El régimen penal depende de la autoridad administrativa y hace efectivo sobre los condenados que es a quienes se aplica. Es así extraño a los magistrados y al poder judicial.

Es indudable, sin embargo, que los fines perseguidos al imponer penas para los delitos, pierden eficacia si el régimen carcelario no se aplica de acuerdo con los propósitos que se tuvieron en vista al fijar las represiones. Por eso conviene establecerlo en una ley especial como lo dejamos manifestado.

El sistema debe ser uno para toda la nación. De lo contrario el mismo delito sería castigado de manera diferente según la provincia en que se hubiere cometido, lo que es contrario al sistema de la unidad, preconizado por la constitución.

No basta, sin embargo, uniformar el sistema penal y exigir a las provincias determinados requisitos para los establecimientos carcelarios, porque los gobiernos podrían alegar, para no cumplir con la ley, imposibilidades materiales que no podrían ser cubiertas por los preceptos reglamentarios. Es necesario, por eso, autorizar como lo dice el proyecto de 1906, a las provincias para que manden sus penados a los establecimientos nacionales, y obligarlas a su envío cuando no estuviesen en condiciones de cumplir el régimen legal en establecimientos propios.

El proyecto de 1906 contenía sólo la autorización. En el Congreso Penitenciario de 1914 el doctor Julio Herrera sostuvo que debía obligarse a las provincias a mandar los condenados por sus tribunales a los establecimientos nacionales cuando no los tuvieran para que el código penal se cumpliera por igual en todo el país.

La unidad, que es de justicia, había sido sancionada por el congreso penitenciario de Washington en el voto siguiente: "Todos los establecimientos de orden penal, incluso las casas de detención y las cárceles y prisiones locales, deberán estar bajo el control de una autoridad central."

En los Estados Unidos, donde los estados se dan sus propias instituciones en materia de fondo y forma, el problema es más difícil de solucionar que aquí, donde el código penal es uno para toda la nación y donde basta dictar la legislación adecuada. Sin embargo allí se siente también la necesidad y se expresa la aspiración.

Es innecesario abundar en más consideraciones. Estas fueron por otra parte desenvueltas en el informe antes referido del doctor Julio Herrera, relativo al Congreso penitenciario celebrado en Buenos Aires en el año 1914.

El proyecto, al prescribir las reglas ge-

nerales que fijan el carácter de cada pena, establece también que las mujeres y los menores deberán cumplir sus condenas en establecimientos especiales. Con respecto a las mujeres, eso se hace ya en la capital y en la provincia de Buenos Aires, pero con relación a los menores, como veremos más adelante, nuestra legislación es incompleta y nuestras prácticas deficientes. La prescripción legal es por eso conveniente, sin perjuicio del desarrollo que se confiera al asunto cuando se trate especialmente de los menores.

La ley de reformas, con el objeto de combatir la reincidencia, tomó del proyecto de 1891 la pena de deportación, la que fué discutida en este congreso, aceptándose, sin embargo, porque se señalaba como un remedio contra la repetición del delito.

La deportación debía consistir en la relegación por tiempo indeterminado en un paraje que señalara el poder ejecutivo. Esta pena se cumple en el presidio de Ushuaia, donde hay no solamente deportados, sino condenados a presidio, no existiendo, entre unos y otros ninguna diferencia de régimen. Es así innecesario crear una nueva pena, ya que la deportación es el presidio o la penitenciaría, la reclusión usando nuestro término genérico, que se cumple en Ushuaia.

Hemos creído, por eso, que debíamos limitarnos a establecer que los reincidentes en los términos que el proyecto señala y los delincuentes considerados incorregibles cumplirán pena de reclusión en la cárcel de Ushuaia, o en las demás que se construyan al efecto. Si convalida, el poder ejecutivo podría hacer el ensayo de la colonia o del trabajo en canteras en lugares lejanos creando allí los establecimientos del caso.

De modo que la relegación se podría aplicar a juicio del magistrado para el delincuente que considere incorregible y para el reincidente. Para el primero es una forma de la condena pronunciada, para el segundo es una penalidad accesoria.

El régimen a que deben sujetarse los relegados se prescribirá en la ley sobre establecimientos carcelarios, lo mismo que el de la penalidad.

Los preceptos relativos al producto del trabajo del condenado no sufren modificación en el proyecto.

C. — Accesorios de las penas privativas de la libertad

Las penas de reclusión y prisión llevan determinadas accesorias, relacionadas con la capacidad del condenado. Ellas están impuestas por la privación misma de la libertad y no son objeto de discusión. El proyecto ha hecho, sin embargo, algunas modificaciones sobre el código y sobre el proyecto de 1906, que conviene remarcar.

La inhabilitación como accesoria en las penas de encierro se explica por sí mis-

ma y se encuentra universalmente aceptada. El hecho de estar el sujeto privado de su libertad, lo inhabilita para los actos de la vida civil.

El proyecto extendía esa inhabilitación al tiempo de la condena y privaba durante la misma de todos los derechos civiles, menos el de testar. La comisión ha introducido dos modificaciones: una relativa al tiempo en que debe regir la pena accesoria, y otra respecto a las excepciones a la regla general sobre privación de los derechos civiles.

Se ha observado por el doctor Julio Herrera, con toda razón, que la inhabilitación por el tiempo de la condena, o sea la prohibición de ejercer derechos a una persona que no se encuentra en condiciones de ejercitarlos, carece de significado. Una cosa es la inhabilitación que impide el desempeño de cargos públicos y otra es la privación de derechos civiles. La primera debe regir para después de la condena, como lo disponen todos los códigos menos el español y algunos americanos, mientras que la segunda debe mantenerse mientras dure el encierro.

La privación de derechos civiles no es una pena sino un accesorio indispensable, que no tiene objeto represivo sino tutelar, desde que subsana un estado de incapacidad.

La inhabilitación es una pena, que puede ser única para ciertos delitos, o sea principal, o accesoria para otros con relación a las penas principales que los castigan.

El que ha sido condenado a una pena de encierro grave carece de capacidad para desempeñar funciones públicas, pues no se le puede considerar digno de las mismas. Mientras aquél persiste, la imposibilidad es material y sería innecesario establecer la prohibición. Es para después de cumplida la pena que debe establecerse, pues no cabe suponer que el penado recién cumplido tenga aptitud para ejercitar funciones que encierran honores y confianza. Sólo después de mayor tiempo y de la prueba de la libertad, pueden declararse terminados los efectos de la condena.

Con referencia a la privación de derechos civiles encontramos conveniente dar al condenado el derecho no sólo de testar, sino de reconocer hijos naturales y contraer matrimonio "in extremis". Se trata de no perjudicar a personas de la familia a quienes no deben alcanzar las consecuencias de la condenación.

La privación de derechos civiles, como antes se ha establecido, dura mientras se cumple la pena. Esto es, mientras el sujeto no puede ejercitarlos. Cuando la libertad sobreviene la incapacidad desaparece.

Mantenemos lo que establece el proyecto respecto a la curatela, cosa que se hace ya en la práctica, puesto que al incapaz es necesario darle un representante. Y establecemos que siempre deberá privarse

al condenado de la patria potestad, cuando el delito, cualesquiera que fuere, hubiese sido cometido sobre los hijos del condenado o en perjuicio de los mismos. No es posible que mantenga su autoridad sobre los hijos y el derecho a la administración de los bienes de los mismos un padre que se ha hecho indigno de esas facultades, que suponen confianza ante el hecho del delito.

D. — Libertad condicional—

La ley vigente atribuye al condenado el derecho de pedir gracia cuando ha cumplido los dos tercios de la pena de presidio o penitenciaría por tiempo determinado o cuando ha cumplido quince años en las condenas a presidio o penitenciaría por tiempo indeterminado. La condición de la gracia estriba en el hecho de haber dado muestras de una reforma positiva en el último tercio del tiempo o en los últimos ocho años, según el caso. En la práctica se ha entendido que la buena conducta del penado hace suponer la reforma positiva.

El sistema dominante, tiene diversos inconvenientes. Desde luego, no se extiende nada más que a los condenados a presidio o penitenciaría, lo que trae una notoria injusticia, pues un condenado a tres años de prisión, por ejemplo, no puede solicitar la gracia y debe cumplir los tres años, y a un autor de delito más grave y castigado por igual tiempo de penitenciaría puede libertarse después de cumplir dos años.

El término gracia está mal empleado, porque si fuera una gracia, no sería un derecho, y la ley, a pesar de usar esa palabra, supone el derecho diciendo que se tendrá el derecho a la gracia.

La sociedad, cuando reduce una pena porque el condenado tuvo irreproachable conducta, lo supone regenerado y en condiciones de ser devuelto a la misma. Pero eso es sólo un supuesto, que puede ser desautorizado por los hechos. No debe, entonces, desprenderse de toda facultad quien otorga el beneficio. Debe, por el contrario, reservarse la posibilidad de revocar la libertad concedida, cuando el penado cometiére un nuevo delito o se sus trajere al contralor que supone la residencia.

Aceptamos por todo esto la terminología del proyecto y la institución tal como la reglamenta el mismo, estableciendo la libertad condicional para los penados que han cumplido determinada parte de su pena de encierro.

Desde luego, para poder usar de la libertad condicional, es necesario que la condena sea a tiempo mayor de tres años, lo que no importa una incongruencia ni una contradicción con las observaciones hechas antes, desde el momento que para el condenado a menos tiempo cabe la con-

dena condicional, la que sólo no procede para los reincidentes y para los sujetos a quienes no convenga aplicarla a juicio del tribunal.

Hemos suprimido en el proyecto definitivo cuando trata de la revocación lo relativo a tentativa de violación de residencia, por considerarlo vago y susceptible de abusos.

E. — Producto del trabajo del condenado.

La comisión ha conservado sin verificar alteraciones el artículo del proyecto relativo al producto del trabajo del condenado. El precepto se explica por sí mismo. Desde el momento que el penado trabaja y obtiene un salario, el destino del mismo debe determinarse, puesto que el condenado por el hecho de la condena se convierte en un incapaz. En primer lugar debe dedicarse el dinero del reo al cumplimiento de sus obligaciones, tanto las que resultan de la causa como las que se refieren a su familia y en segundo a formarle un fondo que deberá serle entregado a su salida.

Las autoridades administrativas deberán reglamentar todo lo relativo al peculio con el objeto de que al penado se le forme realmente un fondo. Hoy, en algunas cárceles donde se trabaja, los condenados perciben salarios, los que muchas veces se gastan por ellos en los mismos establecimientos, adquiriendo objetos de comerciantes que tienen la concesión o el permiso de venta. Eso, que constituye una irregularidad, evita la formación del peculio.

En la provincia de Buenos Aires existe una reglamentación que obliga a las autoridades carcelarias a depositar en el Banco de la Provincia el peculio de los penados, debiendo formarse para cada uno, una cuenta especial.

Indicamos la necesidad de la reglamentación, para el cumplimiento más perfecto de los propósitos que se persiguen.

F. — Inhabilitación y multa—

Conserva el proyecto la distinción entre inhabilitación absoluta y especial.

Las diferencias entre una y otra, universalmente aceptadas, resultan de manera clara de los artículos respectivos.

Una sola modificación hemos introducido al respecto. El proyecto de 1906 disponía la pérdida de toda pensión, jubilación o goce de montepío para el condenado a inhabilitación absoluta. En realidad ese precepto consagraba una confiscación y desde luego la revocación de derechos antes adquiridos. Pero, si bien eso es exacto, no lo es menos que repugna mantener como pensionado por el estado a un individuo que debe, por sus actos antisociales, ser castigado por el mismo.

En el proyecto del doctor Moreno, te-

niéndose en cuenta que la condena en esa forma podría perjudicar a personas inocentes, como sería la familia, en caso de mantenerse aquélla con el subsidio, se consiguió la excepción, expresándose que si el penado tuviese esposa o hijos menores, a éstos correspondería la mitad de la pensión.

La comisión, manteniendo el principio, ha ido más lejos, estableciendo que si el penado tuviese esposa, hijos menores de cualquier clase o padres ancianos y desvalidos, la pensión corresponderá a éstos. Se trata de que el dolor del delito no vaya acompañado para esos seres inocentes de las dificultades materiales que sobrevendrían con la carencia de recursos.

Una de las penas más discutidas en teoría ha sido la de la multa. Se ha sostenido que no es igualitaria, pues a los ricos poco puede importarles satisfacerla mientras que a los pobres les resulta de imposible cumplimiento o por lo menos de un enorme sacrificio. El pudiente se libera siempre; el que carece de recursos, tendrá, probablemente que cumplir la prisión que se sanciona para quienes no la abonen.

Nuestro código no sólo consagraba la pena de multa para numerosos casos, sino que autorizaba a reemplazar en algunos de ellos la pena de prisión y siempre la de arresto, pagando una cantidad correspondiente al número de días que debía permanecer encerrado. La ley número 4189 modificó ese criterio impidiendo la sustitución de las penas corporales por sumas de dinero, pero mantuvo la pena de multa.

No obstante los inconvenientes que se han señalado, hemos creído oportuno conservarla, tal como lo hace el proyecto, pues como dice la exposición de motivos del proyecto de 1906 conviene para delitos leves, contribuyendo a que no se aumente la población carcelaria y a que no se afecte materialmente la persona del delincuente, sino en los casos de la falta de pago.

La pena de multa no es reformadora sino intimidatoria, pues a nadie ni aun a los delincuentes acostumbrados al encierro, les resulta indiferente la privación de un bien.

Aceptamos por eso, el criterio del proyecto defendido por los doctores Rivarola y Herrera, en las obras ya citadas, pero introducimos algunas modificaciones, en el articulado, con el propósito de subsanar, dentro de lo posible, los inconvenientes derivados de la falta de igualdad en la represión.

Desde luego, el tribunal deberá tener en cuenta para fijarla, no sólo los elementos generales de apreciación que se tienen en vista al juzgar cualquier delito, sino la situación económica del penado. Sólo en caso de falta de pago, se infligirá al reo prisión que no podrá exceder de un año y medio.

Para que no pueda encerrarse, transformando la multa en prisión, al que desea pagar y comprueba que podrá pagar, pero que carece de dinero en el momento de la condena, se colocan preceptos previos que examinaremos a continuación.

El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará que la primera se satisfaga, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado. Puede ocurrir y ocurre que el condenado sea una persona capaz con sus bienes o con su trabajo de satisfacer la multa. El tribunal debe quedar facultado para hacerla efectiva en dinero, antes de decretar la prisión, lo que tiene un doble efecto; impedir que quien desea pagar y pueda pagar sea encerrado, y evitar que se burle la condena, dejando a elección del reo el pago o la prisión, punto de tenerse en cuenta, porque hay quien prefiere ir preso antes de satisfacer una pena pecuniaria. Para todo esto el tribunal debe quedar ampliamente facultado, pero como podría burlarse el propósito, si los condenados evitasen el pago con maniobras, si el tribunal debiera esperarlos sin limitación, hemos considerado oportuno fijar el término de seis meses para la gestión. Transcurrido éste, si la multa no se ha hecho efectiva, la prisión deberá decretarse.

Debe hacerse presente que los seis meses consignados en el proyecto no constituyen un término que deba aplicarse en todos los casos. La comisión no pretende que los condenados a multa puedan esperar seis meses para pagarla. Lo que establece, es que el tribunal procurará el pago de la multa antes de decretar la prisión, tratando de hacer efectiva la condena sobre bienes del penado. De manera que si éste carece de bienes y de trabajo, la prisión se impone. En cambio, si los tiene, el tribunal debe perseguir el cumplimiento, no debiendo emplear nunca más de seis meses. Pasando este término, si no se ha hecho efectivo el pago, se aplicará la prisión correspondiente.

La libertad del condenado es lógico que sobrevenga en cualquier momento en que pague, debiendo en caso de haber cumplido una parte de la pena corporalmente, verificarse el descuento del caso.

G. — Efectos e instrumentos que provengan del delito

El proyecto, repitiendo disposiciones vigentes, declara el decomiso de los efectos que provengan del delito y de los instrumentos con que aquél se ejecutó, exceptuando, naturalmente, los objetos que perteneciesen a un tercero no responsable.

Actualmente los efectos e instrumentos decomisados quedan en los juzgados o policías y de tiempo en tiempo se venden devolviéndose a la circulación, armas y objetos que no pueden servir sino para repetir hechos delictuosos. La generalidad

de las personas rechaza el propósito de adquirir armas viejas con las cuales se han cometido crímenes. Los únicos que pueden concurrir a los originales remates que hoy se hacen de esos instrumentos, son los individuos azevados al delito, a quienes la misma justicia proporciona elementos baratos para que continúen ejerciendo sus actos antisociales.

Consideramos oportuno por eso, prohibir semejantes ventas y declarar que los materiales de los instrumentos decomisados deberán usarse por las provincias o ser enviados al Arsenal de Guerra de la nación.

H. — Prisión preventiva—

Conserva el proyecto las disposiciones relativas al cómputo de la prisión preventiva, que mejoran los que dominan en la legislación vigente. En la actualidad con tres días de prisión preventiva, se cumple uno de presidio, y con dos, uno de penitenciaría. En la práctica y dada la demora considerable que sufren muchos procesos, tanto en la capital de la república como en las provincias y ante todas las jurisdicciones, como si la demora fuera una mala característica nacional, se producen consecuencias injustas con el sistema dominante.

Un sujeto condenado a cuatro años de presidio, por ejemplo, si su causa termina después de tres años de tramitación, resulta que ha estado encerrado esos tres años y sólo ha cumplido uno de la pena impuesta.

La prisión preventiva es, sin duda, un mal necesario. Se aplica al delincuente y al que no lo es, puesto que el pronunciamiento que declara culpable o no culpable, sobreviene recién en la sentencia. Es un mal necesario, porque la sociedad precisa tomar medidas de defensa y de precaución contra quien comete hechos calificados de delitos y esas medidas imponen el encierro. Cuando el delito no es de gran importancia y el sujeto puede no ser peligroso, la excarcelación evita el inconveniente del encierro preventivo, pero éste se hace indispensable en los casos más graves.

Cuando la condena fuere a prisión, computamos la prisión preventiva a día por día y sólo cuando fuese a reclusión la prisión preventiva se computa a razón de dos días por uno de la pena aplicada. La naturaleza de este castigo, la clase de delitos a que se aplica y el régimen a que necesariamente deberán someterse los condenados a la misma, justifica lo establecido en el proyecto.

Se fijan también con criterio amplio las demás equivalencias, dejando la mayor amplitud posible a los magistrados que deben aplicar la ley. Debe tenerse también en cuenta que colocándose la reclusión y la prisión en casi todos los casos graves, como penas alternativas, los jue-

ces pueden decidir en sus sentencias, según a qué pena condenen, la forma de verificar los cómputos.

CONDENACION CONDICIONAL

La institución de la condena condicional viene siendo reclamada en nuestro país de tiempo atrás por los estudiosos y las prácticas.

Estamos a ese respecto en franco retardo, pues la casi totalidad de los países civilizados la tienen y la aplican con notorias ventajas.

Todos los que han opinado acerca del código, la consideran necesaria, tanto, que el doctor Tomás Jofré, profesor de derecho procesal en la universidad de Buenos Aires, dice que si es fuera lo único bueno que tuviese el proyecto, sería bastante para que su sanción debiera verificarse sin demora.

El doctor Rivarola en su derecho penal, hace notar que la condena condicional se encuentra establecida en Inglaterra desde 1879; en Bélgica desde 1888; en Francia desde 1891; en Luxemburgo desde 1892; en el Cantón de Ginebra desde 1892; en Portugal desde 1893; en Noruega desde 1894; en Sajonia y Prusia desde 1895; en Baviera desde 1896; en Hamburgo desde 1896; en el Cantón de Valais desde 1899; en Tesino desde 1900; en el ducado de Brunswick, Cantón de Friburgo y gran ducado de Hesse desde 1903; en Italia desde 1904; en Bulgaria desde 1904 y en España desde 1908.

Esto solamente en Europa, pues las referencias del autor tomadas de Dorado no se dirigen a América.

Los diferentes congresos científicos celebrados desde 1895 han recomendado la institución de la condena condicional. El congreso penitenciario reunido en París en el año mencionado votó la siguiente declaración: "Las legislaciones que reconocen a los tribunales la facultad de acordar la suspensión de la ejecución de la pena a los delincuentes condenados a breves penas contienen las mejores disposiciones conocidas".

El congreso de Budapest declaró: 1o. "Cuando en los delitos leves concurren circunstancias que merecen especial consideración y el imputado no haya sido precedentemente condenado a penas restrictivas de la libertad personal, el juez puede pronunciar la remisión condicional de la pena; 2o. En el caso de que el condenado, durante el término de dos a cinco años del día en que la condena se ha vuelto irrevocable no haya cometido un delito sujeto a una pena restrictiva de la libertad personal, la pena le será perdonada; 3o. La remisión condicional de la pena puede ser concedida con caución cuando las condiciones del imputado no rinden posible el pago".

Por su parte la Unión internacional de

derecho penal, reunida en Bruselas en 1899, recomendó el sistema, votándose por el congreso la siguiente declaración: "La Unión recomienda a los legisladores de todos los países, la adopción del principio de la condena condicional, pero al mismo tiempo, recuerda la necesidad de reglamentarla, según las condiciones especiales de los diversos lugares, el sentimiento y grado de cultura de cada pueblo".

El doctor Herrera hace notar que el congreso de San Petersburgo de 1902, se ocupó también de este asunto, discutiéndose si la suspensión de la condena debía ser declarada por la administración, o por la justicia; resolviéndose que esta última autoridad debía pronunciarla.

En Estados Unidos se encuentra también difundida por la legislación local, que la ha aceptado. Se aplica también en Australia y ha sido aceptada por los proyectos alemán, austriaco y los diversos suizos. Se ha proyectado, igualmente, para el Japón y Grecia.

Existe por eso, como antes se ha dicho, asentimiento general respecto a esta institución, que constituye uno de los adelantos indiscutidos de la ciencia penal contemporánea, tanto que Bernaldo de Quirós ha dicho después de examinarla que es una institución de derecho de gentes.

Seguramente, de todas las discusiones producidas alrededor de las nuevas doctrinas que combatieron de manera tan decidida los viejos conceptos de la penalidad, rechazando los criterios de venganza y de devolución de mal por mal buscando infligir un sufrimiento al condenado, nada tan firme se ha conseguido como la condena condicional. Ella tiende a que se descongestionen las cárceles, a que no se impongan encierros inútiles y que se detenga con una simple amenaza a los autores ocasionales de hechos delictuosos.

Es evidente que esa institución será tanto más eficaz cuanto más ilustrados sean los jueces autorizados para aplicarla. Dada, sin embargo, la manera cómo se reglamenta, no constituirá nunca un arma peligrosa para la sociedad, sino por el contrario, de beneficios visibles.

La comisión acepta el proyecto de 1906 en sus términos generales y se refiere a la exposición de motivos del mismo, verificando sin embargo modificaciones que mejoran los conceptos y el articulado.

El proyecto adopta, y la comisión acepta, el sistema francés.

En Inglaterra, se suspende el juicio, la condenación, de manera que no se produce la sentencia condenatoria; en el sistema de la ley Beranger se dicta la sentencia y se suspende la aplicación.

Bastaría para que aceptáramos el segundo sistema que es el más difundido, considerar que es preciso, antes de suspender, definir la situación del reo, el que puede ser inocente y absuelto. ¿Por qué esperar, manteniendo a todos, culpables

y no culpables, en una situación idéntica? Nuestro sistema es para los condenados y no para los procesados; se suspende el cumplimiento de la pena, una vez pronunciada la sentencia.

Se ha propuesto por algunos teóricos el reemplazo de la condena por un sistema de educación, la que será siempre atractiva aunque difícil aquí donde los recursos son insuficientes para instruir y educar a los que no delinquen.

El proyecto, desde luego, admitía la condenación o sea la suspensión de la pena, con relación a los condenados a prisión por un tiempo que no exceda de dos años, excluyendo la medida en los casos de multa.

No existe, a juicio de esta comisión, ningún motivo para que se suspenda la condena en los casos de prisión y no deba hacerse en los de multa. Esa divergencia puede dar lugar a notorias injusticias que deben evitarse.

Así, una persona ordenada a un año de prisión, puede liberarse sin encierro alguno, pues corresponde suspensión de la pena si el tribunal lo encuentra oportuno. En cambio, otra condenada a multa, que supone la existencia de un delito menos grave, ya que las penas privativas de la libertad se dirigen siempre a los delitos de mayor importancia, debe ser encerrada, si no paga. Para la primera es posible la exención, para la segunda no, y sin embargo, la segunda ha cometido un delito de importancia menor.

Considera por eso, la comisión, que debe incorporarse la multa al sistema de la suspensión condicional.

El proyecto de 1906 autoriza la suspensión de los efectos de la condena, cuando la pena aplicada al reo no exceda de dos años. Los términos de las diferentes leyes y de los diversos proyectos son distintos y arbitrarios, puesto que no se fundan en ningún elemento definitivo.

Así la ley francesa, admite la suspensión hasta los casos en que se condena a cinco años, la inglesa hasta dos y la italiana, belga y portuguesa, hasta seis meses. El proyecto alemán que contiene diversas restricciones, consigna el término de seis meses y el suizo el de un año.

El punto medio en que el proyecto se coloca, es acertado y la comisión lo acepta.

El proyecto dice que el juez, para otorgar el beneficio de la suspensión, deberá tener en cuenta los antecedentes del reo, mediante información de la policía y demás pruebas que se consideren necesarias. La comisión ha modificado esa redacción de una manera que reporta mayores seguridades. En la forma reglamentada por el proyecto sería en definitiva la autoridad policial de la capital, provincia o territorio, según el caso, la que decidiera con sus informes sobre la procedencia o improcedencia de la condenación condicional.

Encontramos más acertado exigir al juez que forme criterio propio sobre la personalidad moral del condenado, requiriendo las diligencias personales que le permitiendo los informes necesarios y realizan. tan apreciar esa personalidad.

Los jueces no deben olvidarse que devolverán a la sociedad a un sujeto digno de observarse, desde que ha cometido un acto antisocial, y que se devuelve en la confianza de que no volverá a repetirlo. Por eso se prohíbe para los reincidentes o sea para los que han demostrado ya la tendencia a insistir en el delito.

El proyecto no tiene en cuenta los casos de concurso, como lo observa con acierto el doctor Herrera. Se trata de una omisión destinada a producir dificultades prácticas, puesto que serían los jueces los llamados a resolver los casos que se presentaran. Y como los criterios podrían ser divergentes, nos expondríamos, si el punto no se tocara, a que una ley que debe ser de aplicación uniforme, permita soluciones diferentes, según quién sea el que la aplique.

La condena condicional tiene por objeto evitar la cárcel a los delincuentes primarios que sean castigados con una pena de reducida importancia. Poco debe importar, entonces, que la pena se aplique por una sola o por más infracciones, pues lo que debe apreciar el magistrado es la personalidad del sujeto, objeto de la pena inferior a dos años. Pensamos por eso que debe extenderse al caso de concurso de delitos y así lo consignamos expresamente.

El proyecto incurre en un serio error al consignar el precepto del artículo 33. El doctor Herrera, en términos elevables, lo demuestra cuando dice: "El artículo 33 adopta, sin mayor examen, el plazo de cinco años que fija la ley francesa para el período de prueba, sin tener en cuenta que ésta, al fijar este plazo lo hizo porque ese era el término de la prescripción de las penas correccionales. Los autores del proyecto han olvidado que debían relacionar este término de prueba con el de la prescripción de la pena de prisión. Una simple consideración bastará para demostrar los serios inconvenientes de esa falta de concordancia".

"Supóngase un individuo condenado a dos años de prisión bajo condición. Dos o tres años después comete un nuevo delito; como la pena anterior está ya prescrita (artículo 69, inciso 3o., del proyecto), sólo se podrá aplicar la pena del nuevo delito. Y la disposición del párrafo c) ordenando la aplicación de las penas de los dos delitos y toda la economía de la ley, ¿en qué quedan? Se ve, pues, cómo es indispensable relacionar el plazo de prueba con los términos de prescripción de las penas". Si se entendiera que la prescripción se

interrumpe con la condena condicional las consecuencias podrían ser peores, pues una pena prescrita para el delincuente que se sustrajo, huyendo a la acción de la justicia, se aplicaría transcurrido el mismo término o sea el de la prescripción, al condenado condicionalmente.

Teniendo en consideración esas observaciones, la comisión ha relacionado los preceptos de la condena condicional con los de la prescripción, estableciendo que la condena se tendrá como no pronunciada si dentro del término de la prescripción de la pena el condenado condicionalmente no cometiere un nuevo delito. Si lo cometiere sufrirá la pena correspondiente al nuevo y la que le fué aplicada por el anterior.

Debe hacerse presente que esta observación fué también hecha en el congreso penitenciario reunido en esta capital el año 1914 por el relator doctor Octavio González Roura y aceptada por aquél.

Hemos considerado también oportuno dejar sin efecto lo que preceptuaba el proyecto de 1906 respecto a la revocación de la condena condicional cuando se descubrieron malos antecedentes al condenado.

La expresión es vaga y se presta a verdaderos abusos. Basta con prohibir la condena condicional para los reincidentes y autorizar al juez para otorgarla o no, según el juicio que él forme respecto al condenado. Para formarlo debió requerir antecedentes y formar criterio. Tuvo tiempo durante toda la secuela del proceso, en el cual se agotan en juicio contradictorio todos los elementos y antecedentes precisos para el fin. No tiene así significado eso de la renovación obligatoria si aparecieren malos antecedentes, los que es fácil presentar y hasta fraguar, con el agregado de que si no aparecieron o no fueron lo bastante eficaces para impedir el beneficio durante el proceso en que se debaten la acusación y la defensa, no es concebible que se acepten después, desapareciendo el contralor del juicio.

La comisión deja sin modificaciones el precepto relativo a las limitaciones de la condena condicional, por considerarlo razonable y acorde con el espíritu de la institución.

REPARACION DE PERJUICIOS

El delito crea para su autor una doble responsabilidad: la criminal que se traduce en una pena, y la civil que apareja una indemnización.

La responsabilidad civil, o sea la obligación de reparar el daño causado por el delito, es diferente de las demás obligaciones civiles de carácter contractual, producidas como consecuencia de la voluntad exteriorizada en el consentimiento.

Nuestra ley penal, en diversos artículos ha reconocido la existencia de esa obligación. Así, en el artículo 47 del código vigente, se establece que la pena sufrida no

extingue la obligación de reparar el daño causado; en el artículo 139 se consigna una regla especial de reparación del daño relativo a los reos de violación, estupro o rapto, los que deben dotar a la ofendida si fuere soltera o viuda, además de sufrir la pena; y en el artículo 176, de carácter general, no obstante estar colocado al final del título sobre revelación de secretos, se establece que las penas impuestas por el código son, sin perjuicio de las acciones del damnificado, para pedir la correspondiente indemnización.

La ley en vigor ha dicho además en el artículo 65 que si el penado no tuviese bienes de fortuna, el producto íntegro de su trabajo se destinará a satisfacer la responsabilidad civil en que hubiese incurrido.

Como puede observarse, en diferentes preceptos, se habla de la responsabilidad civil, sin tratar el asunto con la seriedad necesaria, pues se han colocado sólo artículos dispersos, sin fijar reglas precisas y sin establecer lo que era esencial, o sea cuál debía ser el alcance del pronunciamiento a dictarse por los jueces encargados de aplicar el código penal.

Expresamos nuestra conformidad con el sistema del proyecto de 1906 que es igual al del proyecto de 1891 y con las razones vertidas en la exposición de motivos de uno y otro.

Actualmente, a pesar de los preceptos del código penal, las acciones por indemnización de daños emergentes del delito, se entablan ante los jueces civiles, como demandas ordinarias que tienen los trámites comunes en esa clase de juicios. Debe, naturalmente, recurrirse al expediente que se tramita en la jurisdicción criminal, pero el juez procede con criterio propio y con abstracción del otro juicio.

Los inconvenientes de este sistema son notorios. Desde luego, el juez civil se encuentra imposibilitado para resolver acerca de la existencia de un delito que se juzga por otro magistrado y ante diferente jurisdicción. La calificación del hecho sería además una cuestión prejudicial de acuerdo con lo prescripto en el código civil en el artículo 1101.

Por otra parte, la prescripción de las acciones emergentes de un delito, se opera al año de la fecha en que éste se cometió, según lo establece el artículo 4037 del código civil, y como los procesos criminales es difícil que se terminen en el año, resulta anómala la situación, pues por un lado el afectado debe pedir la reparación civil antes del año y por otro el pronunciamiento en el fuero criminal se demora, a pesar de lo cual, y mientras tanto, la prescripción corre.

Debe tratarse siempre de simplificar y no de complicar. La justicia debe obtenerse con el menor esfuerzo y con el menor gasto y nada de esto se consigue con la duplicidad de asuntos.

Por todos estos motivos sintéticamente

expresados, aceptamos el sistema del proyecto.

Responsabilidad—

Los códigos antiguos, en concordancia con las ideas dominantes en las épocas para las cuales fueron sancionados, adoptaban, para castigar, el criterio de la intención. Los hechos previstos por las leyes como delitos se presumían cometidos con voluntad criminal y eran castigados en tal concepto, salvo la prueba contraria. Era necesario entonces para aplicar la pena partir de esa intención y hasta graduarla.

El principio desenvuelto por Tejedor en su primitivo proyecto es el que ha formado el espíritu de la ley argentina y el que ha dominado en las sentencias de los magistrados.

El doctor Tejedor, tomando como base el comentario oficial del código de Baviera, antecedente vetusto del nuestro, distinguía diversas clases de dolo y decía: "no pudiendo el legislador penetrar en el fuero interior del culpable para hallar la intención criminal, toma por base la manifestación exterior del crimen, el crimen realmente cometido".

"Pero no se atiene exclusivamente al resultado material y fortuito como se ha hecho muchas veces, sino que toma también en cuenta el elemento moral".

La ley partía así de la base del libre arbitrio, de esa facultad que permite según algunos filósofos, pesar las acciones antes de realizarlas y decidirse después de la deliberación, en el sentido que se crea oportuno. De esa facultad discutida apasionadamente y negada por pensadores eminentes, de esa facultad que si existiera sería sólo el patrimonio de espíritus muy evolucionados y sólo puesta en ejercicio con la tranquila deliberación, que no concurre cuando dominan las pasiones.

Partiendo de esos principios la ley hablaba de dolo, de creencias, intenciones, de voluntad criminal. El principio era que debían castigarse las acciones u omisiones penadas por la ley y que, producido el delito la voluntad criminal se presumiría, salvo que se probara lo contrario, esto es, la ausencia de esa voluntad.

El proyecto de los doctores Villegas, Ugarriza y García es aún más acentuado porque después de definir los delitos dice en el artículo 3o.: "la voluntad criminal es la libre decisión de cometer un hecho ilícito". Y no se detiene ahí, pues incorpora diversas disposiciones preceptivas y el conocido artículo sobre presunción de voluntad criminal.

Los comentaristas al llegar a esa parte de la ley que consideran básica, se extienden siempre en el estudio de la responsabilidad criminal, de las escuelas filosóficas y de las teorías jurídicas, para acentuar una vez más el principio de la

deliberación libre y de la decisión consciente.

Afortunadamente la ciencia no ha podido en los casos concretos reconstruir la situación mental del sujeto que ha delinquido, pues si le hubiera sido posible hacerlo y llevar la expresión de lo que ocurre a los estrados de los tribunales, es seguro que las absoluciones por falta de responsabilidad, habrían abierto las puertas de los encierros a los individuos más peligrosos. Pero como la prueba es más difícil, imposible casi, en los casos en que no existe una perturbación general, la presunción ampara a los núcleos sociales y permite el castigo, aunque haya existido la supuesta facultad para determinarse e incurrir en voluntad criminal.

El criterio de la voluntad criminal no es defensivo. El irresponsable, esto es, el que no tuvo voluntad criminal por imposibilidad de determinación, no puede ser objeto de castigo: luego el alienado, el inconsciente, el sonámbulo, el alcoholista, el sujeto hipnotizado, es decir, los autores por anormalidades o por el hecho de ser instrumentos de otros, deben ser absueltos y restituidos al medio social en que actúen. Si la sociedad incrimina teniendo sólo en vista la situación personal del individuo y su voluntad, en presencia de sujetos sin ese elemento, el castigo no procede.

Nuestro código sanciona ese principio, pues ha mantenido el precepto tradicional de la voluntad criminal presumida y ha declarado que no son responsables y por tanto susceptibles de pena los que han carecido de esa voluntad. Con ese sistema los criminales más feroces pueden substraerse a la pena y aún a las más elementales medidas de precaución. Se crea para los individuos el derecho al crimen, porque la sociedad acepta, en lugar de principios de defensa, reglas de filosofía vinculadas a principios religiosos.

La ley penal no tiene por qué crear problemas extraños al régimen de la misma. Bajo el punto puramente jurídico, en las altas especulaciones de la filosofía del derecho, todas esas cuestiones pueden y deben discutirse; pero una ley práctica, necesaria para la estabilidad social, no tiene para qué adoptar principios de escuela que obligan a disquisiciones de doctrina y dificultan la aplicación de los preceptos.

Las sociedades están regidas por una serie de reglas impuestas por la convivencia. Esas reglas, para evitar los estados anárquicos, tienen que ser mantenidas bajo determinadas sanciones. Los que violan esos principios atacando los derechos fundamentales sobre que reposan las organizaciones actuales, o sea los derechos a la vida, a la libertad, al honor, a la propiedad, etc., realizan actos contrarios a la estabilidad social y el conjunto debe reprimirlos por una necesidad de existencia. La represión debe graduarse de acuerdo con

la necesidad social, y como no deben perseguirse propósitos de venganza, odios, ni explacaciones, al desequilibrio que produce el crimen debe contestarse con medidas de precaución y educación sobre el delincuente.

El criterio antiguo al sostener que por el hecho de haber querido y realizado el acto corresponde una pena, es decir, un sufrimiento, ha desaparecido de la doctrina contemporánea que busca la defensa y la prevención. Pruebas patentes de ese cambio de orientaciones las ofrecen la condena condicional, la libertad condicional, las precauciones contra los menores delinquentes, las medidas de seguridad contra ciertos absueltos, la elasticidad de las penas y la individualización de las mismas.

Las leyes han ido evolucionando a medida que la doctrina ha ido imponiendo sus conclusiones en el dominio de la ciencia y que la experimentación ha demostrado, con la práctica, lo razonable de ciertas teorías. Pero muchos códigos aun habiendo aceptado los principios nuevos, no se han resuelto al abandono de ciertos términos que hoy carecen de significación y cuya conservación sólo tiene el alcance de un recuerdo con carácter histórico.

El código penal que nos rige, después de las definiciones tradicionales que consagraban no sólo la voluntad sino sus grados, tomando como principio el pensamiento y como fin la acción consumada, repetía en el artículo 6.º el precepto sobre presunción de la voluntad criminal.

El proyecto de 1891 suprimió las definiciones y encabezó el título sobre responsabilidad con el artículo 58 que establece: "en la ejecución de un hecho punible se presume la intención de cometerlo, a no ser que resulte lo contrario de las circunstancias particulares del proceso, o que las causas alegadas por el imputado o en su nombre para excluir o modificar su responsabilidad, sean verosímiles y no exista prueba en contrario".

Explicando el alcance del artículo, dice la exposición de motivos, que debe tomarse como gúfa del proyecto: "El problema relativo a los fundamentos de la responsabilidad es uno de los más graves, más discutidos y más erizado de dificultades que pueden presentarse. Los criminalistas investigan empeñosamente su solución para ofrecer a las legislaciones una base sólida en materia tan delicada e importante. La comisión no tiene para qué exponer las doctrinas y discusiones existentes sobre este asunto; y debe circunscribirse a explicar las reglas que ha consignado. Desde luego ha querido conciliar dos órdenes de intereses: los de la sociedad y los del individuo. Por ello le ha sido fácil hallar un punto de partida seguro e indiscutible. Es una verdad bien comprobada que, en la vida social, en la

"materia que ahora nos preocupa, el principio general es la responsabilidad: todo hombre responde de sus actos por lo que los ha ejecutado, porque son suyos, porque se presume que ha tenido el designio de realizarlos; y esto es más estrictamente cierto si se trata de acciones criminosas. La excepción es la irresponsabilidad. Por eso el artículo 58 del proyecto determina ante todo el principio general. En la ejecución de todo hecho punible, dice, se presume la intención de cometerlo; se presume, pues que ha querido ejecutar ese hecho y que, en consecuencia, ese hecho le es imputable. Esta cláusula es substancialmente idéntica a la primera parte del artículo 6 del código vigente; difiere sólo en las palabras; las palabras han sido variadas para hacer la forma más amplia y comprensiva. Se dice "hecho punible", en vez de "hechos clasificados de delitos", a fin de abarcar todos los casos posibles de acciones reprobadas e incriminadas por la ley, sea que se trate de delitos consumados, sea que se trate de tentativas. Se dice "intención" en lugar de "voluntad", porque la intención importa y precisa netamente el esfuerzo de la voluntad del individuo hacia el delito".

La reforma de 1903 suprimió las definiciones contenidas en el código, pero dejó el artículo 6.º donde se establece la presunción de voluntad criminal. Este artículo fué el único que quedó en pie en todo el título 1.º

El nuevo proyecto de 1906 mantiene el criterio del de 1901, pues encabeza el título sobre responsabilidad con el artículo 40, en el cual se dice: "en la ejecución de un delito se presume la intención de cometerlo, a no ser que resulte lo contrario de las circunstancias particulares del proceso."

Ese artículo dentro de la teoría antigua es el más perfecto de los examinados hasta ahora, pues los anteriores se concretaban sólo a las acciones y excluían de la presunción, seguramente por olvido a las omisiones que también pueden ser delitos.

La exposición de motivos no dice nada al respecto, lo que hace presumir que se aceptan los fundamentos que traza la del proyecto de 1891 antecedente del de 1906.

Rivarola en su "Derecho Penal Argentino" dice que concurren al delito dos elementos: el material, o sea la ejecución del hecho penado por la ley, y el psicológico. El agente puede haber obrado teniendo conocimiento de la relación posible entre el hecho y el daño a producirse queriendo que el efecto se produjera; o no se ha encontrado en aptitud de conocer esa relación, o aun conociéndola, una coacción externa le ha impedido obrar de distinta manera o ha querido el hecho y ha omitido reflexionar sobre las consecuencias posibles las que debió prever y evitar. En

el primer caso hubo voluntad criminal, en el último sólo ha concurrido culpa.

Y agrega: "pero esa voluntad criminal, que debe concurrir como elemento esencial del delito a fundar la responsabilidad del agente, es un procedimiento interno del ánimo que escapa, por lo general, a toda comprobación".

Sería, pues, lo mismo que decretar la impunidad de todos los delitos, requerir como base de la imputabilidad la prueba del elemento intencional, así como se requiere la del elemento material del delito".

Siendo la regla general que los hechos delictuosos se produzcan con voluntad criminal, la solución que concuerda con el sistema aceptado de enumerar las causas eximentes, es la de establecer como presunción legal la regla y eximir de la prueba, la excepción".

El criterio que enuncia el conocido penalista argentino explicando el alcance de nuestra ley, está bien de manifiesto en sus palabras y refleja un concepto generalizado entre los clásicos.

El libre albedrío se presume. El autor del acto responde del mismo porque lo cometió, pudiendo no realizarlo. La voluntad existe, pero como es difícil probarla, debe presumirse. El enunciado sólo del vetusto concepto, demuestra que no es firme, que no es justo y que es peligroso.

Decimos que no es firme, porque se apoya en la existencia de una facultad muy controvertida y acerca de la cual se han escrito muchos libros; que no es justo, porque presume concurrencia de una voluntad que es de difícil prueba, "que escapa por lo general a toda comprobación", aceptando su existencia en cuanto perjudica al sujeto; y que es peligroso, porque acreditándose que no concurrió la voluntad criminal, el autor es liberado, aun cuando esa libertad sea socialmente inconveniente.

El antiguo concepto de la retribución y la negación del dogma del libre albedrío ha debido traer, como dice acertadamente von Liszt, modificaciones en la legislación represiva. El triunfo de las nuevas ideas, agrega, se evidencia en el desarrollo que revela la legislación de los últimos años en los distintos estados cultos de Europa. El concepto dominante es el de la protección social contra el peligro que representa la delincuencia.

Pero no es necesario para resolver el punto de vista legal aceptar teorías viejas o nuevas. Para los fines de la ley represiva bastan conceptos sencillos, derivados de la necesidad social de castigar, sin perjuicio de las creencias personales y las teorías individuales.

Bajo el dominio de todas las religiones, de todos los sistemas de gobierno, de todas las instituciones políticas y sociales, no ha habido pueblo en el mundo, desde que se conoce historia, que no haya casti-

gado las acciones que se consideraron antisociales o que atentaban contra su organización. De manera que no se necesita una tesis, más o menos deleznable, porque eso es incurrir en sectarismos, sino adoptar el principio que ha dominado universalmente en todas las edades y en todas las sociedades.

El anteproyecto del código penal suizo, tan cuidadosa y largamente estudiado, no hablaba en ninguno de sus textos, desde el de 1894 al de 1903, del concepto general de imputabilidad. Pero cuando los comisionados presentaron en septiembre de 1913 el proyecto reformado, se introdujo un artículo con el número 14 que decía así: "Es punible aquel que en el momento de la infracción tenga diez y ocho años cumplidos y que no se encuentre en un estado mental que excluya la responsabilidad".

Ese artículo que representaba un regreso a los sistemas antiguos, duró muy poco, pues no aparece en el proyecto de 1915.

Jiménez de Asúa, en su obra sobre la unificación del derecho penal suizo, dice que tal precepto de vida tan fugaz no se echaba de menos para la inteligencia del conjunto.

Los proyectos suizos conservan, sin embargo, disposiciones según las cuales sólo se castiga al que actúa con intención, entendiéndose que obra con aquella el que sabiendo y queriendo, realiza el hecho que constituye el delito. No se fija ninguna presunción, pero se contiene el concepto para diferenciar el delito propiamente dicho, o sea el cometido con dolo, del realizado con negligencia.

El código de Noruega expresa que no cae bajo las disposiciones penales el que no hubiere actuado con propósito deliberado, salvo los casos de negligencia.

El proyecto del código alemán, en el capítulo destinado a la culpa, distingue los hechos voluntarios de los culpables y dice que obra voluntariamente el que ejecuta un hecho a sabiendas y con voluntad de ejecutarlo.

No contiene presunción y en la cuarta parte se limita a consignar las causas de exclusión y atenuación de la pena, expresando con referencia al primer punto, quiénes son las personas no punibles.

Lo esencial es establecer, como lo hacen los diferentes códigos de todos los países, que sólo se castigan las acciones u omisiones establecidas por la ley. Esa disposición para nosotros es de orden constitucional, es una garantía básica consignada en nuestra carta y no tenemos por eso necesidad de repetirla en el código. Desde el momento que sólo se castigan los delitos previstos por las leyes, es evidente que todo acto calificado de tal impone el proceso y el castigo, salvo los casos de excepción consignados en la ley. Es entonces inútil, dada la existencia de la regla constitucional, introducir preceptos

relacionados con una u otra teoría de la responsabilidad en el orden moral. Entre nosotros se castiga a toda persona que realice un acto u omita otro, cuando la acción o la omisión tienen una pena y se libera de ella el acusado cuando lo ampara una eximente. La mejor garantía social, está en suprimir la presunción establecida a base de una facultad interna, pues sin ella el castigo se impone cuando se comete el delito con las salvedades de la ley.

El sujeto es así imputable siempre, pudiendo no ser objeto de castigo, cuando procedió por algunas de las causales que lo eximen, según el código.

El precepto general carece así de importancia y su necesidad no se siente, puesto que la ley, por el hecho de dictarse, se aplica a todos y lo único que necesita fijar son las excepciones, o sea los casos en que el castigo no debe concurrir. Todo lo demás es redundante y tiende a que se lleven al campo jurídico y práctico disquisiciones teóricas de peligrosa discusión.

El doctor Herrera, que en su estudio "La reforma penal" dedica varios capítulos a la responsabilidad penal, dice, refiriéndose a la presunción de voluntad criminal consignada en el proyecto, que éste "insiste en el error que en otra ocasión criticamos severamente (se refiere al discurso pronunciado en 1903 en el honorable senado), al declarar en su artículo 40 que la intención criminal se presume en la ejecución de un delito".

"No sabemos explicarnos por qué en los diversos proyectos de códigos elaborados entre nosotros, se insiste en una disposición que es inútil y repugnante a los principios sobre que descansa la ciencia penal, y además peligrosa por los abusos a que se presta".

"Tal disposición no figura en ningún código moderno y sólo la encontramos aparte de algún otro país americano, en los códigos de España y de Baviera, de donde la tomaron el doctor Tejedor y nuestros codificadores".

"No nos convencen los razonamientos del comentario oficial del código bávaro y de Pacheco, el más autorizado comentarista del español. De ello parece más bien deducirse esto, que no es lo que el artículo dispone: que siendo la regla general que todo hombre está dotado de inteligencia y libertad, debe presumirse que en toda acción criminal, el que la llevó a cabo, gozaba de ellas y que si estuvo loco o borracho, o tuvo de cualquier otro modo alterado su espíritu, deben probarse estas circunstancias por su carácter excepcional. Pero nadie discute esto salvo el erigir, en presunción, en ficción, lo que es propio de la naturaleza humana, cual es la capacidad del dolo. Los distinguidos criminalistas hacen una confusión in-

"explicable de cosas muy distintas. El dolo, en efecto, se lo puede considerar bajo dos aspectos: el uno general, como perteneciendo en potencia a todos los seres humanos, por cuanto es un hecho psicológico de la personalidad humana, y por eso hay quien piensa que la teoría de la imputabilidad debiera llamarse "inimputabilidad", porque de lo que se trata es de la exclusión a priori de toda posibilidad de dolo en el hombre; el otro especial o individual, cuyo reconocimiento no puede someterse a reglas jurídicas establecidas en la ley, sino que debe constatarse en cada caso. La ley presume el dolo bajo este último aspecto, y los criminalistas citados razonan como si se tratara del dolo general, lo que es salirse de la cuestión y demostrar la falta de fundamento serio del artículo en cuestión".

El proyecto que presentamos a la consideración de la honorable cámara resuelve la cuestión responsabilidad con criterio moderno y humano; prescinde de rescabios expiatorios y aparta problemas trascendentes de psicología. Se limita a indicar los delitos y a fijar sus penas, teniendo en cuenta que sólo los previstos en el código pueden ser los castigados de acuerdo con un artículo de la constitución, y a establecer en qué casos la pena no concurre a pesar de haberse realizado un hecho, al cual la ley califica de delito. Los jueces, por lo demás, graduarán la pena en cada caso, de acuerdo con los límites elásticos que el código señala y de conformidad a las atenuantes y agravantes que no se enumeran, fijándose tan sólo los criterios.

De esta manera se confieren márgenes que permitirán la individualización de la pena reclamada por los criminalistas más notables, cuando afirman que la pena para ser eficaz no debe ser adecuada al delito, sino a la índole del delincuente que ha de sufrirla. El propósito del sujeto debe tenerse en cuenta, para apreciar el grado de peligro que represente el mismo a los efectos sociales.

Imputabilidad—

La regla genérica establece que toda persona que realice un hecho calificado de delito, incurrirá en la pena determinada en la ley. Esa regla tiene sus excepciones, pues existen casos en que el autor de la infracción no debe ser objeto de castigo. De manera que establecida la regla general corresponde fijar las excepciones o sea los casos en que no se puede castigar a la persona que ha incurrido en el hecho o en la omisión calificada de delito por la ley.

Hemos preferido cambiar el término "responsabilidad", tradicionalmente usado, por la palabra "imputabilidad", que precisa de manera más acertada el pensamiento moderno. Responsable es la per-

sona obligada a responder de sus actos o a satisfacer alguna carga. Responsable es el sujeto que delinque ante la sociedad, como entidad jurídica; responsable es el individuo con relación a otro, cuando le reclama algo con derecho, en las relaciones civiles, comerciales o de cualquier orden; responsable es la persona hasta con referencia a sus creencias religiosas. Responsabilidad es un concepto genérico que se aplica a todos, como consecuencia de actos y en los diferentes órdenes a que los llevan los actos mismos, las convenciones y hasta los misticismos.

Imputar es atribuir a una persona un delito o una acción. La imputación se produce como consecuencia del hecho o de la omisión. El sujeto, en el concepto clásico, tenía que ser moralmente responsable, para ser imputable. La persona, en el concepto científico, puede no ser responsable y ser, sin embargo, objeto de medidas precaucionales. Así, el que realiza el hecho, en estado de enajenación mental, debe ser absuelto, por ausencia de discernimiento, pero debe ser sometido a una reclusión que le impida causarse daño a sí mismo o producirlo a los demás. No es responsable, no es objeto de castigo, pero su acto autoriza medidas especiales a su respecto. El criterio expiatorio infiltrado en las legislaciones antiguas desaparece para dar paso al criterio social, según el cual todos los individuos son imputables, imponiéndose su responsabilidad y señalándose las excepciones.

Cabe entonces examinar esas excepciones a la regla general y determinar quiénes no son objeto de castigo.

Perturbaciones—

La sociedad al castigar reprime y previene. La sanción siempre ejemplarizada tiene por objeto evitar el crimen o su repetición. Se castiga al que discernir tomando contra él, por el peligro que representa, las precauciones necesarias. La ley penal contiene una sanción contra el que la infringe y encierra un freno contra todos los demás a quienes contiene con sus amenazas. Para que proceda su aplicación es necesario que recaiga sobre un sujeto normal, es decir, sobre una persona de situación corriente, que se dé cuenta del hecho que comete y de sus consecuencias. Si el individuo es anormal o no pudo en el momento del hecho tener conciencia de él mismo, la sanción resulta ineficaz y no debe concurrir. Pueden y deben, sin embargo, tomarse medidas de precaución para que los hechos no se repitan perjudicando a la sociedad.

Con todos los criterios, códigos y autores sostienen que no procede la aplicación de un castigo al sujeto que ha carecido de discernimiento o que no ha tenido la conciencia del acto realizado.

Nuestro código, en el inciso 1º, del ar

título 81 destinado a anumerar las eximentes de penalidad, contiene un precepto amplísimo, que permitiría, si fuera posible, la reconstrucción del estado personal del delincuente, la absolución repetida de los criminales más peligrosos. Declara exento de pena al que ha cometido el hecho en estado de locura, sonambulismo, imbecilidad absoluta o beoidez completa e involuntaria; y en general siempre que el acto haya sido resuelto y consumado en una perturbación cualquiera de los sentidos o de la inteligencia, no imputable al agente y durante el cual éste no haya tenido conciencia de dicho acto o de su criminalidad.

Tejedor, en su proyecto, era todavía más preceptivo, trayendo en el título 3.º de la parte general una larga enumeración de circunstancias eximentes. El código tomó la substancia pero concretó el pensamiento en términos más reducidos. El proyecto de 1906 precisó aún más la noción como lo explica Rivarola en la página 386 de su "Derecho Penal Argentino" declarando exento de responsabilidad al que ha resuelto y ejecutado el hecho en un estado de enajenación mental cualquiera, que no le fuese imputable. El mismo proyecto teniendo en cuenta principios científicos, preceptos de otros códigos y lecciones de la experiencia, autoriza la reclusión de los delinquentes irresponsables mientras fuere peligroso dejarlos en libertad.

El proyecto de 1891 explicado en la exposición de motivos contenía análogo concepto, el que ha quedado igualmente de manifiesto en las actas de la comisión que presentó el proyecto de 1906, publicadas en esa parte por el doctor Rivarola en su "Derecho Penal Argentino", antes citado.

El doctor Rivarola en sus "Bases y anteproyecto", publicadas en 1905, usaba los términos "perturbación mental", modificados en el proyecto del año siguiente por los de "enajenación mental cualquiera" a indicación del doctor José M. Ramos Mejía, que consideraba más comprensivo el segundo, como lo han puesto de manifiesto las actas antes aludidas.

El doctor Julio Herrera en su "Reforma Penal", expresa su disenso con el artículo tal como se encuentra en el proyecto, dedicando largas páginas al estudio del interesante asunto. El término enajenación comprende sin duda todos los casos que se conocen vulgarmente con el nombre de locura, no siendo necesario, como lo hace el código actual, verificar enumeraciones que nunca son completas, porque las enfermedades mentales son numerosas. Pero no es sólo la enajenación, lo que debe tenerse en cuenta; es sobre todo el estado del sujeto en el momento del acto. Si tuvo discernimiento y conciencia de lo que hacía, corresponde el castigo; si no concurrieron esos factores, pueden ser convenientes las medidas de precaución o las de orden curativo.

El proyecto de 1906, en los términos enajenación, no ha comprendido los casos

de hipnotismo, los de sonambulismo y otros en los cuales el sujeto no puede ser susceptible de pena. Por eso consideramos oportunas las observaciones del doctor Herrera y proponemos la modificación del inciso.

Pero antes de referirnos a las expresiones aceptadas, conviene recordar lo que dicen al respecto códigos y proyectos extranjeros que marcan normas en esta materia tan importante.

El artículo 27 del código holandés dice: "el que comete un hecho que no puede serle imputado a causa del desenvolvimiento incompleto o de perturbación morbosa de su inteligencia, no es punible". Consagra la ausencia de pena por falta de imputabilidad, como puede percibirse.

El código de Italia en el artículo 46 expresa: "No es punible aquel que en el momento en que ha realizado el acto se encontraba en tal estado de enfermedad mental que carecía de la conciencia o de la libertad del propio acto. El juez queda autorizado para ponerlo a disposición de la autoridad competente si considera peligroso dejarlo en libertad".

El proyecto de código penal ruso, según Herrera, establece en el artículo 35 que "no es punible el hecho cometido por un individuo que, sea por insuficiencia de sus facultades mentales, sea por alteración morbosa de la actividad de su alma, sea en un estado de inconciencia, no podría en el momento de la acción comprender la naturaleza y el sentido de lo que hacía, o dirigir sus acciones".

El proyecto alemán cuya parte general se encuentra transcrita en el trabajo del profesor de la Universidad de Barcelona, doctor Eugenio Cuervo Calón, titulado: "La Reforma de la Legislación Penal Alemana", dedica a este asunto los artículos 63, 64 y 65. Declara que no es punible aquel que en el momento de la acción estaba loco o imbecil, o se encontraba en un estado de inconciencia, de tal manera que por estas causas quedara excluida la libre determinación de su voluntad. Si esta determinación no quedara completamente excluida, pero se encontrase disminuida en alto grado, se aplicarán las reglas relativas a la tentativa. Cuando la causa de la inconciencia fuese la embriaguez se le impondrá la pena señalada para dicha acción ejercida con negligencia. Se autorizan por fin medidas de precaución contra las personas que realizan los actos en estado de anormalidad.

El código de Noruega en el artículo 44 declara que no hay acto culpable si en el momento en que se ha cometido el autor no podía comprender la naturaleza y la legalidad del acto, ya sea que la inteligencia no haya podido tener todo su desenvolvimiento o haya estado debilitada; o si por esas razones o porque estuviera bajo la influencia de un peligro presente, de una coacción o de un estado de alma particular, no hubiera sido dueño de sí mismo.

El proyecto suizo de 1903 en el artículo 16 declara que no es punible aquel que en el momento del acto no pudo actuar conforme a la razón por tener en ese momento su conciencia o su salud mental gravemente alterada. El proyecto se pone también en el caso de alteración parcial y en el artículo 17 autoriza la reclusión del irresponsable hasta que el motivo determinante de la internación haya cesado.

El último proyecto suizo o sea el de 1913, comentado por el profesor de la universidad de Madrid, doctor Luis Jiménez de Asúa en su obra "La Unificación del derecho penal en Suiza" dice en el artículo 14 que es punible aquel que en el momento de la infracción tenga 18 años cumplidos y no se encuentre en un estado mental que excluya la responsabilidad.

Puede notarse por los antecedentes invocados, que son los más modernos, la tendencia científica y legislativa del momento, la que, de acuerdo con la práctica y los casos, quiere proporcionar a los jueces elemento lo suficientemente flexibles para que individualicen las soluciones, prescindiendo de la enumeración que limita indispensables amplitudes.

La fórmula elegida teniendo en cuenta los elementos mencionados y otros muchos que no hay objeto en enumerar, se aproxima a la que preconiza el doctor Herrera cuando dice:

"Nuestra tarea sería incompleta si no manifestáramos la manera cómo creemos debe ser redactado el inciso que nos ocupa, de modo que pueda comprender, en su generalidad, todos los casos de irresponsabilidad de origen psíquico, para emplear los mismos términos de la comisión en su informe.

"No se nos oculta la dificultad de encontrar una fórmula breve y suficientemente comprensiva, que ofrezca la solución de todas las dificultades que pueden presentarse en la práctica, y, aun encontrada, la no menos grande de hacerla aceptar por todos, si se carece, lo que es nuestro caso, de la autoridad científica necesaria.

"Felizmente nuestra tarea ha sido singularmente facilitada por un texto satisfactorio que encontramos en uno de los proyectos del código penal, uno de los más científicos que se hayan publicado hasta hoy y que lleva la gran autoridad de sus sabios redactores. Como se comprende, una fórmula como la que buscamos es independiente de las peculiaridades de un pueblo, pues todos ellos, cualquiera que sea su raza o costumbres, reconocen las mismas causas de irresponsabilidad de origen psíquico.

"El proyecto que nos referimos es el ruso y el artículo el mismo que ya hemos transcrito y que ahora volvemos a repetir: Artículo 35. — No es punible el hecho cometido por un individuo que sea por insuficiencia de sus facultades

"mentales, sea por alteraciones morbosas de la actividad de su alma, sea en un estado de inconciencia, no podía en el momento de la acción, comprender la naturaleza y el sentido de lo que hacía o dirigir sus acciones.

"Este texto cuya redacción podría mejorarse, pues lo hemos traducido literalmente de la versión francesa, es en nuestro concepto preciso y no comprenda ni más ni menos de lo que él debe contener.

"Comprende todos los casos de irresponsabilidad de que hemos hablado en esta larga exposición, y no los que, como la locura moral o el intenso dolor, no son causas de irresponsabilidad, salvo, en el último caso, que se llegara a constatar, lo que nos parece imposible, que el dolor produjo tal perturbación psíquica que el agente no pudo comprender la naturaleza o el sentido de su acción, y, si tal cosa se pudiera comprobar científicamente, es evidente que el agente sería irresponsable".

La comisión ha precisado de manera más conveniente el concepto que se ha tenido en vista y que reflejan todas las leyes y todos los autores. No es necesario hablar de locuras en sus diversas manifestaciones, de idiotismo o imbecilidad, como no es preciso referirse a los estados anormales de sonambulismo o de hipnotismo. Basta con el enunciado general.

Las perturbaciones pueden ser permanentes, como sucede en los casos más característicos de enfermedades mentales, o transitorias.

Estos últimos estados pueden obedecer a influencias físicas como ocurre con el alcohol y otros tóxicos o a coacciones psíquicas. La enumeración no es posible y debe ser el juez en cada caso el que estudie la perturbación y averigüe si el sujeto pudo o no comprender la naturaleza del acto y su sentido, como asimismo dirigir sus acciones.

La comisión acepta la medida de precaución aconsejada en el proyecto y en los códigos más adelantados o sea la relativa a la reclusión del agente enfermo en un manicomio de donde no debe salir hasta que haya desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás.

Pero el proyecto es incompleto en esta parte porque autoriza la reclusión únicamente para los casos en que el agente se encuentre atacado de locura o sea de perturbación con carácter permanente. El sujeto puede haber actuado sin conciencia del acto sin ser un alienado, como ocurre en ciertos casos de ebriedad, vale decir, en aquellos en que ha sido absoluta e independiente de la voluntad del acusado. En estos y en los demás casos se autoriza al tribunal para ordenar la reclusión del agente también hasta que haya desaparecido su carácter de individuo peligroso.

Esta medida es salvadora sobre todo para los alcoholistas y demás sujetos acostumbrados a ingerir venenos.

El proyecto arma, por consiguiente, a la sociedad de los elementos necesarios para defenderse de los individuos anormales, autorizando precauciones que impidan la repetición de los hechos.

Fuerza física o amenazas—

La comisión ha aceptado en esta parte las conclusiones del proyecto de 1906, no obstante las críticas hechas por el doctor Herrera. Todos los códigos y todos los autores convienen en la justicia de esa exigencia, existiendo divergencias de términos más que de conceptos. Hemos preferido adoptar los del proyecto, porque aparte de precisar de manera acertada el concepto, se encuentra de acuerdo con nuestros antecedentes legales y conclusiones de la jurisprudencia.

Otras eximentes—

Por las mismas razones hemos aceptado los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 41 del proyecto de 1906, debiendo referirnos a la exposición de motivos del mismo, al proyecto y exposición de motivos de 1891 y al "Derecho Penal Argentino" del doctor Rodolfo Rivarola.

Defensa legítima—

La comisión ha aceptado el artículo del proyecto de 1906, en cuanto se refiere a defensa legítima, punto sobre el cual se ha escrito mucho y se han pronunciado numerosos fallos judiciales con abundancia de citas y antecedentes.

Conserva el proyecto las exigencias tradicionales que se requieren para que concurre la defensa legítima: esto es la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedir la o repeler la y la falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Incorpora el proyecto los casos del que rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas y el del que se encontrare a un extraño dentro de su hogar siempre que hubiere resistencia. Estos casos se encuentran comprendidos en el código vigente aunque en incisos separados.

La exposición de motivos de 1906 se limita a ligeras indicaciones, seguramente teniendo en cuenta que el mismo precepto se encontraba en el proyecto de 1891, donde se indican las concordancias, y en cuya exposición de motivos se dice que la defensa propia queda consagrada en los mismos términos y condiciones que la establece el código. Dicha exposición no trae más fundamentos, probablemente porque se consideró que la materia era demasiado conocida.

Debemos por tanto referirnos como an-

tecedentes de la disposición, a los que trae Rivarola en su "Derecho Penal Argentino", pág. 426 y siguientes núm. 18; 19 y 20.

El derecho de defensa se explica por la necesidad que impone en salvaguarda de la propia persona el rechazo de la fuerza con la fuerza. Es un derecho fundamental universalmente reconocido, cuyo fondo no se discute. Las divergencias se producen en la doctrina y en la práctica cuando se trata de fijar sus límites y es por eso que la ley debe tener la mayor precisión posible. El doctor Herrera, después de formular una crítica muy erudita al proyecto de 1906 y de dejar constancia del silencio de la exposición de motivos, propone una nueva fórmula concretada en las siguientes palabras: "El que, en defensa de su persona o de sus derechos o de la persona o derechos de un tercero y por medios proporcionados a las circunstancias rechace una agresión ilegítima y grave", no será castigado.

Como puede verse, la redacción propuesta no difiere en sus conceptos de la contenida en el proyecto.

Es exacto, como observa el autor de la reforma penal, que el proyecto no prevé el exceso de defensa y aun cuando, dado el sistema de atenuantes y agravantes, la elasticidad de las penas y la amplitud del arbitrio judicial, los jueces podrían individualizar el castigo, teniendo en cuenta todas las circunstancias, hemos aceptado la observación. En consecuencia se ha incorporado un nuevo artículo que se refiere al exceso en los límites impuestos por la autoridad o por la necesidad en términos generales, estableciendo que corresponderá en estos casos la pena impuesta para el delito por culpa o imprudencia. De esta manera se establece la transición entre situaciones extremas.

Menores—

Uno de los puntos que ha dado lugar en nuestra legislación penal y social a mayor número de críticas acertadas, es el que se refiere a la situación de los menores delincuentes. Puede afirmarse que si en alguna parte es atrasadísima y anacrónica nuestra ley penal, es en ésta.

El código vigente dispone que se encuentran exentos de pena los menores de diez años y los mayores de diez y menores de quince, a no ser que hayan obrado con discernimiento. (Incisos 2 y 3 del artículo 81).

Quiere decir entonces que si el menor tiene menos de diez años la autoridad no ejerce sobre él ninguna acción, cualquiera que fuese el delito cometido y el peligro que represente el desarrollo de ese pequeño ser pervertido; y que si tiene más de diez años y menos de quince, la autoridad debe averiguar si tuvo o no discernimiento. Si no ocurre esa calidad el pequeño delincuente es libertado, sin que se ejerza sobre él ninguna medida y si concurre aqué-

lla, se le trata como si fuera un adulto, sometiéndolo al régimen ordinario del juicio y del castigo. Basta el enunciado para comprender todo el absurdo que encierra y todo lo que representa esa legislación vetusta para un país civilizado. La exposición de motivos del proyecto de 1891, concreta de una manera muy precisa las ideas en esta materia, diciendo con respecto al código todavía en vigor: "el primero de estos preceptos (se refiere al inciso 2.º del artículo 81) declara irresponsable siempre al menor de diez años. En su virtud, cuando se trate de un acto criminal, realizado por un menor de diez años, bastará comprobar que el agente no ha cumplido esta edad para que se suspenda toda medida y todo procedimiento y se sobresea libre y enteramente en la causa. Es la única comprobación que deberá hacerse. El segundo precepto considera o presume irresponsables también a los mayores de diez años y los menores de quince, pero admite la prueba contraria, la de que hayan obrado con discernimiento, caso en el cual serán responsables y se les impondrá la pena que merezcan".

Y agrega: "Hemos reemplazado las dos disposiciones aludidas (los incisos 2.º y 3.º del artículo 81) por otra que exime de responsabilidad al menor de catorce años. Extendemos la responsabilidad del menor sin limitación alguna hasta los catorce años, no porque a nuestro juicio el discernimiento no empiece antes de esa edad, sino por razones de otra índole. Estamos persuadidos de que el discernimiento, la apreciación de la moralidad o inmoralidad de los actos, de ciertos actos sobre todo como los delitos, comienza generalmente antes de los diez años. Empero, un menor de catorce años, en virtud de sus cualidades personales diversas, su desarrollo incompleto, de su escasa fuerza para resistir a las tentaciones, de los cambios que en él se han de operar necesariamente y de la serie de datos positivos que lo diferencian de los mayores de esa edad, aunque comprenda la criminalidad de un hecho y lo ejecute a designio, no podrá ser equiparado a un adulto para responsabilidad de igual manera y someterlo a la misma penalidad. La aplicación a los impúberes en algunos casos, cualesquiera que sean, de los medios represivos calculados y establecidos para los adultos, importa prescindir del primer elemento de las condiciones personales del agente, que deben tenerse en cuenta para fijar la represión; y dará siempre resultados negativos y perjudiciales a los impúberes y a la sociedad: a los primeros porque quedarán inscriptos en el grupo de los criminales y así habrán salido uno de los mayores obstáculos que podrá preservarlos del delito: el temor de ser confundidos con los bribones y el

"deseo de mantener en los demás la creencia en su honestidad; a la sociedad, porque que habrá gastado simplemente su dinero cuando no lo haya hecho para alimentar un reincidente futuro. Los menores de catorce años, declarados absolutamente incapaces por el código civil, no pueden ni deben estar sujetos a las penas establecidas para los adultos".

La exposición de motivos se extiende en consideraciones tendientes a justificar el artículo que es análogo al proyectado quince años más tarde por la comisión que redactó el proyecto de 1906, como puede verse comparando los respectivos artículos y los fundamentos de este último.

Rivarola en su "Derecho Penal Argentino", dice con mucho acierto, que la ley vigente es defectuosa por tres motivos: 1.º Porque presenta una contradicción injustificable con la disposición del código civil que declara la incapacidad absoluta de los menores impúberes, (Artículo 54); 2.º Porque hace depender la irresponsabilidad del menor de quince años de la falta de discernimiento, cuando también el menor de diez años puede tener discernimiento que falte a otro mayor de esa edad; 3.º Porque declarada la irresponsabilidad del menor delincuente, termina toda jurisdicción sobre el sujeto, el que debe ser devuelto a la sociedad, sin importar que lo sea con peligro para sí mismo y para los demás.

El código incurre además en un defecto fundamental que no ha sido remarcado por sus críticos y consiste en que aplica aún para los menores de 15 años y mayores de 10 el criterio ordinario empleado para los demás delincuentes. En efecto a cualquier persona que carezca de discernimiento, cualquiera que sea su edad, se le declara irresponsable. El loco, el ebrio en cierta condición, el sonámbulo, el hipnotizado, el dominado por una pasión avasalladora, son personas sin discernimiento a las cuales no se les aplica castigo. De manera que el criterio para los menores no es de excepción a pesar de la apariencia.

La cuestión del discernimiento es por otra parte difícil de dilucidar. Rivarola en su "Derecho Penal Argentino" precisa bien los caracteres del problema cuando dice: "la cuestión del discernimiento presenta dificultades de las cuales me ocuparé en seguida. Aunque subsiste en la ley francesa, la práctica judicial ha seguido allí el movimiento científico de la supresión de toda investigación del discernimiento y de toda condenación de los menores y de la substitución para todos y en todos los casos de un internado de mayor duración a la condena penal. Desde luego, si el discernimiento es la sola razón de la responsabilidad su falta sería siempre la razón de ausencia de responsabilidad. Quitada la causa desaparece el efecto,

"y entonces no habría por qué distinguir entre quien delinque antes de cumplir quince años sin tener discernimiento y el mismo sujeto que delinque al día siguiente de cumplirlos, sin tener más discernimiento que antes. O es la razón de la edad por sí sola e independientemente del discernimiento, la que decide la irresponsabilidad y entonces no hay por qué preocuparse de aquel que no ha cumplido una edad prevista en la ley, o es la sola falta de discernimiento lo que excusa el delito, y entonces hay que atender a ella y no a la edad.

"Grande dificultad presenta asimismo el concepto del discernimiento de que habla la ley. Los autores del código han puesto en él la palabra, el juez que se encuentra en el caso de un delincuente mayor de diez y menor de quince años, debe comprobar si el reo obró con discernimiento, y ordenar que los peritos médicos-legistas informen sobre el discernimiento del menor, y el perito médico informa. Pero es difícil suponer qué contestarían el juez, el perito, el acusador y el defensor si de pronto fueran interrogados sobre lo que cada uno de ellos entiende por discernimiento. He querido saberlo yo mismo, sin interrogar, se entiende a los funcionarios públicos, sino con el examen de los documentos que suscriben, y el resultado de esta investigación muestra que unos y otros usan de un vocablo sin determinación precisa. En uno de los informes médico-legales se estudian las aptitudes intelectuales del menor, y se resume que tiene alguna instrucción cívica, sabe cómo están divididos los poderes públicos del estado y sus funciones respectivas en el mecanismo del gobierno; no tiene ideas sobre el socialismo y anarquismo, las tiene jurídicas; no ignora las funciones que tienen a su cargo los jueces y la existencia del código penal; se concluye de esto: "que sus facultades han adquirido un desarrollo que le permite discernir moral y jurídicamente". De otro menor dice por el contrario, otro informe, que carece por completo de instrucción cívica y de ideas sociales; que recibió instrucción religiosa, pero sus ideas y sentimientos son poco desarrollados, que ha ejercitado algunas prácticas de esa naturaleza, rezos, confesión y asistencia a misa; y se concluye asimismo que tiene discernimiento. El informe respecto de otro menor, dice que éste carece de nociones jurídicas, ignoraba las penalidades aplicadas a los delitos, así como ignoraba que su situación de empleado agrava el delito cometido, que sus facultades mentales son buenas, pero no han sido cultivadas, y concluye en que, en este caso el discernimiento es incompleto, lo que introduce un término medio que complica la cuestión. Sobre el

"mismo sujeto, otro perito afirmó que el encausado sabía el carácter de la acción cometida, sin comprender su gravedad por miseria intelectual e incultura; que el discernimiento es escaso para vencer las tentaciones e incitaciones al mal, pero que el sujeto es moralmente responsable. En este caso el juez declaró irresponsable el menor y la cámara revocó la sentencia condenándolo a dos años de penitenciaría. Inútil es que continúe exponiendo estos detalles que muestran bien no hallarse resuelta la cuestión previa del discernimiento; y, sin embargo de esto trátase diariamente de la aplicación de un concepto no definido. Sería menester, en tanto siga aplicándose el defectuoso sistema del código actual, que el juez que interroga al perito, comenzara por decir a éste qué es lo que entiende por discernimiento y el perito no expidiera su informe sin repetir el mismo el concepto expresado por el juez. Para el caso de que tan buen consejo sea seguido, pongo aquí a disposición de los jueces la manera en que autorizados autores de la escuela clásica penal entienden el concepto en cuestión.

La coincidencia en eliminar el factor discernimiento en la penalidad de los menores que tengan más de diez y seis años y menos de quince, y en crear una legislación más previsora, más humana y más justa que la actual, ha sido completa entre los publicistas y magistrados.

El congreso penitenciario reunido en esta capital el año 1914, aceptó las proposiciones formuladas por el doctor Jorge E. Coll, fiscal del crimen y de lo correccional, que presentó un meritorio trabajo. A él se ha referido el distinguido magistrado al contestar la encuesta, y sus observaciones han sido tenidas en cuenta por la comisión. El doctor Coll decía, con razón, que ninguna cuestión más grave e importante que esta de la delincuencia de menores se presentaba a la consideración de aquel congreso penitenciario.

El profesor de la universidad de Buenos Aires, doctor Juan P. Ramos, en el trabajo escrito para responder a la encuesta promovida por esta comisión, abunda también en las ideas modernas acerca de esta materia y se refiere al atraso de la legislación nacional.

En todos los países del mundo se han preocupado de la delincuencia infantil, para ejercitar sobre los menores que demuestran tendencias al crimen medidas de precaución que nosotros hemos descuidado.

El último proyecto del código penal suizo comentado en la obra antes citada de Jiménez Asúa, aprecia la situación de los menores según la edad que tuvieron. Abandona desde luego el criterio del discernimiento y declara que el niño menor de catorce años que cometa un hecho

reprimido como delicto, no será objeto de ninguna persecución penal. Pero si el niño tiene seis años cumplidos la autoridad constatará los hechos y hará averiguaciones sobre el estado mental del niño y su educación. No hacer nada contra el niño culpable, dice Gautier, está bien; hacer algo por él, está mejor.

Se autoriza en consecuencia al tribunal para tomar medidas precaucionales o educativas según la clase de menores de que se trate, ya sean moralmente abandonados, moralmente pervertidos o en peligro de serlo.

Cuando el menor delincuente fuere lo que llama el proyecto un adolescente, o sea que tuviere más de catorce años y menos de diez y ocho, se aconsejan diferentes medidas. Desde luego el juez tomará una información completa sobre el estado físico y mental del menor delincuente y sobre su educación.

Si el adolescente está moralmente abandonado, moralmente pervertido o en peligro de estarlo, el juez ordenará que sea enviado a una casa de educación disciplinaria. Esta educación tiene por objeto educar moralmente al adolescente y formar su carácter, además de enseñarle una profesión y darle conocimientos que le permitan ganarse la vida. El adolescente permanecerá en la casa el tiempo necesario, nunca menos de un año, y no será librado hasta que cumpliera veinte de edad. El juez queda autorizado para entregar al adolescente a una familia de confianza donde su educación estuviera vigilada.

Si el adolescente fuera profundamente pervertido, de tal modo que no pudiera ser admitido o retenido en una casa de educación disciplinaria será enviado a una casa de corrección para adolescentes, destinada exclusivamente a ese fin. En esa casa de corrección permanecerá por lo menos tres años y no podrá ser retenido por más de doce.

El adolescente podrá ser librado condicionalmente, después de haber transcurrido el término mínimo de la retención, si el fin del tratamiento sufrido en la casa de educación disciplinaria o de corrección pareciera haberse alcanzado. Para todo esto se oír a los funcionarios respectivos y si la libertad se resolviera, el menor quedará sujeto a la vigilancia del patronato.

Si se tratase de adolescentes cuyo estado requiriese un tratamiento especial, particularmente si fuere ciego, epiléptico, sordomudo, atacado de una enfermedad mental, débil de espíritu o si su desarrollo mental o moral presentase retrasos anormales, el juez ordenará que sea sometido a un tratamiento apropiado.

Si el adolescente no está ni moralmente abandonado, ni moralmente pervertido, ni en peligro de estarlo y si su estado no

exige un tratamiento especial, el juez dirigirá una reprimenda al adolescente o le infligirá una detención con aislamiento de tres días a dos meses, si lo juzga culpable. Esta detención se sufrirá en un edificio no destinado a prisión o casa educativa de trabajos para adultos. El adolescente entrará a trabajar con arreglo a sus facultades.

El proyecto se ocupa también del patronato sobre los menores y confiere amplias autorizaciones al juez sobre los mismos, facultándolo también para dirigir admoniciones a los padres.

Por excepción, si el adolescente parece peligroso o si el delito es muy grave, se podrá imponer la pena ordinaria, pero con la atenuación prevista para la edad de transición.

El proyecto llama edad de transición a la que media entre los diez y ocho y los veinte años, fijando para los menores de esas edades penas inferiores a las que deben aplicarse a los adultos.

Como puede notarse, el último proyecto suizo considera la legislación sobre menores delincuentes como una de las más importantes a dictarse por la reforma legislativa y fija una serie de reglas que suponen la existencia o la creación de diversos establecimientos carcelarios.

El proyecto alemán se ocupa también, con especial cuidado de la situación de los menores, declarando que no será punible el que no hubiera cumplido catorce años en el momento de ejecutar la acción.

Si no hubiese cumplido diez y ocho años se aplicarán para la imposición de la pena las reglas relativas a la tentativa, pero no se impondrá la reclusión perpetua. Se autoriza al juez cuando la acción ejecutada apareciera como consecuencia de una educación defectuosa o si se admitiere que son precisas medidas educativas, para ordenar en sustitución de la pena o al mismo tiempo que ella se ejecuta, la entrega del menor al estado para ser educado.

El juez podrá también entregar el menor a un instituto de reforma.

Las penas privativas de libertad impuestas a los jóvenes se ejecutarán en establecimientos o secciones absolutamente independientes, debiendo separarse los jóvenes completamente responsables de los que tuvieren responsabilidad atenuada. La pena de privación de libertad impuesta a estos últimos podrá ser ejecutada en establecimientos de educación, de curación o de asistencia.

El código de Noruega establece también que no puede ser castigado aquel que ha cometido el acto antes de haber cumplido catorce años, sin tenerse en cuenta el discernimiento.

En casi todos los países civilizados existen leyes especiales acerca de los menores delincuentes, dominando el criterio de las

medidas precaucionales, más que represivas, sobre los mismos y fijando escalas de distintas edades.

En los Estados Unidos ha hecho camino la institución de tribunales especiales para menores delincuentes, asunto que no podrá tratarse entre nosotros en la legislación de fondo, donde sólo cabe dar las normas generales.

Con todos estos antecedentes y otros que la comisión no enumera para no extender demasiado su informe, se han proyectado los artículos que fijan la situación de los menores delincuentes.

Se ha tenido en cuenta al articular el proyecto un criterio práctico. No podíamos adoptar lista y llanamente sustituciones como las que se proyectan para Suiza porque carecemos de la diversidad de establecimientos enunciados en aquella legislación y no tenemos por ahora los medios para llevarlos. En esta, como en las demás materias, hemos tenido un punto de vista nacional, habiendo tratado de hacer no sólo obra eficaz, sino obra práctica.

Desde luego establece el proyecto, de acuerdo con sus antecedentes, los proyectos de 1891 y 1906, que no es punible el menor de catorce años de edad. Pero, teniendo en cuenta que el delito cometido por un niño es una manifestación de anormalidad, la sociedad debe tomar sus precauciones ante la presencia del síntoma morboso. El juez debe así, averiguar cuál es la situación del menor, cuál el ambiente en que se desenvuelve, cuál su educación, cuál la situación de los padres, tutores o guardadores, si no se trata de un ser abandonado. Reunidas las comprobaciones del caso, estará autorizado para tomar medidas relacionadas con la educación y la corrección del niño. Las medidas consistirán en la colocación en un establecimiento destinado a la corrección de menores, siempre que el tribunal crea, se peligroso dejarlo en poder de los padres, tutores, guardadores u otras personas.

De manera que las facultades de los jueces son amplias: si ellos creen que el menor debe ser dejado donde está, pueden hacerlo; si creen que basta sacarlo del poder de los padres, para entregarlo a una familia responsable, también lo pueden hacer; si entienden que basta el cambio de tutores o guardadores, también; y si creen indispensable la retención en un establecimiento, están en condiciones de decretarla. La ley no aparece así como un instrumento rígido o automático, igual para todos los casos, sino que encierra la flexibilidad necesaria para que el magistrado la adapte a cada caso, individualizando el pronunciamiento.

Se autoriza al juez para colocar al menor en un establecimiento correccional hasta que tuviese diez y ocho años, pudiendo anticipar la libertad. Y, por fin, se autoriza

para casos excepcionales que se expresan en el artículo respectivo, que es el 36, a mantener al menor hasta que cumpla veintidós años, es decir, hasta la edad en que debe hacer el servicio militar. En este caso, saldría de la disciplina del establecimiento de corrección a la disciplina del ejército y cumplido su servicio sería devuelto a la vida libre.

Si el menor ha cumplido catorce años de edad, no se le juzga según el proyecto, como mayor. La ley no puede tener esas transiciones bruscas y considerar como adulto para juzgarlo en las condiciones ordinarias al que tiene catorce años y un día y como irresponsable en absoluto al que tiene catorce años menos un día, cuando realizó el hecho calificado de delito.

Cuando el menor tiene más de catorce años y menos de diez y ocho, la ley se coloca en dos hipótesis para definir su criterio, según que la pena correspondiente al sujeto permita, dado el hecho cometido, la condena condicional, o no lo permita. Cuando se trata de adultos la comisión de un delito castigado con menos de dos años de prisión o con multa permite, según el proyecto, la suspensión de la ejecución de la pena, la que se pronuncia condicionalmente. El condenado en esas condiciones no tiene más deber que el de la buena conducta en el sentido de no delinquir más. Se supone que la amenaza es un freno para el hombre responsable, el que impedirá cometer nuevas infracciones. Pero para el menor no puede regir ese criterio con la misma amplitud, porque éste no tiene siempre suficiente desarrollo para darse cuenta de su situación de condenado condicionalmente y de su responsabilidad. Es necesario entonces autorizar al juez para tomar medidas especiales a su respecto, reteniéndolo en una casa de corrección cuando fuese preciso.

La regla no es rígida; el juez toma o no la medida si lo cree oportuno, y puede si lo estima más conveniente limitarse a dejarlo donde está o entregarlo a diferentes custodias.

El juez queda autorizado para retenerlo en un establecimiento correccional hasta que el menor tenga veintidós años.

El segundo punto que considera el proyecto es el relativo a los menores de más de 14 años y menos de 18, que cometieren un delito cuya pena no permita la condena condicional.

En esos casos se autoriza para reducir la pena en la forma determinada para la tentativa, es decir, se autoriza una mayor benignidad que en los casos ordinarios. Los menores condenados deberán en todos los casos cumplir la penalidad impuesta o en establecimientos especiales o por lo menos separados de los delincuentes comunes.

Teniendo en cuenta que la reincidencia caracteriza al individuo peligroso contra el cual deben tomarse precauciones especiales que lo presentan siempre como sujeto

a sospecha, la comisión ha establecido que los menores de 18 años no pueden ser declarados en tal situación.

Los hechos de la infancia y de la adolescencia no pueden pesar sobre la vida del hombre en la misma forma que los actos del adulto. El menor se corrige con mayor facilidad. Los actos que realiza son generalmente el resultado de la mala educación y del ambiente viciado. La conciencia del niño no es la misma que la del hombre y sería absurdo ponerle un sello desde la infancia, por hechos que deben olvidarse.

El menor es peligroso cuando se le abandona, de manera que la tendencia humana debe ser la de corregirlo y no la de ultimarlo con la impresión perpetua de un antecedente desfavorable.

La comisión entiende también, que la delincuencia infantil se debe en gran parte a las personas que cuidan o deben cuidar a los niños. Muchas veces, los padres, tutores y guardadores, son los que impulsan al niño al delito. Con nuestra legislación anticuada el negocio de tener menores para que cometan delitos o mendiguen, es conveniente y lucrativo. El instrumento no puede ser penado y sobre él no pueden tomarse medidas de precaución. De manera que hasta se elija un menor o varios menores por el delincuente profesional, para que las armas de la ley se estrellen ante el hecho.

Nuestra mendicidad infantil callejera, verdadera vergüenza de nuestras ciudades y hasta de nuestras campañas, se debe en gran parte a la ausencia de disposiciones legales previsoras.

La comisión autoriza por eso a los tribunales, en todos los casos de delitos cometidos por menores, a tomar medidas sobre los padres, tutores o guardadores y arrancarles todo derecho sobre las personas de los menores explotados, mal educados, o inconvenientemente dirigidos.

Entiende la misma comisión que con estas medidas se dará un gran paso social y legal, contribuyéndose a resolver problemas que todos palpitan, pero que hasta hoy no se habían afrontado.

Este será el primer impulso y marcará una dirección que no debe abandonarse para el bien del país y de sus instituciones.

Atenuantes y agravantes—

Diversos sistemas se siguen por las legislaciones al afrontar el problema de las circunstancias agravantes y atenuantes; esto es, de aquellas que caracterizan el hecho, dándole mayor o menor gravedad.

En los antiguos sistemas, de pena fija ante el delito determinado, la apreciación de la circunstancia no tenía objeto. El problema ha surgido como consecuencia de las penas divisibles con un máximo y un mínimo cuya aplicación debe hacer el juez, graduándola en cada caso de acuerdo con sus particularidades.

Algunas legislaciones enumeran las circunstancias calificativas, otras prescinden de tal enumeración, pero fijan reglas para apreciarlas, y otras se limitan a decir que se estimarán por los magistrados.

El código vigente, de acuerdo con el español y el proyecto del doctor Tejedor, enumera las circunstancias atenuantes y las agravantes trayendo en los artículos 83 y 84 las listas de unas y otras. Este sistema, abandonado por la ciencia, tiene graves inconvenientes, pues no permite apreciar todos los conceptos del acto para calificarlo, desde el momento que debe ser estimado a través de las determinadas circunstancias calificativas que se enumeran.

El proyecto de 1891 propuso la modificación del código diciendo en su exposición de motivos, al respecto: "Por medio de las circunstancias atenuantes y agravantes se llegó a abandonar el sistema de la pena fija e inflexible para el agente de cada delito y se adoptó entonces un límite máximo y un límite mínimo dentro de los cuales el juez, sin cambiar la especie de pena, podría oscilar aumentándola o disminuyéndola con arreglo a aquellas circunstancias. El sistema de las circunstancias atenuantes y agravantes no es un medio suficiente para conocer la perversidad del criminal y fijar e individualizar la pena que se le ha de imponer. En efecto, si se observa en la ley el procedimiento de enumerar taxativamente esas circunstancias, seguido por el código español y copiado en el nuestro y en otros, se toca el inconveniente insalvable de no ser posible prever y precisar el infinito número de accidentes, caracteres y peculiaridades de los hechos punibles y de sus agentes. Por eso la enumeración será siempre incompleta y nada importa que después de consignar algunas circunstancias atenuantes, se diga que se considerarán tales, cualesquiera otras análogas a las enumeradas, porque siempre que darán excluidas las atenuantes que no sean análogas a las enumeradas y todas las agravantes que no se hayan previsto y colocado expresamente. Además resultará a veces que una circunstancia consignada como atenuante será en algún caso agravante y viceversa y entonces será imposible darle su verdadero significado en el proceso porque a ello se opondrá la ley. Si en vez de enumerar se diera en la ley una definición de las circunstancias atenuantes y agravantes, se tocaría también una dificultad insuperable. Por amplios y comprensivos que fueran los términos de aquella norma podrían abarcar las numerosísimas particularidades de todos y cada uno de los delincuentes y las múltiples modalidades de los hechos".

La exposición de motivos se refiere en seguida a los códigos de Alemania, Hungría, Holanda e Italia para recordar sus

preceptos divergentes del nuestro y concordes con las ideas de la comisión, para concluir diciendo que la ley debe contener reglas generales amplias y claras, para que los magistrados puedan tomar en cuenta y apreciar debidamente en conjunto y en detalle los elementos del delito y del autor.

El proyecto de 1906 acepta las mismas ideas, que esta comisión comparte en su fondo, y que ha acentuado en los preceptos de su proyecto propio.

En efecto, en el de 1906 se adopta como en el código, el criterio del término medio en las penas divisibles por razón de tiempo o cantidad.

Ese término medio es el que debe fijarse por el juez, pudiendo aumentarlo hasta el máximo o disminuirlo hasta el mínimo según las circunstancias atenuantes o agravantes que concurren.

La comisión suprime lo del término medio para dar al magistrado todas las amplitudes necesarias a los efectos de la individualización del castigo. El juez aplicará dentro de los extremos de la ley la condena que crea del caso, estudiando el asunto y de acuerdo con sus circunstancias calificativas.

Hemos aceptado los propósitos del proyecto de 1906, en cuanto se refiere a la fijación de reglas, para la apreciación de las circunstancias calificativas. Estas reglas son las normas a que deberán ajustarse los magistrados.

La comisión, teniendo en cuenta que entre nosotros es frecuente la delegación de funciones, lo que da lugar a que se condene a penas graves a un sujeto sin que el juez de instrucción o de sentencia haya tenido la oportunidad de verlo, porque deja obrar a la policía, al secretario y a los empleados inferiores, ha creído oportuno exigir la acción directa y personal del magistrado. Establece por eso en la última parte del artículo 41 que el juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de la circunstancia del hecho, en la medida requerida por cada caso.

No podrá haber así penados que ignoren al juez que los juzgó.

Tentativa—

El código vigente empieza por definir la tentativa expresando que existe cuando la resolución de cometer un delito se ha puesto de manifiesto por actos exteriores que tengan relación con el delito. En seguida exime de pena al que desiste y declara que se presume voluntario el desistimiento.

Los demás artículos del título referentes a la penalidad han sido derogados y reemplazados por la ley 4189 de reformas al código en vigor.

El proyecto de 1891 aceptó la definición, pero haciéndose cargo de las teorías expuestas por Carrara en su "Programa", es-

tableció que los actos exteriores debían tener relación no sólo directa, sino inequívoca con el delito.

La exposición de motivos, como puede verse en la página 79 de la edición oficial de ese proyecto, estudió con cuidado el asunto atribuyéndole la importancia debida.

El proyecto de 1906 conserva la definición en el artículo 44, habiéndosele quitado la palabra "inequívoco" y volviendo al concepto de la legislación en vigor. Además se introduce un factor nuevo, estableciendo que, para la apreciación de los actos, se tendrán en cuenta los antecedentes del sujeto.

La comisión ha considerado oportuno suprimir la definición de la tentativa y fijar un concepto de acuerdo con las necesidades puestas de manifiesto por la práctica.

En su "Reforma Penal" el doctor Julio Herrera verifica una crítica sensata al proyecto, empezando por expresar su disconformidad con la definición, pues en su concepto, si la ley no define el homicidio o el robo, sino que fija los elementos de esos delitos y determina la pena que tendrán los que lo cometieron, al tratar de la tentativa debe anotar idéntica orientación y decir: "el que comienza la ejecución de un delito y no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá tal pena".

Ese criterio es el que tiene el código italiano cuando dice en el artículo 61: "Aquel que a fin de cometer un delito con medios idóneos de ejecución pero por circunstancias independientes de su voluntad no realiza todo lo que es necesario para la consumación del hecho, será castigado, etcétera".

El delito, como todo acto, tiene un período de preparación interna y su exteriorización en el acto mismo. Los pensamientos, las intenciones, cuando no se traducen en hechos, no se castigan. Son como las acciones privadas, que quedan, según el artículo 19 de la constitución, fuera de la autoridad de los magistrados.

La intención de delinquir no se castiga; por consiguiente, las que se penan y deben penarse son las acciones. De manera que la resolución enunciada en la definición del proyecto de 1906, no es punible; el castigo se dirige a los actos que ponen de manifiesto una resolución. Si el delito no empieza a ejecutarse no hay hecho, sino pensamiento o intención. De manera que es más acertado referirse a la ejecución y no a los propósitos.

La comisión acepta así en lo fundamental las observaciones del doctor Herrera y prescinde de la definición, fijando la pena para el que empieza la ejecución y no consuma el acto.

Un problema serio, que se presenta siempre en la práctica y que no hemos

encontrado resuelto en otros códigos y proyectos, se ha presentado a los miembros de esta comisión, en la materia del título que estamos considerando.

En el hecho, un mismo acto puede ser juzgado de manera diferente, según cuál sea la situación de espíritu que ponga de manifiesto el acusado. Así, un individuo dispara contra otro un revólver y no lo hiere. Ese hecho es un delito, pero ¿qué delito? y en consecuencia, ¿qué pena debe aplicarse?

Si el delito es el de disparo de arma, la pena es de poca importancia y cabe la condena condicional. Si el delito es el de tentativa de homicidio el hecho es grave y la penalidad severa.

¿Cuál es el medio de diferenciar uno y otro delito, ya que el hecho sería el mismo en los dos casos antes supuestos? La diferencia estriba en el elemento intencional, no en el libre arbitrio, sino en el propósito. Si el sujeto pensó en matar, hubo tentativa; si pensó sólo en dañar, o no pensó en nada, concurre un simple disparo de arma de fuego.

Como la situación interna del sujeto y sus intimidades son difícilmente apreciables cuando el mismo no las pone de manifiesto, es general que el proceso se instruya y la condenación se verifique a base de la declaración del acusado. De manera que es este mismo el que proporciona el arma con que han de ultimarlo, o el elemento protector con que ha de salvarse.

La ley no debe permitir esta situación que expone a que se condene más que al delincuente al ignorante y que permite salvar al experto, aun cuando debiera sufrir un castigo serio.

La comisión ha puesto entonces un agregado al artículo a que se refiere el doctor Herrera, exigiendo la premeditación, es decir el pensamiento anterior, el que deberá apreciarse valiéndose de los medios comunes de prueba. No puede juzgarse el acto primo como tentativa de un hecho más grave que el ejecutado, sino cuando se pone de manifiesto la existencia de un pensamiento desenvuelto de antemano.

De esta manera la legislación sobre tentativa contiene las previsiones necesarias, no expone a injusticias y encierra los propósitos que la caracterizan.

La comisión tampoco acepta la presunción de tentativa en contra del reincidente. La presunción que crearon los redactores del proyecto de 1906 es cruel y coloca al individuo que tuvo antecedentes en una situación no sólo desfavorable, sino inhumana. Contra el reincidente hay que tomar medidas de corrección, de educación y de precaución, pero nunca colocarlo en condiciones de notoria desigualdad con respecto a los demás individuos.

El proyecto propone que para todo habitante del país rija una presunción determinada, pero que para los reincidentes

rija otra. Esto, aparte de la diferenciación injusta que crea, puede apartar al reincidente de la enmienda puesto que actos inocentes para otros pueden ser graves para él, aunque sea también inocente.

La circunstancia personal, como todas las demás, deben servir de antecedentes al magistrado, pero no imponerle una norma de la cual no deba apartarse.

La comisión acepta el criterio relativo al desistimiento y la escala de penas, teniendo en cuenta los antecedentes nacionales y extranjeros, como asimismo las imposiciones de la práctica.

Participación criminal—

La comisión se ha separado también en esta parte de los enunciados del proyecto de 1906, suprimiendo las definiciones que aquél traía, de acuerdo con vetustos antecedentes de nuestra legislación.

Se ha aceptado desde luego el cambio de rubro aconsejado por el doctor Herrera, poniendo "participación criminal" en lugar de "autores y cómplices", porque el primer concepto tiene una acepción más general y más precisa.

Se han suprimido las definiciones porque ellas son impropias en las leyes y se ha dejado únicamente la indicación del hecho y de la pena, que es lo que interesa a la ley represiva. El proyecto de 1906 en esta parte considera autores a los que determinen a otro a cometer el delito, sin fijarse que quien determina a otro para que realice el hecho, es un instigador y no un autor. Pero prescindiendo de palabras, lo que pretende la comisión es fijar los conceptos de una manera precisa y en ese sentido empieza por establecer que tendrán la pena establecida para el delito los que tomen parte en la ejecución del hecho, los que prestaren un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse y los que hubieren determinado directamente a otro para cometerlo.

Esta disposición se aplica como lo establece el rubro del título a los casos de delitos en que intervengan más de una persona.

Al imponer la pena del autor al que determinar a otro a la comisión del delito, hemos agregado la palabra "directamente" para significar cuál debe ser el carácter de la acción ejercida por el instigador sobre el autor o autores materiales. No es necesario establecer, como lo hace el código vigente, la forma en que puede hacerse efectiva la instigación, pues esos son puntos de hecho que se aprecian por el magistrado en cada uno de los casos sometidos a su decisión.

Nos hemos apartado así no sólo de las reglas antiguas del código de Tejedor, parte de las cuales se repetían en el código vigente, criticado en la exposición de motivos de 1891, sino del proyecto de 1906 cuyas disposiciones son inferiores a las adoptadas por esta comisión.

También hemos suprimido la definición de complicidad, fijando en el artículo 46 el significado de esa participación. No se trata ya de los que ejecutan, prestan una ayuda esencial o instigan, sino de los que cooperan de cualquier otro modo a la ejecución del hecho.

El proyecto de 1906 es incompleto en su misma definición porque no comprende los casos de ayuda posterior al hecho prometida antes de su ejecución. Es claro que si esa ayuda fuera posterior sin convenio previo estaría comprendida dentro de los preceptos que castigan el encubrimiento, pero si la colaboración fuera ofrecida de antemano, el caso debe ser considerado como lo hace el artículo 46, declarando que se trata de participación.

La comisión ha debido tener en cuenta el viejo problema de la penalidad del cómplice, para usar un término consagrado.

En el código vigente los cómplices se clasifican en cómplices de primero y segundo grado, aplicándose para unos y para otros penas diferentes.

El proyecto de Tejedor iba todavía más lejos, pues legislaba sobre tres grados de complicidad, grados que se detallaban en cada caso pronunciando sanciones diferentes de acuerdo con la intensidad de la colaboración.

Esa misma clasificación con los términos de cómplice en primer lugar, en segundo lugar y en tercer término, se encuentra consignada en el proyecto de Villegas, Ugarriza y García.

La evolución marcada por el código en vigor, que suprimió un grado, fué completada por la ley 4189 de reformas a la legislación vigente, abrogando las divisiones y dejando sólo la definición, criterio que aceptaron los proyectos de 1891 y 1906, el primero de ellos a base de la citada ley de reformas.

Pero el código, de acuerdo con sus antecedentes, presentaba penas distintas para los diversos cómplices y penas diferentes a las que debían sufrir los autores.

La ley de reformas realizó una modificación fundamental tomada del proyecto de 1891 y estableciendo que al cómplice le corresponde la misma pena que al autor principal, no pudiendo serle aplicado el maximum.

La exposición de motivos de 1891 dice que la respectiva comisión, en mayoría, decidió mantener en principio la teoría en virtud de la cual se debe imponer al cómplice una pena inferior a la del autor principal, pero simplificada la legislación sobre la complicidad, era preciso simplificar la penalidad dejando al juez la amplitud necesaria.

En el hecho y a pesar del pronunciamiento respecto a la pena menor para el cómplice, la ley las equipara, puesto que la única limitación es la relativa a que no se puede aplicar el maximum.

El doctor Rivarola en su "Exposición

y Crítica del Código Penal", libro escrito mucho antes de haber colaborado en el proyecto de 1891, condenaba el sistema francés que equiparaba la pena del cómplice a la del autor. El código de ese país es, como decía el doctor Herrera en el discurso que pronunció en la cámara de senadores combatiendo el proyecto de ley de reformas, el único que verificaba la equiparación, la que es injusta hasta teniendo en cuenta principios de sentido común que llevan a considerar que la pena debe ser proporcionada al delito.

El punto ha sido desarrollado por el mismo doctor Herrera en su libro "La Reforma Penal" y en "La Ley Penal Argentina" del doctor Moreno.

La comisión, teniendo en cuenta los antecedentes invocados y los principios de la legislación comparada, ha considerado oportuno proyectar la penalidad para el cómplice relacionándola con la de los autores o instigadores, pero reduciendo aquella de un tercio a la mitad. La reducción hecha en esta forma permite al juez las amplitudes que se persiguen a los efectos de la individualización. Ha tenido también en cuenta para fijar criterio, el caso en que pudieran corresponder penas perpetuas.

La comisión ha mantenido el artículo 52 del proyecto que lleva el número 47, que es repetición del artículo 4.º inciso b, de la ley de reformas, tomado del proyecto de 1891 en cuya exposición de motivos se explica.

Hemos suprimido el precepto relativo a la tentativa de complicidad que el proyecto de 1906 no explica, pero que se contiene en la ley de reformas y en su antecedente, por las razones que daba Haus diciendo: "la ley no castiga la tentativa de participación criminal o, como hay costumbre de decir, la tentativa de complicidad. En efecto, los actos constitutivos de participación no tienen, por regla general, criminalidad propia; ellos no son punibles sino porque se refieren a un hecho principal que la ley califica de crimen o delito y que les imprime un carácter delictuoso. A falta de ese lazo quedan impunes".

Para los casos en que el hecho no se consumare habiendo verificado el cómplice de su parte todo lo necesario para su realización, rige la última parte del artículo 47.

El proyecto de 1891 traía un artículo, el 72, en el cual se refería a la comunicabilidad de las circunstancias agravantes del hecho, con relación a los partícipes. El de 1906 suprimió ese artículo sin dar explicaciones al respecto. El punto debe resolverse sin dejarse a la incertidumbre que se crearía en el caso de no existir ninguna disposición al respecto. La comisión lo ha definido en el artículo 48 por el cual se establece que las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la responsabilidad no ten-

drán influencia sino respecto al autor, instigador o cómplice, a quienes corresponda. Tampoco la tendrán aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe.

Quiere decir así que las circunstancias particulares que eximen o atenúan, no se comunican y sólo tienen alcance personal; y en cuanto a las agravantes se comunican sólo cuando el partícipe las conoce, porque sólo así ha podido tenerlas en cuenta.

La comisión ha aceptado el artículo 54 que establece que no se considerarán cómplices ni autores de los delitos cometidos por medio de la prensa, a los editores, impresores y demás personas que prestaren al autor del escrito o grabado la cooperación necesaria para su publicación. Los motivos de este artículo que son evidentemente justos se encuentran consignados en la exposición de motivos del proyecto de 1891, donde se dice: "Hemos completado la legislación sobre la codeinlucencia con un precepto que declara exentos de responsabilidad por los hechos punibles cometidos por la prensa, a los editores, impresores y demás personas que prestan al autor del escrito o grabado la cooperación necesaria para su publicación. Este artículo deroga aparentemente el principio común en materia de codeinlucencia, según el cual se presumen responsables a todos los que han cooperado a la realización de un delito, y se presume, porque se supone que todos han concurrido con intención de delinquir. A pesar de la apariencia, el artículo puede no ser, y no será a menudo una derogación del principio. El editor, los cajistas, etcétera, cooperan, es verdad, a realizar el hecho; pero lo hacen ordinariamente sin propósito criminal, sin el menor deseo de agravar derecho alguno, sin conocimiento de la trascendencia del escrito o grabado y del fin a que se encamina; lo hacen sólo para ejercer su industria o su modo de vivir. Sin embargo, aunque las personas nombradas presten sus servicios con intención criminal y para que el hecho punible se cumpla, el artículo debe mantenerse, porque de la manera amplia como está redactado consagra una garantía de la libertad de imprenta. La constitución nacional ha desechado la censura previa; y sería restablecerla y restablecer la peor de las censuras—la de la ignorancia—responsabilizar a los editores, grabadores, copistas, etcétera, por los actos punibles cometidos mediante la prensa. En efecto, antes de imprimir cualquier trabajo examinarán si es o no ofensivo; y si a su juicio fuera susceptible de comprometer su responsabilidad se rehusarían a imprimirlo. El artículo se apoya en la doctrina y en la legislación comparada".

La comisión ha hecho una pequeña modificación al proyecto, pues ha suprimido

la salvedad de cuando el autor fuere conocido y se "encontrase en el país". Con ese requisito, cualquier obrero de buena fe podría ser castigado. Además nos hemos referido no sólo a la publicación, sino a la difusión y a la venta.

Reincidencia

Todos los que han estudiado derecho penal y sociología criminal, hacen una diferencia grande entre el delincuente "primero", si se permite la expresión, y el que reincide en la repetición de actos antisociales. El primer delito puede ser el resultado de una cantidad de factores que no demuestren la existencia de un sujeto peligroso; el segundo realizado por el mismo individuo debe producir ya un movimiento de alarma; los subsiguientes tienen que provocar medidas serias para evitar repeticiones, es decir, para defender a la sociedad de los ataques que contra ella se dirigen.

En los sistemas antiguos que examinaban el hecho, descuidando al sujeto y que aplicaban una pena fija con carácter expiatorio, la repetición del delito no podía apreciarse de la manera en que hoy se estiman de estadísticas, de sistemas de identificación y de medidas de orden sobre los penados, impedían el que se tuvieran los factores del problema a la vista. El criterio social del momento presmal con otro mal y de los puntos de vista sectarios, para considerar el problema bajo el aspecto de la colectividad afectada. Castiga, así, cuándo conviene y cómo conviene, y si tiene en cuenta los elementos antisociales es sólo por lo que ellos puedan caracterizar a un sujeto y hacerlo más o menos peligroso. Por eso se ha insistido en la condena condicional y debido al mismo propósito se reprime con severidad mayor a los reincidentes. Para imponer penas, la sociedad debe tener un objeto, ya que las penas restringen la libertad y ésta no debe limitarse, sino cuando fuere necesario.

La reincidencia, tratada especialmente en un título del proyecto, ha sido considerada desde que se iniciaron los estudios penales serios, como una circunstancia agravante. Pero la preocupación científica y legislativa se ha acentuado cada vez más con relación a este factor y hoy los códigos se preocupan del asunto, de manera especial, como deseamos que lo haga el nuestro.

Reincidir equivale a repetir, de manera que reincidente es el sujeto que repite el delito. Como los delitos son de clases diferentes, el primer punto a resolver es el relativo al alcance legal del concepto, pues la reincidencia puede ser genérica o específica. Genérica, la del que repite un delito cualquiera; específica la del que repite un delito de la misma clase. Hay

códigos, como se hace notar en el Digesto Italiano, que trae un estudio muy completo sobre la materia (palabra "Recidiva", tomo xx, parte prima), que limitan la agravante a la reincidencia específica, y otros que la extienden a la genérica.

Conviene, para determinar los alcances del proyecto, tener en cuenta los antecedentes nacionales.

En el proyecto del doctor Tejedor se definía la reincidencia específica diciendo el artículo 179: "el que después de sufrir una pena cometa nueva y voluntariamente, dentro de los diez años siguientes, un crimen de la misma especie, será considerado reincidente y castigado con una pena mayor que la legal de la primera infracción". La penalidad se aumentaba según el número de reincidencias y según la pena que correspondiera a cada caso, lo que se determinaba en varios artículos. El mismo proyecto señalaba como origen de sus preceptos el artículo 111 del código de Baviera y las referencias al comentario oficial del mismo, puestas de manifiesto en una extensa nota. La recaída en el crimen, después de una primera condenación, se dice, revela en el agente una tenaz perversidad de la que no ha podido triunfar la pena sufrida. Se acentúa en la misma nota las diferencias entre la reincidencia y reiteración y se invocan antecedentes del derecho romano y de las leyes españolas, como asimismo de los códigos de Hungría, Suecia, Noruega y Dinamarca. Se discute el principio de la agravación en los casos de reincidencia y se expresa que tienen carácter universal.

El proyecto consideraba circunstancia agravante especial a la reincidencia específica, puesto que empleaba las palabras "de la misma especie", las que comentaba en el curso de la nota referida, en los términos siguientes: "No basta que los dos crímenes sean del mismo género, ni que sean de una especie análoga. Es preciso que sean de la misma especie. Así el hurto simple, la retención y el fraude son crímenes de la misma familia, por cuanto todos se dirigen contra la propiedad de otro y son castigados muchas veces con penas idénticas, pero la ley no reconoce en ellos crímenes de la misma especie. Luego el ladrón que comete un acto de fraude no es pasible de las penas de la reincidencia como tampoco si después de haber sido condenado por hurto comete un homicidio u otro crimen contra las personas".

Nuestro código, con un criterio más parecido al del proyecto de los doctores Ugarriza, Villegas y García, que al de Tejedor, se ocupó de la reincidencia como circunstancia general agravante de la penalidad, mencionando los casos en los incisos 19 y 20 del artículo 84.

Desde luego aceptó en el inciso 20 el criterio de la reincidencia específica y con-

sideró en el 19 el de la reincidencia genérica, declarando que se consideraba como agravante el hecho de haber sido el culpable castigado anteriormente por delito al que la ley señale igual o mayor pena. De manera que la reincidencia específica era siempre agravante, y la genérica sólo cuando la pena del delito anterior fuere igual o mayor que la del nuevo.

El proyecto de 1891 que había de influir en la ley, por medio de la reforma de 1893, cambió el criterio, adoptando en el artículo 84 el de la reincidencia genérica; imponiendo la pena de muerte al condenado a presidio perpetuo que cometiere un delito que mereciese la misma pena, en el artículo 85; y creando la pena de deportación como accesoria de la última condena para los que tuvieran las condenas a que se refiere el artículo 86.

La exposición de motivos explica las características del problema y la solución diciendo: "En las reglas concernientes a la responsabilidad se incluye la reincidencia entre los elementos capitales que, en general, los magistrados deben penar y tener muy en cuenta para indagar la perversidad del culpable y determinar la pena que se le ha de infligir. Al explicar esas reglas, hemos mostrado cómo la reincidencia denuncia el hábito del delito o la tendencia a adquirir ese delito, y cuán importante es en el juicio la consideración de ese dato individual. La ley sería, empero, incompleta si en el estado actual de la ciencia y de algunas legislaciones extranjeras y ante el desarrollo creciente de la criminalidad profesional, particularmente en los centros urbanos, se circunscribiera a expresar que entre los elementos personales que se considerarán para juzgar la perversidad del criminal y fijar su pena, se halla la reincidencia. Es preciso que determine también cuándo y cómo las reincidencias reiteradas de un individuo exigirán la adopción, respecto a éste, de medidas que amparen a la sociedad contra la repetición probable por no decir segura de sus crímenes, después de cumplir su última condena, y que procuren al mismo individuo un cambio en sus costumbres, la enmienda, si es posible, y en todo caso una vida más regular".

Después se refiere la exposición al concepto de reincidencia y recuerda las nociones científicas y los principios de Tejedor, lo mismo que los del código todavía en vigor, aunque, modificado en parte por la ley de reformas y al cual criticaba considerándolo incompleto.

Explica, en seguida, los preceptos del proyecto y del alcance de la deportación, precisando el sentido del concepto reincidencia dentro del proyecto, al decirse: "No será necesario que el condenado haya sufrido la pena impuesta por la senten-

cia firme antes de ejecutar el nuevo hecho ni que realice éste dentro de un período de tiempo después de cometido el primer delito o de dictada la condena. Tampoco será menester que los delitos sean homogéneos o de igual especie o género; pueden ser de índole y de clase diferentes".

En este proyecto se inspiró la reforma del año 1903.

La ley número 4189 derogó el inciso 20 del artículo 84 del código penal, que se refería a la reincidencia específica e introdujo un inciso nuevo, el artículo 15 de aquella, en el cual adopta el criterio de la reincidencia genérica. Aceptó también, de acuerdo con el proyecto de 1891, la pena de deportación como accesoria de la última condena, para ciertos reincidentes.

El proyecto de 1906, más completo que el de 1901, considera que debe consagrarse la reincidencia genérica tal como se encuentra ya en nuestra ley y de acuerdo con ese concepto se han dictado sus respectivas disposiciones.

Considera la comisión que debe aceptarse ese punto de vista. La reincidencia es una causa de agravación justa y legítima porque aumenta la temibilidad del autor del delito. La agravación no debe limitarse al que repite delitos de la misma especie, sino al que repite cualquier delito. Haus, citado por Rivarola, trae su ejemplo convincente, cuando dice: "Frecuentemente el individuo que recae en el mismo delito, es más culpable que el que comete sucesivamente dos delitos de especie diferente; pero no siempre sucede así; un ladrón recién salido en libertad provoca al testigo que ha de puesto contra él: lo ataca y le inflige heridas graves. Otro ladrón salido de la prisión, señalado a la desconfianza de los patrones y de los obreros, no encuentra trabajo en parte alguna; para alimentar a su familia hundida en la miseria, roba por la noche algunas provisiones: ¿cuál de los dos es más culpable?".

El proyecto de 1906 no tiene en su exposición de motivos una explicación extensa sobre el título de la reincidencia. Se limita en las consideraciones generales a referirse a la misma y a la deportación.

Las consideraciones son análogas a las que fundamentaron el proyecto de 1891. Hemos suprimido en el primer artículo del proyecto lo relativo a delitos militares y amnistiados, por creer que es evidente la exclusión de los mismos. Los delitos militares forman parte de un orden y de una jurisdicción diferentes. Obedecen a conceptos, reglas y disciplinas distintas y ajenas en mucha parte al factor civil. En cuanto a los amnistiados, basta tener en cuenta el concepto de amnistía que borra el hecho para saber que no podría cargarse con un hecho suprimido a nin-

gún sujeto, para hacerlo pesar como un antecedente.

Hemos aceptado el artículo 56, que es el 51 del proyecto de esta comisión, por los motivos que expresa la exposición de motivos de 1906, y hemos aceptado por idénticas razones, el precepto relativo a la relegación como accesoria.

La relegación, que es la deportación del proyecto, no es una pena nueva, puesto que equivale a la reclusión, pero en un paraje de los territorios del sur.

La relegación se impone a los reincidentes por segunda vez, condenados a reclusión o prisión, estableciéndose que cumplirán su pena en un establecimiento situado en un territorio del sur.

Hoy no se cuenta para esos efectos sino con el presidio de Ushuaia. Para los demás reincidentes a que se refiere el artículo 52 del proyecto, la relegación es una reclusión por tiempo indeterminado, que se impone como accesoria.

La comisión ha agregado un artículo, el 53, que resuelve el problema de la prescripción de la reincidencia. Aplicando el proyecto de 1906, el delincuente condenado una vez, deberá estar perpetuamente sometido a estas taras aunque su vida posterior hubiese sido honesta. El derecho de acusar se prescribe, las penas también. ¿Por qué no ha de prescribirse el antecedente del delito, cuando una vida posterior honrada ha demostrado la corrección del sujeto? Proponemos para que esa prescripción se opere, los mismos plazos que rigen para la extinción de las penas por el transcurso del tiempo.

Concurso de delitos

Las disposiciones del proyecto tenían en cuenta los hechos destinados a ser juzgados por un juez, esto es, los hechos producidos ante una misma jurisdicción. Cuando el acusado ha cometido un delito de lesiones y uno de hurto o ha realizado un homicidio y un robo, en tiempos próximos o lejanos y es sometido ante un magistrado para que lo juzgue, las disposiciones del proyecto no dan lugar a dificultades. Pero éstas se presentan cuando el autor de distintos hechos debe ser sometido a tribunales diferentes lo que puede ocurrir no sólo cuando tales hechos carecen de relación, sino cuando la tienen.

Si un individuo realiza un robo en la capital y no siendo aprehendido comete, algún tiempo después, un homicidio en la provincia de Buenos Aires y es sometido a la justicia de ésta, nos encontramos con dos hechos diferentes que deben ser juzgados por diversos tribunales, independientemente. Los distintos delitos, en este caso, carecen de relación y se juzgan por separado.

No obstante esto, el código debe prever el caso, para no exponernos a que teniendo un solo código para toda la nación,

hechos iguales den lugar a consecuencias diferentes.

Así, si el robo y el homicidio hubieran sido cometidos en la capital, el primero un mes antes que el segundo, y como hechos independientes, el juez de la capital llamado a juzgar los dos delitos aplicará las reglas señaladas para el concurso. En cambio, si el robo fué cometido en la capital, y el homicidio en la provincia, un mes después, los dos delitos serán juzgados por jueces diferentes que no aplicarán las reglas del concurso, por que no apreciarán sino un delito cada uno. Aplicando las reglas del concurso, la pena para el autor de los dos delitos sería inferior a la misma de las dos condenas sumadas que deberían infligir los dos diferentes jueces que apreciarían los hechos independientemente. De donde resultaría que, bajo la vigencia de un código penal único y con las reglas relativas al concurso, tendríamos, como tenemos hoy, soluciones distintas para casos iguales. La ley no debe admitir estas diferencias y el código, para que no se produzcan, debe prevenirlas, teniendo como objeto primordial el que no se verifiquen condenaciones distintas por hechos iguales a causa de las diferentes jurisdicciones. Un código penal no será único en el país, como lo quiere la constitución, si puede dar lugar a resultados divergentes en su aplicación, por razón de tribunales destinados a aplicarlos.

Rivarola en su "Derecho Penal Argentino" dice al respecto: "La organización federativa de la administración de justicia bajo la unidad del código penal de la nación, conduce a consecuencias contradictorias y absurdas. La materia del concurso de delitos exige necesariamente la unidad del juicio, ya que los diversos delitos deberán ser considerados en la unidad del fallo que fijará la penalidad, sea que se sumen las diversas penas o que se fundan en una sola. El código penal debería pronunciarse sobre esta materia para evitar que las reglas fundamentales que él establece, queden suprimidas por las leyes de procedimientos que deben proveer a su aplicación y no a su derogación. Las reglas sobre el ejercicio de las acciones en cuanto deban resolver conflictos jurisdiccionales, deben ser incluidas en la ley general de la misma manera que el código civil lo ha hecho para fijar la competencia en materia de sucesiones, de cumplimiento de contratos o de ejercicio de los derechos reales. Pero el proyecto de 1906 no ha tocado esta cuestión, como no ha tocado otras que pudieran conmovir la susceptibilidad federalista e impedir por la discusión de un detalle la urgente sanción de las reformas penales".

La comisión cree, no obstante la autorizada opinión del coautor del proyecto de

1906, que es necesario definir esa situación que puede tornarse anómala en numerosos casos prácticos; declara desde luego que acepta el criterio del proyecto, concordante con el de 1901 y sus disposiciones, pero considera que las mismas, tal como están, son incompletas.

La comisión consultó especialmente el punto con el doctor Tomás Jofré, profesor de derecho procesal de la universidad de Buenos Aires y autor de los códigos de procedimientos penales de las provincias de Buenos Aires y San Luis; las contestaciones del mismo se encuentran en la "encuesta", habiéndose concertado después del estudio más detenido, el artículo 53 del proyecto que permite una solución.

La dificultad fundamental reside en que las jurisdicciones, tanto en lo federal como la ordinaria, se encuentran determinadas en la constitución y no se pueden modificar por leyes del congreso.

Cuando el juzgamiento de un delito corresponde al juez federal por razón de los lugares, personas o materia, el congreso no puede atribuir la jurisdicción a un magistrado ordinario y recíprocamente.

De manera que en esos casos la unidad del juicio no es posible y como la diversidad de procesos puede dar lugar a diferentes soluciones divergentes, a que antes hemos hecho referencia.

El artículo 50, salva las dificultades dentro de lo posible, dados los preceptos fundamentales que no podrían alterarse por medio de una ley. Se declara desde luego que las reglas relativas al concurso de delitos se aplicarán también cuando después de una condena, pronunciada por sentencia firme, se debe juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por un hecho distinto o cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas. La ley se pone en el caso de que no pueda unificarse el proceso por razón de las jurisdicciones. Un ejemplo aclarará los casos posibles. Una persona se encuentra condenada o procesada por homicidio ante la jurisdicción ordinaria. En la prisión comete otro homicidio; en ese caso como se trata de un delito nuevo que debe ser juzgado por la justicia ordinaria, la unificación del proceso es no sólo posible, sino fácil.

Pero si el individuo estuviera procesado o condenado por falsificación de billetes de banco, el homicidio cometido en la cárcel daría origen a dos procesos, pues el primero no puede sacarse de la jurisdicción federal y el segundo no puede arrancarse de la ordinaria.

Para esos casos se dispone que las partes pueden pedir y los jueces resolver la adaptación de las sentencias a las reglas establecidas para el concurso de delitos.

Esa adaptación la deberá hacer la justicia federal o la ordinaria. El caso es que no se puedan producir sentencias des-

iguales, por razón de las jurisdicciones y que los acusados tengan en la ley el remedio contra cualquiera alteración de las reglas determinadas en la misma.

Extinción de acciones y de penas

En la ley vigente no hay ningún título que se ocupe de esta materia. Sólo se trata la prescripción, que es una de las formas de extinguir las acciones y penas.

Los artículos 59, 60 y 61 referentes a la extinción de las acciones y los artículos 63 y 69 relativos a la extinción de las penas no pueden dar lugar a dificultades, explicándose por su propio texto. La exposición de motivos de 1906 lo ha entendido así, pues no se ocupa de verificar ningún comentario al respecto.

La amnistía puede extinguir la acción o la pena, según el momento en que se dicte la ley respectiva, pero en todos los casos borra la acción de manera que el hecho realizado por el sujeto a quien benefició esa ley no puede ser tenido en cuenta para considerarlo reincidente.

El perdón del ofendido o la renuncia del agraviado, tienen eficacia para el caso concreto a que se refieren y en los delitos para los cuales media la autorización legal.

El indulto hace desaparecer la pena, pero no el delito y la conmutación, generalmente confundida con el perdón, sólo indica el indulto relativo, pues equivale al remplazo de la pena impuesta por otra inferior. La conmutación y el indulto no se pueden decretar sino después de la condena del acusado por sentencia ejecutoria. Esta regla se ha violado en algunos casos, pero no por eso es menos imperativa. El acusado se pone a la orden del juez y no sale de esa jurisdicción hasta que termina el proceso. Sólo cuando media condena, se entrega el reo a la autoridad administrativa, la cual lo tiene a sus órdenes para hacer cumplir la sentencia.

Los principios relacionados con la prescripción, de la cual se ocupa la ley vigente, como antes se ha dicho, han sido discutidos en la doctrina y en la práctica.

Sin entrar a disquisiciones que se encuentran en los tratadistas y con relación a nuestra ley en los dos libros del doctor Rodolfo Rivarola, vamos a ocuparnos del proyecto de 1906 y sus disposiciones.

Establecía éste, en el artículo 66, que la prescripción de la acción se operará por la buena conducta del imputado durante el tiempo fijado en el mismo. La misma exigencia contiene el artículo 69 relativo a la prescripción de las penas. Estos preceptos, tomados del proyecto de 1891, exigen la buena conducta, según la exposición de motivos de aquél, porque la enmienda del delincuente es condición de la prescripción, la cual es una gracia hecha por la sociedad al culpable.

El doctor Herrera critica esa exigencia,

distinguiendo entre gracia y prescripción y sosteniendo que ésta se opera por el transcurso del tiempo. Aceptando las ideas sostenidas en esa crítica, hemos suprimido ese requisito. La comisión ha tenido en cuenta que si el autor del hecho hubiese cometido otro delito, la prescripción se interrumpiría y no lo podría amparar. La condición para que ésta se produzca es que pase el tiempo, sin que el delincuente tenga nada que hacer con la justicia. Si cae en manos de ésta, viene el juicio. El factor buena conducta puede ser motivo para injusticias, pues pasado el término, el sujeto no podría quedar librado sin que se investigara qué conducta tuvo, y tomo eso es cuestión de apreciaciones, podría atenderse contra la libertad obtenida. Cuando el tiempo pasa, la sociedad olvida y el interés del castigo desaparece.

Los demás artículos del proyecto de 1906 se han conservado con las modificaciones que derivan del sistema de penalidad de nuestro proyecto.

Del ejercicio de las acciones

La ley vigente en diferentes partes, y de manera desordenada, habla del ejercicio de las acciones. El proyecto de 1906, procediendo con acierto, ha dedicado un título a este importante asunto. La exposición de motivos dedica pocas líneas a los fundamentos del título, probablemente porque en la que fundamentó el proyecto de 1891, de donde ha sido tomada esta parte, se trata el asunto con cierta extensión.

Las acciones se dividen en tres grupos: las que se inician de oficio, las que dependen de instancia privada y las privadas. Los diferentes artículos caracterizan bien las respectivas situaciones.

La comisión ha aceptado los artículos del proyecto de 1906 y los fundamentos de éste y los del de 1891, suprimiendo sólo en el artículo 77, en nuestro proyecto, el 73, lo relativo a amenazas, de acuerdo con lo aconsejado en la parte especial.

Significación de conceptos

El proyecto trae un título destinado a explicar la significación de algunos términos. Hemos considerado más preciso hablar de conceptos y no de palabras y en ese sentido se ha redactado el epígrafe, pues aceptamos ideas y no definiciones. Hemos suprimido, por eso, todo lo que tiene este último carácter, conservando lo demás.

LIBRO SEGUNDO

DE LOS DELITOS

Consideraciones generales

El presente informe ha debido ser extenso en la parte general, ya que los problemas de derecho deben resolverse al

dictar las disposiciones genéricas, y las explicaciones se alargan por grande que sea el propósito de sintetizar. Como en esta parte se limita el código a indicar los delitos y a señalar las penas, la comisión puede y debe reducir la exposición, pues las normas están explicadas y no corresponden verificar comentarios.

Para llegar a la individualización de la pena, la comisión ha proyectado represiones que permitan la mayor amplitud a los jueces, aceptando los criterios de flexibilidad proclamados en 1891 y seguidos en 1906. Ha aceptado también con el mismo propósito el criterio de las penas paralelas llamado a dar grandes resultados. Cuando solamente se tiene en cuenta el hecho material, la pena única y rígida, se explica; pero cuando se considera el agente, su naturaleza y su carácter, se conviene en que deben sancionarse para los mismos hechos, penas flexibles y aun diferentes. El doctor Herrera así lo sostiene y recuerda que aceptan el sistema los códigos más adelantados y modernos como el italiano, el alemán, el húngaro y el holandés, conteniendo los proyectos suizo, japonés, ruso, francés y austriaco.

El sistema consiste en aplicar para los delitos más graves penas alternativas que permitan al juez elegir según el sujeto. Por eso en los delitos castigados de manera más severa, damos la opción aplicando la pena de reclusión o prisión.

El proyecto de 1896 aplicaba este criterio en los casos para los cuales mantenía la pena de muerte, pues la admitía de manera alternativa.

Alimena en su obra "I limiti e i modificatori dell'imputabilità", se ocupa de las penas paralelas y verifica una elocuente defensa de las mismas (tomo 10., página 399).

La comisión ha acentuado en la parte general su manera de pensar, de modo que es innecesario insistir ahora sobre los mismos puntos.

Homicidio

Hemos aceptado el articulado del proyecto de 1906 concordante con el de 1891 con las modificaciones introducidas por el diputado Moreno.

Las disposiciones son análogas a las que hoy rigen, pero mejor ordenadas y con el criterio científico que impone la parte general. No debe olvidarse que el código en esta parte fué modificado por la ley número 4189, que tomó sus preceptos del proyecto de 1891.

La comisión ha aceptado también los principios del proyecto de 1906, sobre la culpa, suprimiendo el título especial que legislaba sobre la misma para fijar en cada caso las penas que corresponden cuando el delito ha sido cometido por imprudencia. Y ha introducido algunas otras modificaciones de detalle, que se explican por sí mismas.

Lesiones

Ha mantenido, igualmente, en esta materia, las disposiciones del proyecto de 1906, adaptándolas a las normas de la parte general. Los antecedentes de este capítulo se encuentran en el proyecto de 1891 tomado principalmente del código italiano.

Este delito, de acuerdo con los principios de nuestra ley, se encuentra bien estudiado, en la obra de Francisco Pujia y Roberto Serratrice, titulada: "El delito de lesiones".

No vale la pena hacer las transcripciones bastando la cita.

Homicidio y lesiones en riña

La comisión mantiene los preceptos del proyecto de 1906 con las adaptaciones que derivan de lo establecido en su parte general.

Duelo

En esta materia presentamos dos despachos: uno de la mayoría formada por cuatro miembros, y otro de la minoría, suscripto por el diputado de Tomaso. Las razones de la minoría se encuentran consignadas en la exposición del mencionado señor diputado; las de la mayoría van a continuación y en el cuerpo del presente informe.

El duelo, según el concepto corriente bien sintetizado en la definición que trae Chaveau y Helié en la "Theorie du Code Penal", es un combate singular que libran dos personas en su interés particular y que es precedido por un convenio que determina el modo, lugar y tiempo. El duelo, que es una costumbre social existente de mucho tiempo atrás, ha debido ser objeto de atención por los legisladores y por los autores de derecho. ¿Debe castigarse? Sería la primera pregunta. Y si se opta por el castigo, ¿debe ser la pena la ordinaria, según los resultados, o una especial que lo considere como delito diferente de los otros?

Uno de los países donde más se ha debatido el asunto ha sido Francia. Allí existió la legislación más completa sobre la materia: "el edicto de los duelos" establecido en el reinado de Luis XIV, en el que preveía todas las fases del proceso, desde que se iniciaba o provocaba, hasta que terminaba. Discutían entonces, y las adquisiciones eran largas, a qué personas amparaban o regían esas leyes, pues es sabido que existían clases y que las leyes llamadas caballerescas eran sólo para los señores. De tiempo en tiempo y en las diversas etapas de la historia de ese país, la cuestión del duelo se planteaba para levantar prohibiciones o para dejar libertad de realización.

Después de la promulgación del código penal, el asunto volvió a discutirse, pues

no habiendo dicha ley declarado que el duelo fuese delito especial, debía resolverse si producido un lance los tribunales debieran abstenerse de juzgarlo o aplicar las reglas de derecho común, según cuáles fueran los resultados.

Los tribunales han resuelto que los resultados del duelo deben juzgarse como delitos ordinarios de homicidio o lesiones, pero los tribunales mismos y, sobre todo, el jurado, ha encontrado atenuaciones en los casos que se les han llevado, pues la mayor parte se sustraen por medio de las habilidades de quienes lo conciertan.

Si el código suprimiera el título del duelo, como éste no se encuentra amparado en ninguna parte, los jueces deberían apreciar los resultados ya que no hay formas reconocidas, fuera de esa, para matar o herir a otra persona. ¿Cuál es, entonces, la solución que debe aconsejarse dentro de nuestra ley?

Entiende la comisión que no debe presentar proyectos, teóricos, ni con normas discordantes con el medio para el cual han de ser aplicadas. Ese punto de vista debe tenerse siempre en cuenta al legislar. Las impresiones personales y las imposiciones propias deben descartarse de las obras legislativas. Por eso, siendo el duelo una costumbre social que aun no ha logrado hacer desaparecer nuestra civilización creciente, consideramos oportuno mantener los preceptos del proyecto y referirnos a lo que dice al respecto la exposición de motivos del proyecto de 1891 que ha tratado el punto de una manera muy acertada. Se expresa así la comisión redactora de aquel proyecto: "Pero sea que el duelo se reprima por sus resultados como delito de homicidio o de lesiones, como lo pretende la jurisprudencia francesa, sea que se reprima como delito sui generis, contra las personas o contra la administración de justicia, ocurre en todas partes el mismo fenómeno: la ley es impotente para obligar a la justicia a que mande a la cárcel al que, cediendo a un estímulo de honra propia, o de honra de las personas más íntimamente ligadas por los más estrechos vínculos de la naturaleza o del recíproco afecto, se ha visto obligado a provocar o aceptar un duelo en condiciones regulares, con elección de armas, presencia de padrinos, etcétera. Se dirá que éste es un medio brutal de obtener la reparación de una ofensa, que es salvaje y antisocial, porque desconoce la institución de la justicia como medio reparador del derecho lesionado, y retrocede al estado de la justicia por mano propia. Pero si en una sociedad civilizada son personas cultas y muchas veces distinguidas por su alta ilustración y su honorabilidad las que procuran una reparación en un lance de armas, no puede tomarse en tanta consideración el argumento indicado, que impida ver que

" los medios de reparación de las ofensas que las leyes ofrecen, son insuficientes y que el modo de evitar los duelos no está en reprimir los inspirados en verdaderos móviles de honor, sino en procurar los medios legales de reparación que los hagan totalmente innecesarios. Entre las ofensas que llevan más frecuentemente al duelo deben contarse en primer término las injurias inferidas públicamente en la prensa, en el parlamento, especialmente por motivos políticos que a todos interesan y que estimulan la curiosidad y la maledicencia general. Si no se deja al ofendido, según el sistema de nuestro código otro medio de alcanzar reparación de la injuria que procurar la aplicación de una pena, que si castiga al autor no borra la imputación, quedará en la mente de todos la consideración de que es posible que el penado haya dicho la verdad y de que el ofendido tenga realmente el vicio o falta de moralidad que se le imputa. ¿Puede quedar satisfecho el honor con la aplicación de un arresto y multa al injuriante? Una alma grande y noble con la seguridad de una reputación intachable puede considerarse superior a una injuria ruin. Franklin, injuriado injusta y públicamente en Londres por el solicitador general Weddeburn de haber obtenido por los medios ruines de un ladrón, las cartas de Hutchison, gobernador de Massachusetts, que conspiraba contra el interés de las colonias, pudo decir que nunca había sentido mejor el poder de una buena conciencia, pues si no hubiera considerado como una de las mejores acciones de su vida el acto que le había valido tales insultos, nunca hubiera podido soportar semejante ultraje. Pero no todos se encuentran en las condiciones de aquel grande hombre. La pena del injuriante no repara el honor del injuriado. Por esto, si por una parte suprimimos la penalidad del duelo regular, por otra establecemos una legislación de las injurias que tendrá mayor eficacia en evitar los duelos que la penalidad suprimida. Se puede observar que la imputación de un delito acusable por el ministerio fiscal, o de un delito cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, lejos de dar lugar a un duelo, da lugar a un caso judicial cuando el imputado tiene interés en vindicarse. Es que en los casos de calumnia la ley admite la prueba de la imputación, y el ofendido sabe que el mejor testimonio de su inocencia será la declaración judicial de la falsedad de la imputación que la muerte en duelo del autor de la misma. Autorizando al imputado de un vicio o falta de moralidad a consentir en que el autor de la imputación produzca prueba, si ella es falsa, tendrá mayor interés en recurrir a los tribuna-

"les que a la decisión por las armas, porque este último recurso no hará sino dar presunción y color de verdad a la condición atribuida al ofendido. Por otra parte, si ésta es cierta, el ofensor podrá reusar con toda razón el duelo, porque tendrá en su favor la presunción común de verdad contra el que pudiendo llevarlo a los tribunales y provocarlo a producir prueba, lo provoca a un lance de armas".

"Muchas otras causas y circunstancias diversas pueden dar origen a los duelos. Creemos que las observaciones que preceden respecto del caso de las injurias presentado por vía de ejemplo son aplicables a todos los demás. El duelo desaparecerá de la sociedad, cuando ésta pueda proporcionar todos los medios de reparación de las ofensas; las represiones directas quedarán escritas en la ley, para descrédito de la misma, mientras no se provea a aquellos medios; la falta de los mismos puede colocar al ofendido en un verdadero estado de legítima defensa, desde que no encuentre otro medio racionalmente necesario para contener la difamación que el duelo; el estímulo del honor hará siempre que se mire con benevolencia y que se disculpe a los duelistas".

Las disposiciones del proyecto de 1906, que aceptamos sin modificaciones, se inspiran en los mismos criterios directivos.

Abuso de armas—

La comisión no ha introducido modificaciones en el capítulo 50. del artículo 10. de la parte especial. Acepta el proyecto con las modificaciones introducidas por el diputado Moreno explicadas en los fundamentos que dió cuando lo presentó a la cámara.

Abandono de personas—

Tampoco se han introducido modificaciones en este capítulo, aceptándose por la comisión el texto del proyecto de 1906.

Delitos contra el honor—

La comisión en esta parte ha sustituido el título del proyecto de 1906 por otro que ha tomado principalmente del proyecto de 1891.

La exposición de motivos del proyecto de 1906 decía que había transformado las disposiciones vigentes adoptando otras nuevas que tendían a que se castigaran esos delitos; verificaba al respecto una crítica a lo que ocurría frecuentemente o sea a la impunidad para esos delitos, aseguraba que no había justicia para los autores de ataques contra el honor, el que no estaba protegido en la medida necesaria.

El proyecto suprime las definiciones del código, elimina las enumeraciones de

casos que se contienen al tratarse de la injuria, suprime la retractación y establece cuándo se puede probar la imputación hecha.

La pena que sanciona es la prisión para la calumnia y de multa para la injuria.

El proyecto no es perfectamente claro, pues los artículos 112, 113, 114 y 115, tratan sólo de la injuria o difamación y el 116 se limita a establecer que si en los casos del artículo 114 el acusado no probare la verdad de la imputación será culpable de calumnia. Parecería por esa redacción que el juicio siempre debiera iniciarse por injuria o difamación y que solamente después de fracasar el acusado en la prueba quedaría la calumnia caracterizada.

Para evitar esos inconvenientes y creando más claro el proyecto de 1891, lo hemos adoptado con preferencia.

El doctor Rodolfo Rivarola en el tomo 30, página 484 de la Revista de Ciencias Políticas, ha publicado un estudio sobre esta materia que se insertó en la Revista de Legislación y Jurisprudencia de Madrid, — números de marzo-abril de 1911, — en el cual examina la legislación comparada y el proyecto de 1906. Las bases que propone el doctor Rivarola son las que esta comisión acepta, aunque cambiando el articulado por considerar más claro y completo el del proyecto de 1891, del que también fué coautor el doctor Rivarola.

Esas bases se concretan en los siguientes términos:

"1.ª.—Según el método observado en nuestro proyecto para todos los demás delitos especiales, una disposición general contendría la represión de toda ofensa al honor o a la reputación y dignidad de una persona que no resultare especialmente prevista en las otras disposiciones particulares del mismo título. Podría llamarse a este delito con el nombre general de "injuria".

"2.ª.—Por persona ofendida se entendería no sólo una persona determinada, sino los miembros de una corporación cuando la ofensa se dirige a la misma".

3.ª.—La imputación sería calumniosa cuando en los casos especiales en que se permite probar la verdad de la imputación, el acusado no la probare".

"La penalidad no debería ser severa en esta materia más que la gravedad de la pena interesa la inmediata represión".

"La acusación y la denuncia judicial calumniosa no constituirían delitos contra el honor, sino contra la justicia".

"La divulgación de la injuria se consideraría particularmente como delito de "difamación".

"Las injurias de obra o de palabra que sólo ofenden la dignidad y el amor pro-

pio, tendrían la designación de "ultraje".

"La represión se dispondría de modo que cuando el acusado atribuyere al reo un delito más grave, según la calificación que él mismo diere al hecho, el error de calificación no impidiera al juez imponer la pena correspondiente al mismo hecho con la calificación de un delito menor. Hubo sentencia en que el acusado fué absuelto porque lo que el querellante acusó como calumnia constituía injuria".

Sobre el proyecto de 1891 verificamos pocas modificaciones que no alteran los conceptos fundamentales. Así en el artículo 20. del capítulo, el 138 del proyecto, suprimimos las palabras que se refieren a los medios de injuriar con el propósito de dejar a los magistrados la mayor amplitud de procedimiento. En el artículo 143 del proyecto suprimimos el último párrafo que no es necesario desde que quien reproduce calumnias o injurias proferidas por otro, tiene la pena del autor. Y en el artículo 145 extendemos los efectos a las asociaciones.

Ese último artículo ha sido objeto de amplia discusión. En nuestros tribunales se ha controvertido frecuentemente el alcance de la retractación, establecida en el código vigente de manera restrictiva, pero ampliada a todos los casos por las leyes locales de procedimientos.

El doctor Rivarola en casos planteados ante la justicia consiguió hacer variar la jurisprudencia tradicional que admitía la retractación declarándose que ella sólo procedía en los casos de injurias verbales o escritas, leves. Pero esos fallos sólo se han producido en la capital federal y en algunos departamentos de la provincia de Buenos Aires, siendo necesario para hacer labor ordenada y eficiente colocar preceptos que no dejen ninguna duda.

El proyecto de 1891 admitía la retractación, en todos los casos de injurias contra particulares; el proyecto de 1906 suprimió el artículo respectivo, desechando ese medio de extinguir la acción penal.

La comisión adopta un sistema intermedio; admite la retractación pero no en cualquier estado del juicio, sino al contestarse la querrela o antes de hacerlo el acusado. Si éste afronta el juicio y no se retracta públicamente desde el principio debe estar expuesto a las consecuencias.

Las razones son obvias. El que comete ese delito, es eficaz en el objeto que se propone, por la difusión de la especie. Cuando el atacado afronta el proceso, y acusa, si el querellado no retira sus imputaciones, afirma su imputación y aumenta el perjuicio. Una retractación posterior, después de un juicio largo, muchas veces con condena, no destruye los efectos del delito, importando muchas veces una burla más para la víctima, obligada si no es solvente el autor de las imputaciones, a gastos y contrariedades de todo género.

Por eso establecemos que sólo procederá la retractación al iniciarse el proceso.

DELITOS CONTRA LA HONESTIDAD

Adulterio—

La comisión no ha modificado las disposiciones del proyecto de 1906, que repiten las del 1891 incorporado a la ley vigente por la reforma de 1903.

La acción por adulterio no podrá entablarse sino después de obtenido el divorcio ante la jurisdicción civil por esa causa. Los antecedentes de esa reforma se encuentran en la exposición de motivos de 1891, y en "La ley penal argentina", del doctor Rodolfo Moreno (hijo).

Violación y estupro—

La comisión ha aceptado el proyecto de 1906 con las modificaciones del diputado Moreno expuestas en los fundamentos que presentó a la cámara.

Sólo se ha hecho una modificación en el carácter de la penalidad aceptando el criterio general de los castigos alternativos a los efectos de la mejor individualización.

Corrupción y ultrajes al pudor—

En esta parte la comisión ha introducido modificaciones de importancia sobre el proyecto de 1906, que había sido ya modificado por el diputado Moreno.

Ha suprimido, desde luego, la institución "casas de prostitución" y la de "regentes" de las mismas. Mantener esos enunciados equivale a legalizar ese comercio y darle una situación de estabilidad inconveniente.

La reglamentación de la prostitución corresponde a las municipalidades y éstas pueden hasta prohibir el funcionamiento de las casas donde se practica. De manera que la ley no debe erigirlas en instituciones consagrándolas como tales.

La comisión ha introducido también la pena alternativa, de acuerdo con los principios generales y se ha referido al factor engaño, que es uno de los que más interviene cuando se trata de prostituir. Ha tenido a la vista para proyectar las modificaciones, el proyecto que ha presentado en las sesiones de este año, contra la trata de blancas, el diputado doctor Angel M. Giménez.

Teniendo en cuenta que en muchos casos la prostitución es impuesta a la mujer por el individuo que hace con ella vida marital, se castiga especialmente a éste, aun cuando hubiere mediado el consentimiento de la mujer.

Nuestras leyes se han preocupado hasta ahora de castigar a los que comercian o lucran con la prostitución de menores.

teniendo siempre en vista la casa de prostitución y sus regentes.

Pero no se ha ido al fondo del asunto, ni se ha buscado el remedio para el mal realmente sentido en nuestra modalidad nacional.

Aquí es frecuente el caso del individuo que haciendo vida marital con una mujer vive a costa de su prostitución. El individuo costea sus vicios con el "trabajo" de la mujer, a la cual coloca en una casa de tolerancia a la cual obliga a ejercer su comercio en las calles. El sujeto cuando la coloca cobra los rendimientos y cuando la mantiene en aparente libertad, la acecha para quitarle el dinero de "los clientes".

Este sujeto sólo es penado cuando se prueban violencias. Pero es el caso que tienen de tal manera dominadas a sus víctimas que todas las veces que éstas son llamadas a los tribunales para averiguar si se ejercitan violencias sobre sus personas, niegan categóricamente su concurrencia, salvando al explotador que las trata peor que los antiguos negreros a sus esclavos. Es preciso hacer desaparecer esa lacra social, es necesario reprimir severamente a esos sujetos haraganes que viven de la corrupción de sus víctimas, y a ello se encamina el proyecto, que los castiga aun mediando el consentimiento de la mujer. Lo que la ley no debe tolerar es esa profesión peligrosa, fuente de vicios, de corrupciones y de sufrimientos para las víctimas desgraciadas.

Lo demás del proyecto con las modificaciones del diputado Moreno se mantiene por la comisión.

Rapto—

Las disposiciones en esta parte no han sido modificadas.

Tampoco se han introducido reformas en las disposiciones comunes a los delitos contra la honestidad.

DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL

La comisión mantiene los preceptos del proyecto sobre matrimonios ilegales y supresión y suposición de estado civil.

En este último capítulo acepta la modificación introducida por el diputado Moreno al proyecto de 1906.

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

En los capítulos que se refieren a los delitos que atentan contra la libertad, la comisión ha realizado sobre el proyecto de 1906 un minucioso y prolijo trabajo de corrección y precisión de términos y conceptos, a fin de que la ley, en materia tan delicada, no tenga nada oscuro ni vago.

El código actual establece (Ley de reformas artículo 30), una penalidad de tres meses a un año de arresto para el

que obligase a un obrero a tomar parte en una huelga con "violencia o amenazas". La ley llamada de defensa social (artículo 25) agravó el concepto y la penalidad, disponiendo que sufriría presidio de uno a tres años el que "por medio de insultos, amenazas o violencias trate de inducir a una persona a tomar parte de una huelga o boycott". La comisión cree que es necesario, en esta materia, después de las críticas y dificultades de todo género que ha provocado la ley 7029, volver al régimen anterior, mejorándolo. En ese sentido opina que debe punirse como delito el acto de obligar materialmente a alguien a tomar parte de una huelga, por medio de violencia física, forma de coacción que, por otra parte, se traduce en la generalidad de los casos en lesiones. Mantiene el máximo de la penalidad establecida en el código, un año, pero reduce el mínimo a un mes, de acuerdo con el principio seguido en todos los casos de permitir al juez, en forma amplia, la individualización de la pena adecuada a la modalidad de cada caso.

Al proceder así, la comisión entiende que esa disposición no responde a ningún concepto especial de represión, sino a la protección de la libertad individual. Por eso ha completado el artículo con una segunda parte, que extiende ese concepto a la protección de la libertad de trabajo y asociación de los obreros contra los patrones o empresarios y de estos mismos entre sí. Es frecuente el caso de patrones que hacen coacción en forma pública sobre sus obreros o empleados para que abandonen la sociedad gremial a la cual pertenecen voluntariamente o para que ingresen a otra; y también sobre sus propios colegas de industria o comercio para que secunden un cierre o lock-out decretado con propósitos de resistencia.

Esas formas de coacción lesionan la libertad de industria y de asociación que tiene toda persona. Es indispensable, por lo tanto, hacerlas entrar en el cuadro de la legislación penal positiva, hasta con fines de solidaridad social.

El artículo 166 del proyecto de 1906 ha sido eliminado por la comisión, por considerarlo redundante, puesto que, excepto los casos a que se refiere el artículo 158 de nuestro proyecto de código, toda violencia o amenaza contra otro, para impedir o restringir el ejercicio de la industria o comercio, está por fuerza comprendido, si lo inspira un propósito delictuoso, en otros capítulos de la ley.

En el artículo referente a propaganda desleal y maquinaciones fraudulentas se han agregado las palabras "en su provecho", para subrayar bien la circunstancia que da al acto carácter de delito.

Se ha suprimido igualmente el artículo 168 del proyecto de 1906 referente a la libertad de cultos, porque el que impide o turba una función o ceremonia de

algún culto, dentro de un recinto cerrado, que es donde generalmente se celebran, o en la vía pública, cuando se trata de actos que se efectúan en las condiciones normales de todos los que implican el ejercicio de la libertad de reunión, cometer un delito que la comisión ha contemplado en forma general en el artículo 160 del proyecto. Por otra parte, la comisión cree que debe dejar sentado, para honor de todos, que la libertad de cultos es observada en nuestro país de una manera amplia y efectiva por los ciudadanos, en lo que se refiere a la seguridad que los ministros y fieles de cada culto tienen para practicar sus ceremonias. No se registra un solo caso de que a ninguna iglesia ni grupo religioso se le haya impedido materialmente la celebración de una función o ceremonia, ni perturbado en la exteriorización de sus doctrinas, a pesar de las diferencias ideológicas que se han producido en el país como consecuencia de su desarrollo histórico.

El código actual (Ley de reforma artículo 30), castiga con tres meses a un año de arresto al que "impidiera" o "turbare" una reunión "lícita". En el proyecto de 1906 se ha copiado el concepto, manteniendo el máximo de la penalidad. La comisión entiende que es esta una materia muy delicada y que a los fines de la penalidad es indispensable que el legislador precise con toda claridad los conceptos, para que en la aplicación de la ley no se pueda ir nunca más allá de los límites queridos, con peligro del ejercicio de una libertad que ahora más que nunca, desde que impera la nueva ley electoral, tiende a ser cada vez más usada por todos los partidos en que se divide la opinión. Por eso ha agregado la palabra "materialmente" que define bien el concepto de "impedir", y la frase explicativa "con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto" a fin de que en ningún momento pueda considerarse como delito el pedido de palabra para hacer controversia, ni ningún otro acto por el estilo. Consecuente con ese criterio la comisión reduce la penalidad al término de quince días a tres meses, teniendo en cuenta no sólo las circunstancias especiales en que se comete ese delito, sino también que en los casos realmente graves se traduce en actos que caen bajo el imperio de otras sanciones.

En cuanto al artículo tendiente a asegurar la libre circulación de un libro o periódico, la comisión acepta en general el proyecto de 1906, pero suprime las palabras "que no contengan escritos ilícitos", porque eso implicaría establecer la censura previa. Nadie sino la autoridad competente puede determinar el carácter ilícito de una publicación. Si ésta constituye un delito, el caso está legislado en la sección respectiva de este código, pero a nadie le está permitido impedir la cir-

culación de un libro, con ese pretexto, por que si no la libertad de prensa, autorizada por nuestra carta fundamental, estaría vulnerada en una de sus manifestaciones públicas más importantes: la libre circulación de la palabra escrita.

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD POLITICA

El proyecto de 1906 preveía con el título de Delitos contra la libertad política, aquellos que se cometieran contra la libertad del sufragio, es decir, articulaba penalidades que actualmente se encuentran contenidas en la ley electoral.

Ha considerado la comisión que era inconveniente mantener estas sanciones en el código y que es superior el sistema actual, que se reduce a colocarlas en la ley general de elecciones.

El delito electoral es un delito especialísimo, que obedece a las circunstancias y que es de penalidad eminentemente variable. Dictada una ley electoral con las necesarias previsiones, surgen generalmente una serie de maniobras tendientes a burlarla. Por eso es que frecuentemente tiene que modificarse esa ley, a los efectos de prever las nuevas infracciones que la práctica de la misma crea en el comicio y fuera del comicio.

Dada, por consiguiente, la movilidad de ese conjunto, es mucho más conveniente sacarlo del código penal que debe tener normas, si no fijas, por lo menos de una flexibilidad inferior a aquellas que deben encerrar ciertas leyes especiales. Cuando sobrevienen formas nuevas en la delincuencia electoral, es indispensable la modificación de la ley, a fin de garantizar los derechos a que ella se refiere, y por consiguiente, la reforma de la ley se hace necesaria.

Además, debe tenerse en consideración que las penalidades electorales no solamente se encuentran en la ley nacional de elecciones, sino en todas las leyes provinciales que reglamentan todo lo relativo a los comicios locales.

Es esta, por tanto, una materia que corresponde a cada una de las provincias, y por consiguiente la penalidad en el código solamente tendría el alcance de regir para la capital federal, y el código penal, como se ha establecido, debe ser dictado para que impere en toda la nación. La comisión tiene en cuenta sin embargo que las falsedades que pudieran cometerse con motivo de los actos electorales están expresamente castigados en otra parte del mismo código, de manera que la supresión del capítulo solamente alcanza a las penalidades eminentemente electorales, que son las que entiende deben colocarse en la ley especial. Un delito de falsedad común, realizado con motivo del acto electoral, tendría el mismo alcance que cualquiera

otro delito ordinario cometido en análogas condiciones.

Conservamos no obstante lo expuesto, el artículo 77 que se refiere al ejercicio de las acciones, porque de acuerdo con lo establecido en el artículo 30. del proyecto las reglas generales sobre aquéllas, lo mismo que sobre las orientaciones de las leyes represivas, corresponden al código.

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

Hurto—

Nuestra legislación en esta materia ha sido severamente criticada, porque contiene preceptos desarmónicos y penalidades leves en unos casos y exageradas en otros. La ley de reformas, tomada del proyecto de 1891, se preocupó de agravar las represiones con el objeto de aminorar la existencia de esos delitos; pero aun habiendo tenido en cuenta el conjunto del código, incurrió en una serie de desarmonías que han presentado un conglomerado falso de uniformidad. La ley olvidó también que los delitos no se suprimen ni se reducen por el hecho de aumentarse los castigos. En algunos casos, y de acuerdo con esa ley, era más conveniente cometer hurto que robo, porque la penalidad para el primer delito era inferior que para el segundo, a pesar de la mayor gravedad que el robo significa.

La mayor parte de las críticas se han hecho sentir alrededor de los enormes castigos que se sancionan para los hurtos de pequeña importancia, sobre todo los cometidos por domésticos, porque no habiéndose tenido en cuenta el valor que representaba el objeto hurtado, limitándose a disposiciones uniformes, pudieron producirse condenas exorbitantes por delitos de escasísima importancia. Se han dado casos en que los propios jueces, después de condenar a los delincuentes, han requerido del poder ejecutivo la conmutación de la pena, porque han encontrado desproporcionado el castigo con relación al hecho realizado. El doctor Moreno en "La ley penal argentina", ha hecho la crítica de esa ley señalando los casos más salientes.

La comisión ha aceptado las principales disposiciones del proyecto de 1906, manifestando su acuerdo con la disposición general sobre hurto, contenida en el artículo 162. Ha aceptado también el criterio del proyecto respecto a hurtos calificados, teniendo en cuenta que la pena de los mismos es lo bastante elástica como para que los jueces puedan graduarla según los casos que se presenten. Pero teniendo en consideración que los delitos cometidos con abuso de confianza son la obra de los sirvientes, muchas veces menores de edad, ha suprimido la calificación especial del inciso 2o. Los objetos que se tuvieron en vista cuando ese inci-

so se colocó en la ley fueron los de evitar que delincuentes avezados a infracciones se sirvieran de los domésticos como instrumentos para el delito. Por eso se colocó una penalidad tan fuerte; pero las consecuencias reveladas por la práctica han evitado el mal que se pretendía remediar y que, en cambio, han producido numerosas injusticias. La comisión, por tales causas, ha suprimido ese precepto.

Robo—

La comisión ha aceptado el criterio general sobre robo contenido en el artículo 164, suprimiendo la palabra "intimidación" y exigiendo que la violencia sea física, porque esto es lo que caracteriza al robo. Ha aceptado, de acuerdo con los principios generales, el criterio de la pena alternativa, colocando "reclusión o prisión" en reemplazo de presidio.

Conserva las demás disposiciones del título, explicadas en las exposiciones de motivos de los proyectos de 1891 y de 1906.

Extorsión—

En este capítulo la comisión no ha modificado sino el artículo 169 agregando después de las palabras "obligare a otro" la palabra "maliciosamente", que precisa el concepto de una manera mucho más acertada que aquellas de "intentare compeler a otro", que usaba el proyecto de 1906.

Estafas y otras defraudaciones—

La comisión ha conservado también en esta parte el proyecto de 1906. En el inciso 2o. ha suprimido las palabras "negare haber recibido" porque el delito que el mismo prevé es precisamente el de negarse a restituir y no es necesario por consiguiente acentuarlo. Ha suprimido el artículo 190 porque la previsión contenida en él importa más bien una falta, y ha agregado al inciso 4o. del artículo 175 las palabras "o en blanco" que tienden a caracterizar el delito que ha querido prevenir la comisión.

Como es sabido, era frecuente que los prestamistas se hicieran firmar cheques con fecha en blanco o con fecha posterior a aquella en que verificaban el préstamo, a los efectos de que, si no fueran pagados de la deuda contraída, pudieran usar del cheque como un arma, denunciando al firmante como expedidor de un documento doloso. La comisión, de acuerdo con las conclusiones del proyecto del señor diputado del Valle, ha establecido que es delito el cometido por el acreedor que a sabiendas exige o acepta de su deudor a título de documento de crédito o garantía por una obligación no vencida,

un cheque o giro de fecha posterior o en blanco. De esa manera queda perfectamente llenada la previsión que se tuvo en cuenta. El precepto es sano y tiende a combatir las maniobras dolosas de la usura, que, amparada por la ley, había restablecido la prisión por deudas.

Quebrados y otros deudores punibles—

En este capítulo la comisión no ha hecho más que una modificación, la contenida en el artículo 178, que extiende las responsabilidades de los directores, administradores o gerentes de la sociedad o establecimiento fallido a los contadores o tenedores de libros. Generalmente los directores, administradores o gerentes que realizan esas operaciones dolosas, se valen de los contadores o tenedores de libros como instrumentos materiales para realizarlos. Seguramente si no contaran con esos auxiliares, el delito no podría cometerse o por lo menos no tendría la eficacia que ellos persiguen. Por consiguiente, este castigo será previsor para esta clase de infracciones.

Usurpación—

En el presente título, la comisión no ha introducido más que las modificaciones que se contienen en el artículo 182. Esas reformas que se explican por sí mismas y no tienen más objeto que precisar el concepto del delito, por cuanto éste no existiría en el caso de que se usaren aguas, se encauzaren, se desviaren, o se represaren si no fuera con el objeto de causar perjuicio a otro.

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELLECTUAL E INDUSTRIAL

La comisión ha pensado que todas las previsiones de este capítulo deben ser su primidas del código penal. Si bien se persigue la unidad de la legislación represiva, no es menos cierto que debe buscarse esa unidad con relación a los delitos y no con respecto a las infracciones que emergen de la misma ley que las establece. La materia de marcas de fábrica está legislada en una ley especial y es el articulado de esa ley donde deben encontrarse las represiones necesarias tal como hoy se hallan consignadas. Por esas consideraciones la comisión ha preferido dejar esa materia a la ley especial de marcas de fábrica y comercio.

Los atentados a la propiedad intelectual también se reprimen en la ley respectiva.

Daños—

En este capítulo la comisión no ha introducido modificación alguna, aceptando las conclusiones del proyecto de 1906.

Tampoco las ha introducido en las disposiciones generales a todos los delitos contra la propiedad, consignados en el artículo 185.

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA

Incendio y otros estragos—

La comisión acepta el proyecto de 1906 y únicamente ha modificado la penalidad, para adaptarla al sistema de castigos alternativos, que se ha explicado en la parte general. Consigna, por consiguiente, en lugar de las penas de presidio o de prisión a que el proyecto se refería, las de reclusión o prisión, en forma paralela.

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACIONES.

Las modificaciones hechas en este capítulo son las mismas a que nos hemos referido con relación al anterior, es decir, tienden a cambiar la penalidad existente para adaptarla a las formas del nuevo código, estableciendo la forma alternativa.

En el artículo 195 se ha hecho un agregado para precisar bien el concepto, pues entiende la comisión que solamente puede considerarse como delito el abandono de servicio en un tren o en un buque, cuando se hace antes de llegar al término del viaje ferroviario o al puerto de destino. De otra manera ese hecho constituiría un acto voluntario del empleado fuera del servicio correspondiente.

Piratería—

La comisión acepta en un todo el proyecto de 1906, habiendo modificado también la penalidad, a los efectos de adaptarla, en la forma alternativa, a los principios que se han consignado en la parte general.

DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA

Iguales observaciones a las anteriores formula la comisión en este capítulo, en el cual las únicas modificaciones consisten en la adaptación de la penalidad a los términos generales del proyecto.

DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO

Instigación a cometer delitos—

La comisión concordante con las observaciones que se han hecho en la parte relativa a los delitos contra la libertad, entiende que la instigación, para ser castigada, debe hacerse en forma determinada contra una persona o una institución. Sería sumamente peligroso castigar, como

lo hace el proyecto de 1906, a quien instigare en forma indeterminada, pues eso podría prestarse a numerosos abusos contra la libertad individual y contra la libertad de propaganda.

Debe, además, tenerse en cuenta que esas instigaciones no dependen, principalmente, de la persona que habla o ejercita el derecho de difundir sus ideas, sino de las personas que la oyen, las cuales, por razones diversas o por encontrarse preparadas para el delito, pueden incurrir en las infracciones, aun cuando la propaganda no haya debido llevarlas a cometerlas.

Por las mismas razones se ha suprimido el artículo 227 del proyecto.

Debe tenerse, por lo demás, en cuenta, que todas estas cuestiones son más bien propias de una legislación de "faltas", y que, si a causa de esos excesos se produjeran desórdenes, sería a ese título que podrían ser aquéllos castigados.

Asociaciones ilícitas—

La comisión conserva con el número 210 el artículo 228 del proyecto de 1906, adaptándolo a la penalidad general de su proyecto definitivo, que establece la pena alternativa.

El artículo 229 del mismo lo ha suprimido por redundante.

Intimidación pública—

La comisión conserva el artículo 230 del proyecto con el número 211 y el artículo 230 bis del proyecto del diputado Moreno, con el número 212. La explicación de estos artículos se encuentra en la exposición de motivos del proyecto de 1906 y en los fundamentos presentados por el diputado Moreno conjuntamente con el suyo.

Apología del crimen—

También mantiene la comisión el artículo 230, 2o. bis del proyecto del diputado Moreno, habiendo mejorado su redacción a los efectos de precisar el concepto de manera más acertada.

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION

La comisión conserva los artículos del proyecto de 1906 modificándolos únicamente en cuanto a la penalidad, para adaptarla a los términos generales de su proyecto. No modifica el tiempo de la misma, y únicamente lo altera en cuanto consigna la pena paralela de acuerdo con los fundamentos que antes han sido dados.

DELITOS QUE COMPROMETAN LA PAZ Y LA DIGNIDAD DE LA NACION

Las mismas observaciones verifica la comisión con respecto a este capítulo, en que acepta el proyecto de 1906, modificándolo en cuanto a penalidad, pues establece el castigo alternativo.

DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL—

Rebelión—

En el proyecto del año 1906 se establece para estos delitos la pena de detención en reemplazo de la de destierro que es la que se encuentra en la legislación vigente. La comisión no ha aceptado la pena de destierro de la ley actual, porque es perfectamente ineficaz para los verdaderos delincuentes y expone también a que los otros países no quieran recibir a los individuos condenados porque no pueden tener interés en aumentar la población de sujetos inconvenientes.

La detención, tal como se establecía en el proyecto de 1906, consistía en una pena de encierro sin trabajo obligatorio. Esta comisión ha considerado que es de todo punto inconveniente establecer penas de encierro sin la sujeción al trabajo, por las razones que se han explicado en la exposición de motivos de la parte general y al considerar el sistema penal del proyecto que se acompaña.

Por consiguiente, ha debido borrar en esta parte la pena de detención y cambiarla por la de prisión, que es la más leve de las penas privativas de la libertad que admite el proyecto. Cuando se establezca la forma en que han de cumplirse las penas por medio de la organización carcelaria, se proyectarán disposiciones especiales que tiendan a fijar las formas en que debe llenarse la pena de prisión con respecto a ciertos condenados.

Las penas que se establecen en el proyecto de 1906 son demasiado graves para estos delitos, que han sido llamados "los delitos de los derrotados", pues si la rebelión o la sedición triunfan, los individuos que hubieran sido condenados en caso de no haber tenido éxito, son promovidos a los cargos gubernativos. Basta para estos casos una pena de prisión por tiempo corto y bastante flexible, de acuerdo con los criterios generales que han sido repetidamente enunciados.

La comisión ha suprimido el artículo 244 del proyecto de 1906, colocando en el 243 del mismo, que es el 226 de su proyecto definitivo, la frase "cambiar la constitución" después de las palabras "gobierno nacional" para comprender la previsión que contenía el artículo suprimido.

Sedición—

Las observaciones anteriores deben repetirse con relación a este capítulo en el cual se han hecho, en la penalidad, modificaciones análogas habiéndose suprimido por las mismas razones antedichas el artículo 248 del proyecto de 1906.

Delitos contra el sentimiento nacional—

La comisión ha suprimido el artículo 249 bis, proyectado por el diputado Moreno. Ha creído conveniente hacerlo, porque según los antecedentes recogidos, no se conocen casos de ofensa a la bandera o al escudo de la nación, y no es conveniente suponer que esa clase de delitos puedan cometerse, porque eso ofendería al patriotismo de los hijos de este suelo. Mejor es dejar incólumes esos símbolos respetados por todos los habitantes del país.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS PRECEDENTES

La comisión no ha hecho modificaciones en el capítulo de disposiciones comunes, aceptando plenamente el articulado del proyecto de 1906.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA

Atentado y resistencia contra la autoridad

La comisión ha aceptado el proyecto de 1906, modificando tan sólo el artículo 243, donde ha reemplazado la pena de multa por la de prisión, por considerar que el grave trastorno que significa abstenerse de comparecer o de prestar la declaración que se le exige en beneficio de la justicia, debe ser castigado con una pena más importante que la de simple multa, pues ésta permitiría al individuo rico negarse a cumplir ese deber fundamental, por medio de la entrega de una suma de dinero.

Desacato—

La comisión mantiene el proyecto de 1906, verificando una simple modificación. En este proyecto se considera que incurrirá en desacato a un funcionario público, el que provocare a duelo, amenazare, injuriare u ofendiere de cualquier modo, en su dignidad o decoro al mismo, a causa del ejercicio de su función o al tiempo de practicarla. La comisión entiende que debe decir "y al tiempo de practicarla", exigiendo la reunión de las dos condiciones para que exista el delito.

Usurpación de autoridad, títulos y honores

La comisión ha mantenido las conclusiones del proyecto de 1906, sin verificar mo-

dificaciones. Se atiende, como fundamentos, a lo que expresa la exposición de motivos del mismo, unido a la exposición de motivos del proyecto de 1891.

Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos

La comisión acepta el articulado del proyecto de 1906, modificándolo en cuanto a la penalidad, porque éste establecía la detención, que ha sido suprimida por esta comisión parlamentaria, debiendo, por consiguiente, cambiarse por la de prisión en los casos en que aquélla se aplicaba.

Violación de sellos y documentos—

También en esta parte acepta la comisión las conclusiones del proyecto de 1906, sin verificar al respecto modificación alguna y ateniéndose a los fundamentos del mismo.

Cohecho—

La comisión ha modificado la penalidad en los artículos 275 y 277 del proyecto, que son los 256 y 258 de este proyecto definitivo, reemplazando la pena de multa por la de prisión, dada la importancia de esos delitos y la inmoralidad y el peligro que ellos importan.

En el artículo 259 ha reemplazado la palabra "regalos" por la de "dádivas" que es más comprensiva y que fija mejor el concepto.

Malversación de caudales públicos—

La comisión mantiene el proyecto de 1906, modificándolo en el artículo 280, que es el 261 del proyecto, en cuanto a la penalidad, pues se impone, de acuerdo con sus conceptos generales, la pena alternativa o paralela.

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

La comisión ha mantenido el proyecto de 1906, pero modificando la penalidad, que en ese proyecto era de una multa del 10 al 60 por ciento de la parte que hubiere tomado el delincuente en el negocio. La sanción de esta penalidad podía dar lugar a que fuera cómodo para un delincuente realizar el acto incriminado y pagar una multa de una parte de lo que hubiera correspondido. La pena de prisión es más justa y tiende de manera más acertada a evitar la comisión del delito.

Exacciones ilegales—

Con el mismo criterio, la comisión ha cambiado la pena de multa por la pena de prisión, en los tres artículos de este capítulo.

tulo, que son los mismos del proyecto de 1906, con la modificación antes anotada.

Prevaricato—

La comisión ha aceptado el proyecto de 1906, modificando en el primer artículo la penalidad, pues coloca, de acuerdo con sus principios generales, la pena alternativa o paralela.

Denegación y retardo de justicia—

En el artículo primero de este capítulo la comisión ha intercalado la palabra "maliciosamente", que precisa el concepto de manera más acertada.

El artículo, en la forma que estaba redactado, podía dar lugar a que un juez honesto fuera puesto en la picota, por cualquier litigante mal intencionado, pues bastaría un recargo en el trabajo, para que aquél pudiera ser llevado al banquillo de los acusados. Con la modificación introducida por la comisión, esa situación no sería posible, desde que únicamente en los casos de malicia por parte del juez, podría éste incurrir en la penalidad que el artículo establece.

Falso testimonio—

La comisión mantiene los artículos del proyecto de 1906, modificándolos en cuanto a la penalidad, de acuerdo con su criterio general, de las penas alternativas o paralelas.

Encubrimiento—

La comisión mantiene las conclusiones del proyecto de 1906. Acepta, por consiguiente, el encubrimiento como un delito especial, de acuerdo con las ideas expuestas en la exposición de motivos de 1906 y en su "Derecho Penal Argentino" por el doctor Rodolfo Rivarola.

Evasión—

Las disposiciones de este capítulo, no han sido modificadas, aceptándose, por consiguiente, el articulado del proyecto de 1906.

DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito

La comisión ha aceptado en esta parte el proyecto de 1906, que modifica de manera acertada la ley especial sobre falsificación de moneda, incorporando al código penal vigente. Ha modificado únicamente la penalidad, para adaptarla a su sistema general de que antes se habla.

El código comprende la falsificación de

moneda argentina, tanto de moneda acuñada como de billetes de banco, la de títulos al portador y la de documentos de crédito. Comprende también la de moneda extranjera.

Falsificación de sellos, timbres y marcas

El proyecto de 1906 ha sido modificado únicamente en cuanto se refiere a la penalidad, de acuerdo con las ideas antes enunciadas.

Falsificación de documentos en general

La comisión ha aceptado el proyecto de 1906, modificándolo en cuanto a la penalidad, y verificando en el artículo 314, que es el 295 del proyecto definitivo, una modificación que consiste en haber agregado al final del primer párrafo las palabras: "cuando de ello no resultase perjuicio". Esta modificación se explica por sí misma. No se ha introducido modificación alguna en el capítulo IV destinado a dar disposiciones comunes para los anteriores.

De los fraudes al comercio y a la industria

La comisión ha introducido una modificación en el inciso 3.º del artículo 319, que es el 300 del proyecto. En primer lugar, se castiga al que autorizare un balance o informe falso o incompleto, además de aquel que lo publicare. Y se establece, para evitar tergiversaciones en que ha incurrido la jurisprudencia, que esa pena se aplique cualquiera que hubiera sido el propósito perseguido al verificar el fraude.

En el artículo 320, que es el 301 del proyecto definitivo, se reemplaza la pena de multa por la de prisión, teniendo en cuenta el criterio que ha sido explicado antes, al tratar de la malversación de fondos.

Del pago de cheques sin provisión de fondos

La comisión mantiene con el número 302, el artículo 320 bis, del proyecto del diputado Moreno, tomado del que presentara el diputado del Valle, sobre cheques dolosos. Ha intercalado únicamente las palabras "en moneda nacional de curso legal", para precisar el concepto de manera más acertada.

Disposiciones complementarias—

El código debe señalar la fecha de su vigencia. Considera la comisión que debe fijarse el 1.º de enero de 1918, pues en el corriente año habrá tiempo suficiente para la sanción y publicación. Esta última se encarga como es de práctica al P. E., disponiéndose que se acompañe a la edición oficial del código la de esta exposición de motivos que le sirve de base. Se acompaña por fin, la bibliografía que ha servido prin-

cialmente para el estudio del proyecto y el examen de sus fundamentos.

La tarea de la comisión está de manifiesto en el proyecto definitivo que somete a la consideración de V. H. acompañado de la presente exposición de motivos. Estima haber cumplido con su deber, pues ha recogido todos los antecedentes que le ha sido posible reunir, ha oído las opiniones de profesores y magistrados, ha verificado consultas, ha examinado autores, proyectos y leyes extranjeras, ha escuchado los consejos de la experiencia y aprovechado las indicaciones de la jurisprudencia, llegando al articulado definitivo después de numerosos exámenes y contralores.

Sólo le resta desear que su obra sea eficiente para el bien del país y para su desenvolvimiento jurídico; y que V. H. le preste en el momento oportuno la atención que merece una reforma tan reclamada y tan trascendental.

Sala de la comisión, julio 16 de 1917.

Rodolfo Moreno (hijo). — Antonio de Tomaso. — D. del Valle. — C. M. Pradère. — G. del Barco.

PROYECTO DE CODIGO PENAL

LIBRO PRIMERO

Disposiciones generales

TITULO I

Aplicación de la ley penal

Artículo 10. — Este código se aplicará:

10. Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la nación argentina, en sus buques de guerra, en los mercantes que lleven su bandera cuando naveguen en alta mar o se encuentren en aguas jurisdiccionales de un estado que no los reprímiese o en los buques mercantes de bandera extranjera que se hallen en sus aguas jurisdiccionales;
20. Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo;
30. Por delitos de piratería, cuando los responsables cayeren bajo el poder de la nación;
40. Por delitos cometidos en el extranjero por argentinos nativos, cuando fueren aprehendidos por las autoridades nacionales y la extradición fuese denegada o no fuese requerida dentro de los tres meses de la detención.

Art. 20. — Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley.

En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho.

En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado.

Art. 30. — Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales.

Art. 40. — Las represión de las faltas corresponde a las provincias, las que podrán imponer penas de prisión hasta un año, inhabilitación hasta tres años y multa hasta cuatro mil pesos moneda nacional.

TITULO II

De las penas

Art. 50. — Las penas que este código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación.

Art. 60. — La pena de reclusión, perpetua o temporal se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los reclusos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase con tal que no fueren contratadas por particulares.

Art. 70. — Los hombres débiles o enfermos y los mayores de sesenta años que merecieren reclusión, sufrirán la condena en prisión.

Art. 80. — Los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas que les correspondan en establecimientos especiales.

Art. 90. — La pena de prisión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los reclusos.

Art. 10. — Cuando la prisión no excediera de seis meses podrán ser detenidas en sus propias casas las mujeres honestas y las personas mayores de sesenta años o valedurnarias.

Art. 11. — El producto del trabajo del condenado a reclusión a prisión se aplicará:

10. A indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito que no satisficiera con otros recursos;
20. A la prestación de alimentos según el código civil;
30. A costear los gastos que causare en el establecimiento;
40. A formarle un fondo propio que se le entregará a su salida.

Art. 12. — La reclusión y prisión por más de tres años importan la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y de uno a tres años más, según el caso y a juicio del tribunal. Importa también la privación de los derechos civiles con excepción del de testar, reconocer hijos naturales y contraer matrimonio "in extremis". El penado quedará sujeto a la curatela establecida por el código civil para los incapaces.

La privación de la patria potestad corresponderá en todos los casos cuando el delito se haya cometido sobre los hijos del condenado o en perjuicio de los mismos.

Art. 13. — El condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido veinte años de condena, y el condenado a reclusión temporal o a prisión por más de tres años que hubiere cumplido los dos tercios de su condena, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, obtendrá la libertad por resolución bajo las siguientes condiciones.

10. Residir en el lugar que determine el auto de sotura;
20. Observar las reglas de inspección que fije el mismo auto;
30. Adoptar en el plazo que el auto determine, oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia;
40. No cometer nuevos delitos.

Estas condiciones regirán hasta el vencimiento del término de la pena.

Art. 14. — La libertad condicional no se concederá a los reincidentes.

Art. 15. — La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia. En estos casos no se computará, en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad. En los casos de los incisos 20. y 30. del artículo 13, el tribunal podrá disponer que no se compute en el término de la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la libertad, hasta que el condenado cumpliera lo dispuesto en dichos incisos.

Art. 16. — Transcurrido el término de la condena, sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida.

Art. 17. — Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, podrá obtenerla nuevamente.

Art. 18. — Los condenados por tribunales provinciales a reclusión o prisión por más de cinco años serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales. Las provincias deberán mandarlos siempre que no tuvieran establecimientos adecuados.

Art. 19. — La inhabilitación absoluta importa:

10. La privación del empleo o cargo público que ejercía el penado,

aunque provenga de elección popular;

20. La privación del derecho electoral;
30. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas;
40. La pérdida de toda jubilación, pensión, o goce de montepío de que disfrutase. Si el penado tuviese esposa, hijos menores de cualquier clase o padre anciano y desvalido, corresponderá a éstos el importe de la jubilación, pensión o goce de montepío.

Art. 20. — La inhabilitación especial producirá la privación del empleo, cargo, profesión o derecho sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena.

La inhabilitación especial para derechos políticos producirá la incapacidad de ejercer durante la condena aquellos sobre que recayere.

Art. 21. — La multa obligará al reo a pagar la cantidad de dinero que determine la sentencia, dentro del máximo y mínimo establecidos para el delito, teniendo en cuenta además de las causas generales del artículo 40, la situación económica del penado.

Si el reo no pagare la multa en el término que fije la sentencia, sufrirá prisión que no excederá de año y medio.

El tribunal, antes de transformar la multa en la prisión correspondiente, procurará la satisfacción de la primera, haciéndola efectiva sobre los bienes, sueldos u otras entradas del condenado. En todos los casos, cuando la multa no se hubiere satisfecho seis meses después de la condena, corresponde la prisión del condenado.

Art. 22. — En cualquier tiempo que se satisficiera la multa el reo quedará en libertad.

Del importe se descontará, de acuerdo con las reglas establecidas para el cómputo, de la prisión preventiva, la parte proporcional al tiempo de detención que hubiere sufrido.

Art. 23. — Toda condena penal llevará consigo la pérdida de los efectos que provengan del delito y de los instrumentos con que se ejecutó. Los unos y los otros serán decomisados, a no ser que pertenecieran a un tercero no responsable. Los instrumentos decomisados no podrán venderse, debiendo destruirse, pudiendo aprovechar sus materiales los gobiernos de provincia, o el arsenal de guerra de la nación.

Art. 24. — La prisión preventiva que hubiere sufrido el condenado se computará así: por dos días de prisión preventiva, año de reclusión; por un día de prisión preventiva uno de prisión o dos de inhabilitación; o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre cuatro y diez pesos.

Art. 25. — Si durante la condena el penado se volviera loco, el tiempo de la locura se computará para el cumplimiento de la pena.

TITULO III

Condenación condicional

Art. 26. — En los casos de primera condena por delito al que correspondía pena de reclusión o prisión que no exceda de dos años, o de multa, los tribunales podrán ordenar, en el mismo pronunciamiento, que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión se fundará en la personalidad moral del condenado, la naturaleza del delito y las circunstancias que lo han rodeado en cuanto puedan servir para apreciar esa personalidad. El tribunal requerirá las informaciones que crea pertinentes para formar criterio.

En los casos de concurso de delitos procederá la condenación condicional, si la pena aplicable al reo no excediese de dos años de prisión, o multa.

Art. 27. — La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término para la prescripción de la pena a contarse desde la fecha de la sentencia, el condenado no cometiere un nuevo delito.

Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que correspondiere por el segundo delito conforme a lo dispuesto sobre acumulación de penas.

Art. 28. — La suspensión de la pena no comprenderá:

10. La reparación de los daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio;
20. Las incapacidades anexas a la condenación impuestas accesoriamente.

Sin embargo, estas incapacidades cesarán el mismo día en que por haber transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, se tuviere la condenación como no pronunciada, o en el plazo que la sentencia les hubiese fijado si fuere menor que aquél.

TITULO IV

Reparación de perjuicios

Art. 29. — La sentencia condenatoria ordenará:

10. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en defecto de plena prueba. Las leyes de procedimientos reglamentarán esta acción;
20. La restitución a su dueño de la cosa obtenida por el delito. Si no fuere posible la restitución, el pago por el reo del precio corriente

de la cosa, más el de estimación si lo tuviere;

30. El pago de costas.

Art. 30. — La obligación de indemnizar es preferente a todas las que contrajere el responsable después de cometido el delito y al pago de la multa.

Si sus bienes no fueren suficientes para cubrir todas las responsabilidades pecuniarias, se satisfarán éstas en el orden siguiente:

10. La indemnización de los daños y perjuicios;
20. El resarcimiento de los gastos del juicio.

Art. 31. — La obligación de reparar el daño es solidaria entre todos los responsables del delito.

El que pagare todo el daño no podrá demandar a los otros cuota alguna.

Art. 32. — El que por título lucrativo participare de los efectos de un delito, estará obligado a la reparación hasta la cuantía en que hubiere participado.

Art. 33. — La reparación se hará efectiva por la vía de apremio. En caso de insolvencia total o parcial, se observarán las reglas siguientes:

10. Tratándose de condenados a reclusión o prisión la reparación se hará en la forma determinada en el artículo 11;
20. Tratándose de condenados a otras penas, el tribunal señalará la parte de sus entradas o emolumentos que deban depositar periódicamente hasta el pago total.

TITULO V

Imputabilidad

Art. 34. — No son punibles:

10. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconciencia, comprender la naturaleza y el sentido de lo que hacía o dirigir sus acciones.

En caso de enajenación el tribunal ordenará la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos, que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás.

En todos los demás casos en que se absolviera a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobare la desaparición de las condiciones que le hicieron peligroso;

20. El que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente;
30. El que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño;
40. El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo;
50. El que obrare en virtud de obediencia debida;
60. El que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias:
 - a) Agresión legítima;
 - b) Necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelelo;
 - c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
 Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquel que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor.
- Igualmente respecto de aquel que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia.
70. El que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.

Art. 35. — El que hubiere excedido los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad, será castigado con la pena fijada para el delito por culpa o imprudencia.

Art. 36. — No es punible el menor de catorce años.

Si de las circunstancias de la causa y condiciones personales del agente, o de sus padres, tutores o guardadores, resultare peligroso dejarlo a cargo de éstos, el tribunal ordenará su colocación en un establecimiento destinado a corrección de menores hasta que cumpla diez y ocho años de edad. La entrega podrá anticiparse mediante resolución judicial, previa justificación de la buena conducta del menor y de sus padres o guardadores.

Si la conducta del menor en el establecimiento donde estuviere diese lugar a suponer que se trata de un sujeto perverso o peligroso, el tribunal podrá, después de las comprobaciones necesarias,

prolongar su estadía hasta que tuviere veintidós años.

Art. 37. — Cuando el menor tuviese más de catorce años y menos de diez y ocho, se observarán las siguientes reglas:

- a) Si el delito cometido tuviera pena que pudiera dar lugar a la condena condicional, el tribunal quedará autorizado para disponer la colocación del menor en un establecimiento de corrección si fuere inconveniente o peligroso dejarlo en poder de los padres, tutores o guardadores o de otras personas.

El tribunal podrá disponer esa colocación hasta que el menor cumpla veintidós años, pudiendo anticipar la libertad o retardarla hasta el máximo establecido cuando el término fijado fuese menor, si resultase necesario, dadas las condiciones del sujeto;

- b) Si el delito tuviese pena mayor, el tribunal queda autorizado para reducirla en la forma determinada para la tentativa.

Art. 38. — El menor que no ha cumplido diez y ocho años no puede ser declarado reincidente.

Art. 39. — En todos los casos de delito cometido por un menor, el tribunal puede privar a los padres de la patria potestad y a los tutores de la tutela. Podrá también disponer el cambio de guardadores. Para tomar esas medidas se tendrá en cuenta las situaciones respectivas del menor, sus padres, tutores o guardadores y lo que convenga al desenvolvimiento moral y educacional del primero.

Art. 40. — En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente.

Art. 41. — A los efectos del artículo anterior, se tendrán en cuenta:

10. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla, y la extensión del daño y del peligro causados;
20. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiere incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales que demuestren su mayor o menor perversidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.

TITULO VI

Tentativa

Art. 42. — El que comienza la ejecución de un delito premeditado de antemano, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determinadas en el artículo 44.

Art. 43. — El autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente del delito.

Art. 44. — La pena que correspondiera al agente si hubiere consumado el delito se disminuirá de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de quince a veinte años. Si la pena fuese de prisión perpetua, la de la tentativa será prisión de diez a quince años.

TITULO VII

Participación criminal

Art. 45. — Los que toman parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. En la misma pena incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo.

Art. 46. — Los que cooperen de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y los que presten una ayuda posterior cumpliendo promesas anteriores al mismo, serán castigados con la pena correspondiente al delito, disminuida de un tercio a la mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, se aplicará reclusión de quince a veinte años, y si fuere de prisión perpetua, se aplicará prisión de diez a quince años.

Art. 47. — Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor principal, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar. Si el hecho no se consumase, la pena del cómplice se determinará conforme a los preceptos de este artículo y a los del título de la tentativa.

Art. 48. — Las relaciones circunstancias y calidades personales, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto al autor, instigador o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea agravar la penalidad, salvo el caso en que fueren conocidas por el partícipe.

Art. 49. — No se considerarán partícipes de los delitos cometidos por la prensa a los editores, impresores y demás personas que prestaren al autor del escrito

o grabado la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta.

TITULO VIII

Reincidencia

Art. 50. — Habrá reincidencia siempre que el condenado por sentencia firme, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiere mediado indulto o conmutación.

Art. 51. — Los reincidentes por segunda vez, condenados a pena restrictiva de la libertad que excediera de dos años, cumplirán su condena con relegación en un paraje de los territorios del sud.

Art. 52. — La relegación será impuesta por tiempo indeterminado y como accesoria de la última condena, cuando mediaren:

10. Dos condenas a reclusión o una a reclusión y otra a prisión por más de tres años;
20. Tres condenas a prisión por más de tres años o una de reclusión y dos de prisión de tres años o menos;
30. Cuatro condenas a prisión, siendo una de ellas mayor de tres años;
40. Cinco condenas a prisión de tres años o menores;

Se aplicará también como accesoria de la condena en los casos de concurso de delitos, siempre que los delitos juzgados hubieren sido cinco por lo menos y que dos de ellos tuviesen fijada pena mayor de tres años de prisión.

Art. 53. — La condena anterior no se tendrá en cuenta a los efectos de considerar al reo como reincidente cuando hubieren transcurrido los términos señalados en el artículo 65.

TITULO IX

Concurso de delitos

Art. 64. — Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor.

Art. 65. — Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo en tal caso tendrá como minimum el minimum de la pena mayor y como maximum la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder del maximum legal de la especie de pena de que se trate.

Art. 66. — Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con penas divisibles de diferente naturaleza, se aplicará la pena más grave, teniendo en cuenta los delitos de pena menor.

Si alguna de las penas no fuere divi-

sible, se aplicará ésta únicamente, salvo el caso en que concurrieren la de prisión perpetua y la de presidio temporal, en que se aplicará presidio perpetuo.

La inhabilitación se aplicará siempre sin sujeción a lo dispuesto en el párrafo primero.

Art. 57. — A los efectos del artículo anterior, la gravedad relativa de las penas de diferente naturaleza se determinará por el orden en que se hallan en el artículo quinto.

Art. 58. — Las reglas precedentes se aplicarán también en el caso en que después de una condena pronunciada por sentencia firme se deba juzgar a la misma persona que esté cumpliendo pena por otro hecho distinto; o cuando se hubieren dictado dos o más sentencias firmes con violación de dichas reglas. Corresponderá al juez que haya aplicado la pena mayor dictar a pedido de parte su única sentencia, sin alterar las declaraciones de hechos contenidas en las otras.

Cuando por cualquier causa la justicia federal, en autos en que ella haya intervenido, no pueda aplicar esta regla, lo hará la justicia ordinaria nacional o provincial que conoció de la infracción penal, según sea el caso.

TITULO X

Extinción de acciones y de penas

Art. 59. — La acción penal se extinguirá:

- 1o. Por la muerte del imputado;
- 2o. Por la amnistía;
- 3o. Por la prescripción;
- 4o. Por la renuncia del agraviado, respecto de los delitos de acción privada.

Art. 60. — La renuncia de la persona ofendida al ejercicio de la acción penal, sólo perjudicará al renunciante y a sus herederos.

Art. 61. — La amnistía extinguirá la acción penal y hará cesar la condena y todos sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Art. 62. — La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:

- 1o. A los quince años, cuando se trate de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua;
- 2o. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se trate de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos meses;
- 3o. A los cinco años, cuando se trate de un hecho reprimido úni-

camente con inhabilitación perpetua;

- 4o. Al año, cuando se trate de un hecho reprimido únicamente con inhabilitación temporal;
- 5o. A los dos años, cuando se trate de hechos reprimidos con multa mayor de dos mil pesos;
- 6o. Al año, cuando se trate de hechos reprimidos con multa de quinientos a dos mil pesos;
- 7o. A los seis meses, cuando se trate de hechos reprimidos con multa que no excediere de quinientos pesos.

Art. 63. — La prescripción de la acción empezará a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o, si éste fuere continuo, en que cesó de cometerse.

Art. 64. — La acción penal por delito reprimido con multa, se extinguirá en cualquier estado del juicio por el pago voluntario del máximo de la multa correspondiente al delito y de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Art. 65. — Las penas se prescriben en los términos siguientes:

- 1o. La de reclusión perpetua, a los veinte años;
- 2o. La de prisión perpetua, a los quince años;
- 3o. La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena;
- 4o. La de multa mayor de dos mil pesos, a los tres años;
- 5o. La de multa que no excediere de dos mil pesos, al año.

Art. 66. — La prescripción de la pena empezará a correr desde la media noche del día en que se notificare al reo la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiere empezado a cumplirse.

Art. 67. — La prescripción correrá o será interrumpida separadamente para cada uno de los partícipes de un delito.

Art. 68. — El indulto del reo extinguirá la pena y sus efectos, con excepción de las indemnizaciones debidas a particulares.

Art. 69. — El perdón de la parte ofendida extinguirá la pena impuesta por delito de los enumerados en el artículo 73. Si hubiere varios partícipes, el perdón en favor de uno de ellos aprovechará a los demás.

Art. 70. — Las indemnizaciones pecuniarias inherentes a las penas, podrán hacerse efectivas sobre los bienes propios del condenado, aún después de muerto.

TITULO XI

Del ejercicio de las acciones

Art. 71. — Deberán iniciarse de oficio

todas las acciones penales, con excepción de las siguientes:

- 1a. Las que dependieren de instancia privada;
- 2a. Las acciones privadas.

Art. 72. — Son acciones dependientes de instancia privada, las que nacieren de los delitos de violación, estupro, rapto y ultrajes al pudor, cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el artículo 91.

En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, o de su tutor, guardador o representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.

Art. 73. — Son acciones privadas, las que nacen de los siguientes delitos:

- 1o. Adulterio;
- 2o. Calumnias, injurias, difamación y ultraje;
- 3o. Violación de secretos, salvo en los casos del artículo 154;
- 4o. Extorsión en el caso del artículo 170;
- 5o. Concurrencia desleal, prevista en el artículo 159.

Art. 74. — La acción por delito de adulterio corresponde únicamente al cónyuge ofendido, quien deberá acusar a ambos culpables, pero no podrá intentar la acción penal mientras no se declare el divorcio por causa de adulterio. La sentencia en el juicio de divorcio, no producirá efecto alguno en el juicio criminal.

Art. 75. — La acción por calumnia, injuria, difamación o ultraje, podrá ser ejercitada sólo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.

Art. 76. — En los demás casos del artículo 73, se procederá únicamente por querrela o denuncia del agraviado, o de sus guardadores o representantes legales.

Art. 77. — Por los delitos contra la libertad política, además de la acción penal, procederá la acción particular de cualquier ciudadano.

Iniciada la acción por un ciudadano, el representante del ministerio fiscal, deberá intervenir en el proceso, desde el principio hasta la terminación, y no podrá desistirse de la querrela, aunque desistiere el acusador particular.

TITULO XII

Significación de conceptos empleados en el código

Art. 78. — Para la inteligencia del texto de este código, se tendrán presentes las siguientes reglas:

Los plazos señalados en este código se

contarán con arreglo a las disposiciones del código civil.

La expresión "reglamentos" u "ordenanzas", comprende todas las disposiciones de carácter general dictadas por la autoridad competente en la materia de que traten.

Por los términos "funcionario público" y "empleado público", usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

Se entiende por "banda", la asociación de dos o más individuos para cometer delitos indeterminados.

Con la palabra "mercadería", se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio.

El término "capitán", comprende a todo comandante de embarcación o al que le sustituye.

El término "tripulación", comprende a todos los que se hallan a bordo como oficiales o marineros.

LIBRO SEGUNDO

DE LOS DELITOS

TITULO I

Delitos contra las personas

CAPITULO I

Delitos contra la vida

Art. 79. — Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciere otra pena.

Art. 80. — Se aplicará reclusión perpetua pudiendo ser relegado:

- 1o. Al que matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son;
- 2o. Al que matare a otro con alevosía o ensañamiento, por precio, promesa remuneratoria, sevicias graves, impulso de perversidad brutal, o por veneno, incendio, inundación, descarrilamiento, explosión, o cualquier otro medio capaz de causar grandes estragos;
- 3o. Al que matare a otro para preparar, facilitar, consumir u ocultar otro delito, o para asegurar sus resultados o la impunidad para sí o para sus cooperadores, o por no haber obtenido el resultado que se propuso al intentar el otro hecho punible.

Art. 81. — Se impondrá reclusión o prisión por tres a seis años:

- 1o. Al que matare a otro, si la víctima misma provocó el acto ho-

micienda con ofensas o injurias ilícitas y graves;

20. A la madre que, para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o hasta tres días después, y a los padres, hermanos, marido e hijos que, para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o madre, cometieren el mismo delito;

30. Al cónyuge, al ascendiente o al hermano, que matare a su cónyuge, descendiente o hermana, o al cómplice, o a ambos, en el acto de sorprenderlos en ilegítimo concubito, pudiendo los jueces eximir de pena, según las circunstancias particulares del hecho;

40. Al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjere la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.

Art. 82. — Cuando en el caso del inciso 10. del artículo 80 concurrirle alguna de las circunstancias de los incisos 10. y 40. del artículo anterior, la pena será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años.

Art. 83. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio tuviere lugar.

Art. 84. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos o de los deberes de su cargo causare a otro la muerte.

Art. 85. — El que causare un aborto será reprimido:

10. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer;
20. Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de la mujer. El máximo de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer.

Art. 86. — Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos, que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto, o cooperaren a causarlo.

Art. 87. — Será reprimido con prisión, de seis meses a dos años, el que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare.

Art. 88. — Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto, o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.

CAPITULO II.

Lesiones

Art. 89. — Se impondrá prisión de un mes a un año al que causare a otro, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código.

Art. 90. — Se impondrá reclusión o prisión de uno a seis años, si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra, o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro.

Art. 91. — Se impondrá reclusión o prisión de tres a diez años, si la lesión produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra, o de la capacidad de engendrar o concebir.

Art. 92. — Si concurrirle alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será: en el caso del artículo 89, de seis meses a dos años; en el caso del artículo 90, de tres a diez años; y en el caso del artículo 91, de tres a quince años.

Art. 93. — Si concurrirle la circunstancia enunciada en el inciso 10. del artículo 81, la pena será: en el caso del artículo 89, de quince días a seis meses; en el caso del artículo 90, de seis meses a tres años; y en el caso del artículo 91, de uno a cuatro años.

Art. 94. — Sufrirá la pena de doscientos a mil pesos de multa, e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud.

CAPITULO III

Homicidio o lesiones en riña

Art. 95. — Cuando en riña o agresión en que toman parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quiénes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de

dos a seis años en caso de muerte y de uno a cuatro en caso de lesión.

Art. 96. — Si las lesiones fueren las previstas en el artículo 89, la pena aplicable será de cuatro a ciento veinte días de prisión.

CAPITULO IV

Duelo

Art. 97. — Los que se batieren en duelo, con intervención de dos o más padrinos, mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

10. Con prisión de uno a seis meses, al que no infiriere lesión a su adversario, o sólo le causare una lesión de las determinadas en el artículo 89;
20. Con prisión de uno a cuatro años, al que causare la muerte de su adversario, o le infiriere lesión de las determinadas en los artículos 90 y 91.

Art. 98. — Los que se batieren sin la intervención de padrinos mayores de edad, que elijan las armas y arreglen las demás condiciones del desafío, serán reprimidos:

10. El que matare a su adversario, con la pena señalada para el homicida;
20. El que causare lesiones, con la pena señalada para el autor de lesiones;
30. El que no causare lesiones, con prisión de un mes a un año.

Art. 99. — El que instigare a otro a provocar o a aceptar un duelo y el que desacreditare públicamente a otro por no desafiar o por rehusar un desafío, serán reprimidos:

10. Con multa de doscientos a mil pesos, si el duelo no se realizare, o si realizándose, no se produjere muerte ni lesiones, o sólo lesiones de las comprendidas en el artículo 89;
20. Con prisión de uno a cuatro años, si se causare muerte o lesiones de las mencionadas en los artículos 90 y 91.

Art. 100. — El que provocare o die-re causa a un desafío, proponiéndose un interés pecuniario u otro objeto inmoral, será reprimido:

10. Con prisión de uno a cuatro años, si el duelo no se verificare, o si efectuándose, no resultare muerte ni lesiones;
20. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si el duelo no se realizare y resultaren lesiones;
30. Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si se produjere la muerte.

Art. 101. — El combatiente que faltare en daño de su adversario, a las condiciones ajustadas por los padrinos, será reprimido:

10. Con reclusión o prisión de tres a diez años si causare lesiones a su adversario;
20. Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si le causare la muerte.

Art. 102. — Los padrinos de un duelo que usaren cualquier género de alevosía en la ejecución del mismo, serán reprimidos con las penas señaladas en el artículo anterior, según fueren las consecuencias que resultaren.

Art. 103. — Cuando los padrinos conciertaren un duelo a muerte, o en condiciones tales que de ellas debiere resultar la muerte, serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si se verificare la muerte de alguno de los combatientes. Si no se verificare la muerte de alguno de ellos, la pena será de multa de doscientos a mil pesos.

CAPITULO V

Abuso de armas

Art. 104. — Será reprimido con uno a tres años de prisión, el que disparare un arma de fuego contra una persona, sin herirla.

Esta pena se aplicará aunque se causare herida a que corresponda pena menor, siempre que el hecho no importe un delito más grave.

Art. 105. — Será reprimida con prisión de quince días a seis meses la agresión con toda arma, aunque no se causare herida.

CAPITULO VI

Abandono de personas

Art. 106. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que abandonare o dejare en desamparo a un menor de diez años u otra persona incapaz por causa de enfermedad, a quien deba mantener o cuidar.

La pena será de reclusión o prisión de dos a seis años, si a consecuencia del abandono resultare un grave daño en el cuerpo o en la salud del menor o incapaz.

La reclusión o prisión será de tres a diez años, si ocurriere la muerte.

Art. 107. — El máximo y el mínimo de las penas establecidas en el artículo precedente, serán aumentados en un tercio cuando el delito fuere cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos, o por el cónyuge. Serán disminuidos a la mitad, cuando el abandono fuere de un menor de tres días, aún no inscripto en el registro civil para

salvar el honor propio o de la esposa, madre, hija o hermana.

Art. 108. — Será reprimido con multa de cien a quinientos pesos, el que encontrando perdido o desamparado a un menor de diez años, o a una persona herida o inválida, o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario, cuando pudiese hacerlo sin riesgo personal, o no diere aviso inmediatamente a la autoridad.

TITULO II

Delitos contra el honor

Art. 109. — La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años.

Art. 110. — El que deshonrar o desacreditare a otro será reprimido con multa de cien a un mil pesos moneda nacional.

Art. 111. — El acusado de injuria sólo podrán probar la verdad de la imputación en los casos siguientes:

- 1o. Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual;
- 2o. Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal;
- 3o. Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él.

En estos casos si se probare la verdad de las imputaciones el acusado quedará exento de pena.

Art. 112. — El reo de calumnia o injuria equivoca o encubierta que rehuse dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del minimum a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o injuria manifiesta.

Art. 113. — El que publicare o reprodujere por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate.

Art. 114. — Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción.

Art. 115. — Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.

Art. 116. — Cuando las injurias fueren recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas.

Art. 117. — El culpable de injuria o

calumnia contra un particular o asociación quedará exento de pena si se retractare públicamente, antes de contestar la querrela o en el acto de hacerlo.

TITULO III

Delitos contra la honestidad

CAPITULO I

Adulterio

Art. 118. — Serán reprimidos con prisión de un mes a un año:

- 1o. La mujer que cometiere adulterio;
- 2o. El codeincuente de la mujer;
- 3o. El marido, cuando tuviere manceba dentro o fuera de la casa conyugal;
- 4o. La manceba del marido, dentro de la casa conyugal.

CAPITULO II

Violación y estupro

Art. 119. — Será reprimido con reclusión o prisión de seis a quince años, el que tuviere acceso carnal con personas de uno u otro sexo en los casos siguientes:

- 1o. Cuando la víctima fuere menor de doce años;
- 2o. Cuando la persona ofendida se hallare privada de razón o de sentido, o cuando por enfermedad o cualquier otra causa, no pudiera resistir;
- 3o. Cuando se usare de fuerza o intimidación.

Art. 120. — Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, cuando la víctima fuere mujer honesta, mayor de doce años y menor de quince y no se encontrare en las circunstancias de los números 2 y 3 del artículo anterior.

Art. 121. — Se impondrá reclusión o prisión de tres a seis años, al que abusare del error de una mujer fingiéndose su marido y tuviere con ella acceso carnal.

Art. 122. — La reclusión o prisión será de ocho a veinte años, cuando en los casos del artículo 119, resultare un grave daño en la salud de la víctima, o se cometiere el hecho por un ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, sacerdote o encargado de la educación o guarda de aquella, o con el concurso de dos o más personas.

Art. 123. — Se impondrá reclusión o prisión de seis a diez años, cuando en el caso del artículo 120 mediare alguna de las circunstancias expresadas en el anterior.

Art. 124. — Se impondrá reclusión o prisión de quince a veinticinco años, cuando en los casos de los artículos 119 y 120

resultare la muerte de la persona ofendida.

CAPITULO III

Corrupción y ultrajes al pudor

Art. 125. — El que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos propios o ajenos, promoviere o facilitare la prostitución o corrupción de menores de edad, sin distinción de sexo, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será castigado:

- 1o. Con reclusión o prisión de cuatro a quince años, si la víctima fuere menor de doce años;
- 2o. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si la víctima fuere mayor de doce años y menor de diez y ocho;
- 3o. Con prisión de dos a seis años, si la víctima fuere mayor de diez y ocho años y menor de veintidós.

Cualquiera que fuere la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión desde diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad, o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuere ascendiente, marido, hermano, tutor o persona encargada de su educación o guarda, o que hiciera con ella vida marital.

Art. 126. — Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos, promoviere o facilitare la corrupción o prostitución de mayores de edad, mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualesquiera otros medios de coerción aunque hubiere consentimiento de la víctima. Si mediare fraude o engaño, la pena será de uno a tres años de prisión.

Art. 127. — Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años, al que abusare deshonestamente de persona de uno u otro sexo, concurriendo alguna de las circunstancias del artículo 119 sin que haya acceso carnal.

Si el autor del hecho fuere alguna de las personas mencionadas en el artículo 122, se le aplicará de tres a diez años de reclusión o prisión.

Art. 128. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que publicare, fabricare o reprodujere libros, escritos, imágenes u objetos obscenos y el que los expusiere, distribuyere o hiciera circular.

Art. 129. — Será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos, el que en sitio público ejecutare o hiciera ejecutar por otro exhibiciones obscenas.

La misma pena se aplicará cuando los actos tuvieran lugar en sitio privado, pe-

ro expuestos a que sean vistos involuntariamente por terceros.

CAPITULO IV

Rapto

Art. 130. — Sufrirá prisión de uno a cuatro años, el que con miras deshonestas substrajere o retuviere a una mujer por medio de fuerza, intimidación o fraude.

La prisión será de dos a seis años, si la robada fuere una mujer casada.

Art. 131. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que cometiere rapto de una menor de quince años y mayor de doce, con su consentimiento.

El culpable será reprimido con prisión de dos años a seis años, si el rapto fuere de una menor de doce años, con o sin su consentimiento.

CAPITULO V

Disposiciones comunes a los artículos anteriores

Art. 132. — En los casos de violación, estupro o rapto de mujer soltera, quedará exento de pena el delincuente si se casare con la ofendida, prestando ella su consentimiento, después de restituida a casa de sus padres o a otro lugar seguro.

Art. 133. — Los ascendientes, descendientes, afines en línea recta, hermanos y cualquiera persona que, con abuso de autoridad, encargo o confianza cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título, serán reprimidos con la pena de los autores.

TITULO IV

Delitos contra el estado civil

CAPITULO I

Matrimonios ilegales

Art. 134. — Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que contrajeren matrimonio sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.

Art. 135. — Serán reprimidos con prisión de dos a seis años:

- 1o. El que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente;
- 2o. El que engañando a una persona, simulare matrimonio con ella.

Art. 136. — El oficial público que a sabiendas autorizare un matrimonio de los comprendidos en los artículos anteriores, sufrirá en su caso la pena que en ellos se determina.

Si lo autorizare sin saberlo, cuando su ignorancia provenga de no haber llenado los requisitos que la ley prescribe para la celebración del matrimonio, la pena será de multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial por seis meses a dos años.

Sufrirá multa de cien a mil pesos el oficial público que, fuera de los demás casos de este artículo, procediere a la celebración de un matrimonio sin haber observado todas las formalidades exigidas por la ley.

Art. 137. — En la misma pena incurrirá el representante legítimo de un menor impúber que diere el consentimiento para el matrimonio del mismo.

CAPITULO II

Supresión y suposición del estado civil

Art. 138. — Se aplicará prisión de seis meses a dos años al que, por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de otro, con el propósito de causar perjuicio.

Art. 139. — Se impondrá prisión de uno a cuatro años:

10. A la mujer que fingiere preñez o parto para dar a su supuesto hijo derechos que no le correspondan, y al médico o partera que cooperare a la ejecución del delito;
20. Al que por medio de exposición, de ocultación o de otro acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere el estado civil de un menor de diez años.

TITULO V

Delitos contra la libertad

CAPITULO I

Delitos contra la libertad individual

Art. 140. — Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que redujere a una persona a servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella.

Art. 141. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que ilegalmente privare a otro de su libertad personal.

Art. 142. — Se aplicará prisión de uno a cuatro años al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurre alguna de las circunstancias siguientes:

10. Si el hecho se cometiere con violencia o amenazas, o con propósitos de lucro, o con fines religiosos o de venganza;
20. Si el hecho se cometiere en la

persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular;

30. Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor;
40. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública, u orden de autoridad pública;
50. Si la privación de la libertad durare más de un mes.

Art. 143. — Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo:

10. El funcionario público que, con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley, privare a alguno de su libertad personal;
20. El funcionario que retuviere a un detenido o preso, cuya soltura haya debido decretarla o ejecutarla;
30. El funcionario que prolongare indebidamente la detención de una persona, sin ponerla a disposición del juez competente;
40. El funcionario que incomunicare indebidamente a un detenido;
50. El funcionario que impusiere a los presos que guarda, severidades, vejaciones o apremios ilegales, o los colocare en lugares del establecimiento que no sean los señalados para el efecto;
60. El jefe de presidio, prisión u otro establecimiento penal, o el que lo reemplace, que recibiere algún reo sin testimonio de la sentencia firme en que se le hubiere impuesto la pena;
70. El alcaide o empleado de las cárceles de detenidos y seguridad que recibiere un preso sin orden de autoridad competente, salvo el caso de flagrante delito;
80. El funcionario que desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquiera vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales;
90. El funcionario competente que, teniendo noticia de una detención ilegal, omitiere, retardare o rehúsare hacerla cesar, o dar cuenta a la autoridad que deba resolver.

Art. 144. — Cuando en los casos del artículo anterior concurre alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 142, se aplicará la pena establecida en este último.

Art. 145. — Será reprimido con prisión de dos a seis años, el que condujere a una persona fuera de las fronteras de la Repú.

blica, con el propósito de someterla ilegalmente al poder de otro, o de alistarla en un ejército extranjero.

Art. 146. — Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años el que sustrajere a un menor de diez años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare.

Art. 147. — En la misma pena incurrirá el que, hallándose encargado de la persona de un menor de diez años, no lo presentara a los padres o guardadores que lo solicitaren, o no diere razón satisfactoria de su desaparición.

Art. 148. — Será reprimido con prisión de un mes a un año el que indujere a un mayor de diez años y menor de quince, a fugar de casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona.

Art. 149. — Será reprimido con prisión de un mes a un año el que ocultare a las investigaciones de la justicia o de la policía, a un menor de quince años que se hubiere sustraído a la potestad o guarda a que estaba legalmente sometido.

La pena será de seis meses a dos años, si el menor no tuviere diez años cumplidos.

TITULO II

Violación de domicilio

Art. 150. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, si no resultare otro delito más severamente penado, el que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias, o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo.

Art. 151. — Se impondrá la misma pena e inhabilitación especial de seis meses a dos años, al funcionario público o agente de la autoridad que allanarse en domicilio sin las formalidades prescriptas por la ley, o fuera de los casos que ella determina.

Art. 152. — Las disposiciones de los artículos anteriores no se aplicarán al que entrare en los sitios expresados, para evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o a un tercero, ni al que lo hiciere para cumplir un deber de humanidad o prestar auxilio a la justicia.

CAPITULO III

Violación de secretos

Art. 153. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado, o un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una car-

ta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado; o suprimiere o desviare de su destino una correspondencia que no le esté dirigida.

Se le aplicará prisión de un mes a un año, si el culpable comunicare a otro o publicare el contenido de la carta, escrito o despacho.

Art. 154. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el empleado de correos o telegrafos que, abusando de su empleo, se apoderare de una carta, de un pliego, de un telegrama o de otra pieza de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o cambiare su texto.

Art. 155. — El que, hallándose en posesión de una correspondencia no destinada a la publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida a él, será reprimido con multa de doscientos a mil pesos, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.

Art. 156. — Será reprimido con multa de doscientos a mil pesos e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa.

Art. 157. — En la misma pena incurrirá el que divulgare actuaciones o procedimientos, que por la ley deban quedar secretos.

CAPITULO IV

Delitos contra la libertad de trabajo y asociación

Art. 158. — Será reprimido con prisión de un mes a un año el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelirlo a tomar parte en una huelga. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que por sí o por cuenta de alguien ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada.

Art. 159. — Será reprimido con multa de mil a cuatro mil pesos el que por maquinaciones fraudulentas, sospechas malévolas o cualquier medio de propaganda desleal, tratase de desviar en su provecho la clientela de un establecimiento comercial o industrial.

CAPITULO V

Delitos contra la libertad de reunión

Art. 160. — Será reprimido con prisión de quince días a tres meses el que impidiere materialmente o turbare una reunión lícita con insultos o amenazas al orador o a la institución organizadora del acto.

CAPITULO VI

Delitos contra la libertad de la prensa

Art. 161. — Sufrirá prisión de uno a seis meses el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o periódico.

TITULO VI

Delitos contra la propiedad

CAPITULO I

Hurto

Art. 162. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena.

Art. 163. — Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos siguientes:

10. Cuando el hurto fuere de animales en rebaño, o de productos separados del suelo y dejados por necesidad en el campo;
20. Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, asonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública, o de un infortunio particular del damnificado;
30. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, para penetrar al lugar donde se halla la cosa objeto de la substracción, o de la llave verdadera que hubiere sido sustraída o hallada;
40. Cuando se perpetrare con escalamiento.

CAPITULO II

Robo

Art. 164. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas, o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad.

Art. 165. — Se impondrá reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio.

Art. 166. — Se aplicará reclusión o prisión de cinco a quince años:

10. Si por las violencias ejercidas para consumir el robo, se pusiere en peligro de muerte a una persona, o se alterare permanentemente su salud;

20. Si el robo se cometiere en despoblado y en banda.

Art. 167. — Se aplicará reclusión o prisión de tres a diez años:

10. Si se cometiere el robo en despoblado y con armas;
20. Si se cometiere en lugares poblados y en banda;
30. Si se perpetrare el robo con perforación o fractura de pared, cerco, puerta o ventana de un lugar habitado, o sus dependencias inmediatas;
40. Si concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 163.

CAPITULO III

Extorsión

Art. 168. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que con violencia o intimidación o simulando orden de autoridad pública, obligue a otro a enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos.

Art. 169. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que, por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos, obligare a otro maliciosamente a la entrega de un valor o de una cosa cualquiera que no sea del culpable, o a contraer una obligación o a extinguir un crédito.

Art. 170. — Sufrirá prisión de tres a diez años, el que detuviere en rehenes a una persona para sacar rescate.

Art. 171. — Sufrirá prisión de dos a seis años, el que sustrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución.

CAPITULO IV

Estafas y otras defraudaciones

Art. 172. — Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza, o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.

Art. 173. — Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece:

10. El que defraudare a otro en la substancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de un título obligatorio;
20. El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero,

efectos, o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración, u otro título que produzca obligación de entregar o devolver;

30. El que defraudare, haciendo subscribir con engaño algún documento;
40. El que cometiere alguna defraudación abusando de firma en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo que la dió o de tercero;
50. El dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder con perjuicio del mismo o de tercero;
60. El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado o falsos recibos;
70. El comisionista, capitán de buque o cualquier otro mandatario que cometiere defraudación, alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiere hecho;
80. El que cometiere defraudación, substituyendo, ocultando o mutilando algún proceso, expediente, documento u otro papel importante;
90. El que vendiere o gravare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y el que vendiere, gravare o arrendare como propios bienes ajenos;
10. El que defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos.

Art. 174. — Sufrirá prisión de dos a seis años:

10. El que para procurarse a sí mismo o procurar de otro un provecho ilegal en perjuicio de un asegurador o de un dador de préstamo a la gruesa, incendiare o destruyere una cosa asegurada o una nave asegurada, o cuya carga o flete estén asegurados o sobre la cual se haya efectuado un préstamo a la gruesa;
20. El que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo;
30. El que defraudare usando de pesas o medidas falsas;

40. El empresario o constructor de una obra cualquiera, o el vendedor de materiales de construcción que cometiere en la ejecución de la obra o en la entrega de los materiales un acto fraudulento capaz de poner en peligro la seguridad de las personas de los bienes o del estado;

50. El que cometiere fraude en ejercicio de alguna administración pública.

En los casos de los dos números precedentes el culpable, si fuere empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua.

Art. 175. — Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos:

10. El que encontrare perdida una cosa que no le pertenezca, o un tesoro y se apropiare la cosa, o la parte del tesoro correspondiente al propietario del suelo, sin observar las prescripciones del código civil;
20. El que se apropiare de una cosa ajena, en cuya tenencia hubiere entrado a consecuencia de un error o de un caso fortuito;
30. El que vendiere la prenda sobre que prestó dinero, o se la apropiare o dispusiere de ella, sin las formalidades legales;
40. El acreedor que a sabiendas exija o acepte de su deudor a título de documento, crédito o garantía por una obligación no vencida, un cheque o giro de fecha posterior o en blanco.

CAPITULO V

Quebrados y otros deudores punibles

Art. 176. — Será reprimido como quebrado fraudulento, con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial de tres a diez años, el comerciante declarado en quiebra que, en fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en algunos de los hechos siguientes:

10. Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas;
20. No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener; sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa;
30. Conceder ventajosas indebidamente a cualquier acreedor.

Art. 177. — Será reprimido como quebrado culpable con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial de dos a cinco años. El comerciante que hubiere causado su propia quiebra y perjudicado a sus acreedores, por sus gastos excesivos con relación al capital y al número de personas de su familia, especulaciones

ruinosas, juego, abandono de sus negocios, o cualquier otro acto de negligencia o imprudencia manifiesta.

Art. 178. — Cuando se tratare de la quiebra de una sociedad anónima o cooperativa, o de una persona jurídica que ejerza el comercio, todo director, administrador o gerente de la sociedad o establecimiento fallido o contador o tenedor de libros, que hubiere cooperado a la ejecución de alguno de los actos a que se refieren los artículos anteriores, será reprimido con la pena del quebrado fraudulento o culpable, en su caso.

Art. 179. — Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el deudor no comerciante concursado civilmente que, para defraudar a sus acreedores, hubiere cometido o cometiére alguno de los actos mencionados en el artículo 177.

Art. 180. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el acreedor que consintiere en un concordato, convenio o transacción judicial, en virtud de una convención con el deudor o con un tercero, por la cual hubiere estipulado ventajas especiales para el caso de aceptación del concordato, convenio o transacción.

La misma pena sufrirá, en su caso, todo director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa, o de una persona jurídica de otra índole, en estado de quiebra o de concurso judicial de bienes que concluyere un convenio de este género.

CAPITULO VI

Usurpación

Art. 181. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años:

10. El que por violencia, engaño o abuso de confianza, despojare a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble, o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble;
20. El que para apoderarse de todo o parte de un inmueble destruyere o alterare los términos o límites del mismo;
30. El que con violencias o amenazas trabare la posesión de un inmueble.

Art. 182. — Será reprimido con prisión de quince días a un año:

10. El que ilícitamente y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos, o los sacare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho.
20. El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas.
30. El que ilícitamente y con el pro-

pósito de causar perjuicio a otro represare, desviare o detuviere las aguas de los ríos, arroyos, canales o fuentes, o usurpare un derecho cualquiera referente al curso de ellas.

La pena se aumentará hasta dos años si para cometer los delitos expresados en los números anteriores, se rompieren o al teraren diques, esclusas, compuertas u otras obras semejantes hechas en los ríos, fuentes, depósitos, canales o acueductos.

CAPITULO VII

Daños

Art. 183. — Será reprimido con prisión de quince días a un año el que destruyere inutilizarse, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble, o un animal total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado.

Art. 184. — La pena será de tres meses a cuatro años de prisión, si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes:

10. Ejecutarse el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones;
20. Producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos;
30. Emplear substancias venenosas o corrosivas;
40. Cometer el delito en despoblado y en banda;
50. Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos.

CAPITULO VIII

Disposiciones generales

Art. 185. — Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de lo civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren;

10. Los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en la línea recta;
20. El consorte viudo, respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no haya pasado a poder de otro;
30. Los hermanos y cuñados si viviesen juntos.

La excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los extraños que participen del delito.

TITULO VII

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA

CAPITULO I

Incendios y otros estragos

Art. 186. — El que causare incendio, explosión o inundación, será reprimido:

10. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si hubiere peligro común para los bienes;
20. Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro para un archivo público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia militar o parque de artillería;
30. Con reclusión o prisión de tres a quince años, si hubiere peligro de muerte para alguna persona;
40. Con reclusión o prisión de ocho a veinte años, si el hecho fuere causa inmediata de la muerte de alguna persona.

Art. 187. — Incurrirá, según los casos, en las penas señaladas en el artículo precedente, el que causare estrago por medio de inmersión o varamiento de nave, derrumbe de un edificio, inundación de una mina, o cualquier otro medio poderoso de destrucción.

Art. 188. — Será reprimido con prisión de uno a seis años el que, destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa común contra las inundaciones u otros desastres, hiciere surgir el peligro de que éstos se produzcan.

La misma pena se aplicará al que, para impedir la extinción de un incendio o las obras de defensa contra una inundación, sumersión, naufragio u otro desastre, sustrajere, ocultare o hiciere inservibles, materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción o a la defensa referida.

Art. 189. — Será reprimido con prisión de un mes a un año el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos.

Si el hecho u omisión culpable pusiere en peligro de muerte a alguna persona, o causare la muerte de alguna persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta cuatro años.

CAPITULO II

Delito contra la seguridad de los medios de transporte y comunicación

Art. 190. — Será reprimido con pri-

sión de seis meses a dos años, el que inutilizare o destruyere, en todo o en parte, las vías u obras destinadas a la comunicación pública por tierra o por agua, o impidiere o estorbare la ejecución de las medidas adoptadas para la seguridad de las mismas.

El máximo se elevará a seis años, si resultare peligro para las personas. Si resultare la muerte de alguna persona, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión.

Art. 191. — El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren, o para hacerle descarrilar, será reprimido:

10. Con prisión de seis meses a tres años, si no se produjere descarrilamiento u otro accidente;
20. Con prisión de dos a seis años, si se produjere descarrilamiento u otro accidente;
30. Con reclusión o prisión de tres a diez años, si a consecuencia del accidente, resultare lesionada alguna persona;
40. Con reclusión o prisión de diez a veinticinco años, si resultare la muerte de alguna persona.

Art. 192. — Será reprimido con las penas establecidas en el artículo anterior, en sus casos respectivos, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un telégrafo o teléfono destinado al servicio de un ferrocarril.

Art. 193. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, el que arrojaré cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha.

Art. 194. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que ejecutare cualquier acto tendiente a poner en peligro la seguridad de una nave o construcción flotante, o a detener o entorpecer la navegación.

Si el hecho produjere naufragio, avería o varamiento, la pena será de tres a doce años de reclusión o prisión.

Si el accidente causare lesión a alguna persona, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión, y si ocasionare la muerte, de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

Art. 195. — Serán reprimidos con prisión de un mes a un año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, los conductores capitanes, pilotos, mecánicos y demás empleados de un tren o de un buque, que abandonaren sus puestos durante sus servicios respectivos antes de llegar a puerto o al término del viaje ferroviario.

Art. 196. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que por imprudencia o negligencia, o por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia

de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo.

Si del hecho resultare lesionada o muera alguna persona, se impondrá prisión de uno a cuatro años.

Art. 197. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que interrumpiere o entorpeciere la comunicación telegráfica o telefónica, o resistiere violentamente el restablecimiento de la comunicación interrumpida.

CAPITULO III

Piratería

Art. 198. — Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años:

10. El que practicare en el mar o en los ríos de la República algún acto de depredación o violencia contra un buque o contra personas o cosas que en él se encuentren, sin estar autorizado por alguna potencia beligerante, o sin que el buque por medio del cual ejecute el acto pertenezca a la marina de guerra de alguna potencia reconocida;
20. El que, abusando de una patente de corso legítimamente concedida, practicare algún acto de depredación o cualquier hostilidad contra buques de la República o de otra nación para hostilizar a la cual no estuviere autorizado.
30. El que se apodere de algún buque o de lo que perteneciere a su equipaje, por medio de fraude o violencia cometida contra su comandante;
40. El que entregare a piratas un buque, su carga, o lo que perteneciere a su tripulación;
50. El que, con amenazas o violencias se opusiere a que el comandante o la tripulación defendiera el buque atacado por piratas;
60. El que por cuenta propia o ajena, equipare un buque destinado a la piratería;
70. El argentino o extranjero residente en la República que traficase con piratas, o les suministrase auxilios;
80. El comandante de un buque armado que navegare con dos o más patentes de diversas potencias.

Art. 199. — Si los actos de violencia u hostilidad mencionados en el artículo anterior, fueren seguidos de la muerte de alguna persona que se encontrare en el buque atacado, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

CAPITULO IV

Delitos contra la salud pública. — Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas.

Art. 200. — Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.

Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco años de reclusión o prisión.

Art. 201. — Las penas del artículo precedente serán aplicadas al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere medicamentos o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.

Art. 202. — Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

Art. 203. — Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos anteriores, fuere cometido por imprudencia o negligencia, o por impericia en el propio arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de quinientos a dos mil pesos, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona, y prisión de seis meses a dos años si resultare enfermedad o muerte.

Art. 204. — Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos, el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a las prescripciones médicas o diversa de la declarada o convenida.

Si del hecho resultare enfermedad o muerte de alguna persona, la pena será de dos a seis años de prisión.

Art. 205. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.

Art. 206. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses, el que violare las reglas establecidas por las leyes de policía sanitaria animal.

Art. 207. — En el caso de condenación por un delito previsto en este capítulo, el culpable, si fuere funcionario público o ejerciere alguna profesión o arte, sufrirá, además, inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena. Si la pena impuesta fuere la de multa, la inhabilitación especial durará de un mes a un año.

Art. 208. — Será reprimido con prisión de quince días a un año:

10. El que sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar, o excediendo los límites de su

autorización, anunciare, prescribir, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito;

20. El que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiére la curación de enfermedades a término fijo, o por medios secretos o infalibles;

30. El que con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a otro que no tuviere título o autorización, para que ejerza los actos a que se refiere el inciso 10. de este capítulo.

TITULO VIII

DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO

CAPITULO I

Instigación de cometer delitos

Art. 209. — El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de un mes a cuatro años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 43.

CAPITULO II

Asociación ilícita

Art. 210. — Será reprimido con reclusión o prisión de un mes a cinco años, el que tomare parte en una asociación o banda de tres o más personas, destinada a cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.

CAPITULO III

Intimidación pública

Art. 211. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que para infundir un temor público, o suscitar tumultos a desórdenes, hiciere señales, diere gritos de alarma, hiciere estallar bombas o materias explosivas, o amenazare con un desastre de peligro común.

Art. 212. — Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

10. El que fabrique, venda, transporte o conserve explosivos susceptibles de causar estragos, sin permiso de la autoridad;
20. El que propague por cualquier me-

dio los procedimientos para causar incendio o estragos y para fabricar los materiales destinados a producirlos;

30. El que propague los medios de causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos.

CAPITULO IV

Apología del crimen

Art. 213. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito.

TITULO IX

Delitos contra la seguridad de la nación

CAPITULO I

Traición

Art. 214. — Será reprimido con reclusión o prisión de diez a veinticinco años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso inhabilitación absoluta perpetua, siempre que el hecho no se halle comprendido en otra disposición de este código, todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación, que tomare las armas contra ésta, se uniere a sus enemigos, o les prestare cualquier ayuda o socorro.

Art. 215. — Será reprimido con reclusión o prisión perpetua, el que cometiere el delito previsto en el artículo precedente, en los casos siguientes:

10. Si ejecutare un hecho dirigido a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero, o a menoscabar su independencia o integridad;
20. Si indujere o decidiera a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la república.

Art. 216. — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a ocho años, el que tomare parte en una conspiración de dos o más personas, para cometer el delito de traición, en cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar su ejecución.

Art. 217. — Quedará exento de pena el que revelare la conspiración a la autoridad, antes de haberse comenzado el procedimiento.

Art. 218. — Las penas establecidas en los artículos anteriores se aplicarán también, cuando los hechos previstos en ellos fueren cometidos contra una potencia aliada de la república, en guerra contra un enemigo común.

CAPITULO II

Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación

Art. 219. — Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que por actos hostiles, no aprobados por el gobierno nacional, diere motivo al peligro de una declaración de guerra contra la nación, expusiere a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, o alterare las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero.

Si de dichas hostilidades resultare la guerra, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión.

Art. 220. — Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al que violare los tratados concluidos con naciones extranjeras, las treguas y armisticios acordados entre la república y una potencia enemiga o entre sus fuerzas beligerantes de mar o tierra, o los salvoconductos debidamente expedidos.

Art. 221. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las inmunidades del jefe de un estado o del representante de una potencia extranjera.

Art. 222. — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años el que revelare secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa, o a las relaciones exteriores de la nación.

En la misma pena incurrirá el que obtuviere la revelación del secreto.

Art. 223. — Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo, el que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio.

Art. 224. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que indebidamente levantara planos de fortificaciones, buques, establecimientos, vías u otras obras militares, o se introdujere con tal fin, clandestina o engañosamente en dichos lugares, cuando su acceso estuviere prohibido al público.

Art. 225. — Será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años, el que, encargado por el gobierno argentino de una negociación con un estado extranjero, la condujera de un modo perjudicial a la nación, apartándola de sus instrucciones.

TITULO X

DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS Y ORDEN CONSTITUCIONAL

CAPITULO I

Rebelión

Art. 226. — Serán reprimidos con pri-

sión de uno a cinco años, los que se alzan en armas para deponer alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, cambiar la constitución, arrancarle alguna medida o concesión o impedir aunque sea temporalmente el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales.

Art. 227. — Serán reprimidos con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria, los miembros del congreso que concedieren al poder ejecutivo nacional, y los miembros de las legislaturas provinciales que concedieren a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona. (Artículo 29 de la constitución nacional).

Art. 228. — Se impondrá prisión de seis meses a dos años, al que ejecutare o mandare ejecutar decretos de los concilios, bulas, breves y rescriptos del papa que, para su cumplimiento, necesiten del pase del gobierno sin haberlo obtenido; y de uno a seis años de la misma pena, al que los ejecutare o mandare ejecutar, a pesar de haber sido denegado dicho pase.

CAPITULO II
Sedición

Art. 229. — Serán reprimidos con prisión de uno a tres años los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión, o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales, o su formación o renovación en los términos y formas establecidos en la ley.

Art. 230. — Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años:

10. Los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de éste (Artículo 22 de la constitución nacional);
20. Los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales, o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código.

CAPITULO III

Disposiciones comunes a los capítulos precedentes

Art. 231. — Luego que se manifieste la

rebelión o sedición, la autoridad nacional más próxima intimará hasta dos veces a los sublevados que inmediatamente se disuelvan o retiren, dejando pasar entre una y otra intimación el tiempo necesario para ello.

Si los sublevados no se retiraren inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza para disolverlos.

No serán necesarias, respectivamente, la primera y segunda intimación, desde que los sublevados hicieren uso de las armas.

Art. 232. — En caso de disolverse el tumulto sin haber causado otro mal que la perturbación momentánea del orden, sólo serán enjuiciados los promotores o directores, a quienes se reprimirá con la mitad de la pena señalada para el delito.

Art. 233. — El que tomare parte como promotor o director, en una conspiración de dos o más personas para cometer los delitos de rebelión o sedición, será reprimido si la conspiración fuere descubierta antes de ponerse en ejecución, con la cuarta parte de la pena correspondiente al delito que se trataba de perpetrar.

Art. 234. — El que sedujere tropas, o usurpare el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte o de un puesto de guardia, o retuviere ilegalmente un mando político o militar, para cometer una rebelión o una sedición, será reprimido con la mitad de la pena correspondiente al delito que trataba de perpetrar.

Si llegare a tener efecto la rebelión o la sedición, la pena será la establecida para los autores de la rebelión o de la sedición en los casos respectivos.

Art. 235. — Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena.

Los funcionarios que no hubieren resistido una rebelión o sedición por todos los medios a su alcance, sufrirán inhabilitación especial de uno a seis años.

Art. 236. — Cuando al ejecutar los delitos previstos en este título, el culpable cometiere algún otro, se observarán las reglas establecidas para el concurso de hechos punibles.

TITULO XI

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA

TITULO I

Atentado y resistencia contra la autoridad.

Art. 237. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones.

Art. 238. — La prisión será de seis meses a dos años;

10. Si el hecho se cometiere a mano armada;
20. Si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas;
30. Si el culpable fuere funcionario público;
40. Si el delincuente pusiere manos en la autoridad.

En el caso de ser funcionario público, el reo sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo del de la condena.

Art. 239. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que prestare asistencia a requisición de aquél, o en virtud de una obligación legal.

Art. 240. — Para los efectos de los dos artículos precedentes, se reputará funcionario público al particular que tratase de aprehender o hubiese aprehendido a un delincuente en flagrante delito.

Art. 241. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses:

10. El que perturbare el orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales, en las audiencias de los tribunales de justicia, o dondequiera que una autoridad esté ejerciendo sus funciones;
20. El que sin estar comprendido en el artículo 257, impidiera o estorbare a un funcionario público, cumplir un acto propio de sus funciones.

Art. 242. — Será reprimido con multa de quinientos a dos mil pesos e inhabilitación especial de uno a cinco años, el funcionario público que, en el arresto o formación de causa contra un miembro de los poderes públicos nacionales o provinciales, de una convención constituyente o de un colegio electoral, no guardare la forma prescrita en las constituciones o leyes respectivas.

Art. 243. — Será reprimido con prisión de quince días a un mes, el que siendo legalmente citado como testigo, perito, o intérprete, se abstuviere de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva.

En el caso del perito o intérprete, se impondrá, además, al reo, inhabilitación de un mes a un año.

CAPITULO II

Desacato

Art. 244. — Será reprimido con prisión de quince días a seis meses, el que provocare a duelo, amenazare, injuriare o de cualquier modo ofendiere en su dignidad o de-

coro a un funcionario público, a causa del ejercicio de sus funciones y al tiempo de practicarlas.

La prisión será de un mes a un año, si el ofendido fuere el presidente de la nación, un miembro del congreso, un gobernador de provincia, un ministro nacional o provincial, un miembro de las legislaturas provinciales o un juez.

Art. 245. — Al culpable de desacato no se le admitirá la prueba de la verdad o notoriedad de los hechos o cualidades atribuidas al ofendido.

CAPITULO III

Usurpación de autoridad, títulos u honores

Art. 246. — Será reprimido con prisión de un mes a un año e inhabilitación especial por doble tiempo:

- 1o. El que asumiere o ejerciere funciones públicas, sin título o nombramiento expedido por autoridad competente;
- 2o. El que después de haber cesado por ministerio de la ley en el desempeño de un cargo público, o después de haber recibido de la autoridad competente comunicación oficial de la resolución que ordenó la cesantía o suspensión de sus funciones, continuare ejerciéndolas;
- 3o. El funcionario público que ejerciere funciones correspondientes a otro cargo.

Art. 247. — Será reprimido con multa de cincuenta a mil pesos, el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere, o se arrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren.

CAPITULO IV

Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos

Art. 248. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.

Art. 249. — Será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio.

Art. 250. — Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada,

la prestación de su auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente.

Art. 251. — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que requiere la asistencia de la fuerza pública contra la ejecución de disposiciones u órdenes legales de la autoridad, o de sentencias o de mandatos judiciales.

Art. 252. — Será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público.

Art. 253. — Será reprimido con multa de cien a mil pesos e inhabilitación especial de seis meses a dos años, el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público, a persona en quien no concurrieren los requisitos legales.

En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales.

CAPITULO V

Violación de sellos y documentos

Art. 254. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare los sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa.

Si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su cargo, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de multa de cincuenta a quinientos pesos.

Art. 255. — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo.

Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de cincuenta a quinientos pesos.

CAPITULO VI

Cohecho

Art. 256. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años e inhabilitación absoluta por tres a diez años, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cual-

quier otra dádiva, o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

Art. 257. — Será reprimido con prisión de cuatro a doce años e inhabilitación absoluta y perpetua, el juez que aceptare promesa o dádiva para dictar una resolución o fallo, en asunto sometido a su competencia.

Art. 258. — Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que, directa o indirectamente, diere u ofreciere dádivas a un funcionario público para que haga u omita un acto relativo a sus funciones. Si la dádiva se hiciere u ofreciere a un juez, la pena será de un mes a cuatro años de prisión.

Si el culpable fuere funcionario público sufrirá además inhabilitación, en el primer caso, por seis meses a seis años, y en el segundo, por uno a diez años.

Art. 259. — Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a seis años, el funcionario público que admitiere dádivas que le fueren presentadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el ejercicio del cargo.

CAPITULO VII

Malversación de caudales públicos

Art. 260. — Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.

Art. 261. — Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.

Art. 262. — Será reprimido con multa del veinte al sesenta por ciento del valor sustraído, el funcionario público que por imprudencia o negligencia, o por inobservancia de los reglamentos o deberes de su cargo, diere ocasión a que se efectuare por otra persona la sustracción de caudales o efectos de que se trata en el artículo anterior.

Art. 263. Quedan sujetos a las disposiciones anteriores los que administraren o custodiaren bienes pertenecientes a establecimientos de instrucción pública o de beneficencia, así como los administradores y depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares.

Art. 264. — Será reprimido con inhabilitación especial por uno a seis meses

el funcionario público que, teniendo fondos expeditos, demorare injustificadamente un pago ordinario o decretado por autoridad competente.

En la misma pena incurrirá el funcionario público que, requerido por la autoridad competente, rehusare entregar una cantidad o efecto depositado o puesto bajo su custodia o administración.

CAPITULO VIII

Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas

Art. 265. — Será reprimido con prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por uno a cinco años el funcionario público que directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo.

Esta disposición será aplicable a los peritos y contadores particulares respecto de los bienes en cuya tasación, participación o adjudicación hubieren intervenido, y a los tutores, curadores, albaceas y síndicos respecto de los pertenecientes a pupilos, curados, testamentarias o concursos.

CAPITULO IX

Exacciones legales

Art. 266. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que exigiere una contribución ilegal, o abusando de su cargo, reclamare o recibiera dinero u otros valores.

La inhabilitación será de uno a cuatro años si la exacción se verificare empleando fuerza.

Art. 267. — Será reprimido con prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que convirtiere en provecho propio o de tercero las exacciones expresadas en el artículo anterior.

Art. 268. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que exigiere por sí o por persona interpuesta, derechos o propinas por lo que deba practicar gratuitamente, en virtud de su oficio, o cobrare mayores derechos que los que le correspondan.

Si para efectuar la exacción supusiere orden superior, comisión, mandamiento judicial u otra autorización legítima, sufrirá, además, inhabilitación especial por uno a seis años.

CAPITULO X

Prevaricato

Art. 269. — Sufrirá multa de mil a cuatro mil pesos e inhabilitación absolu-

ta perpetua el juez que dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por él mismo, o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas.

Si la sentencia fuere condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua.

Lo dispuesto en el párrafo 10. de este artículo, será aplicable en, su caso, a los árbitros y arbitradores amigables componedores.

Art. 270. — Será reprimido con multa de quinientos a dos mil quinientos pesos e inhabilitación absoluta de uno a seis años, el juez que decretare prisión preventiva por delito en virtud del cual no proceda, o que prolongare la prisión preventiva que, computada en la forma establecida en el artículo 30, hubiere agotado la pena máxima que puede responder al procesado por el delito cometido.

Art. 271. — Será reprimido con multa de doscientos a dos mil pesos e inhabilitación especial de uno a seis años, el abogado o mandatario judicial que defendiere o representare partes contrarias en el mismo juicio, simultánea o sucesivamente, o que de cualquier otro modo, perjudicare deliberadamente la causa que le estuviere confiada.

Art. 272. — La disposición del artículo anterior será aplicable a los fiscales, asesores y demás funcionarios encargados de emitir su dictamen ante las autoridades.

CAPITULO XI

Denegación y retardo de justicia

Art. 273. — Será reprimido con inhabilitación absoluta de uno a cuatro años, el juez que se negare a juzgar so pretexto de obscuridad, insuficiencia o silencio de la ley.

En la misma pena incurrirá el juez que retardare maliciosamente la administración de justicia después de requerido por las partes y vencidos los términos legales.

Art. 274. — El funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejare de promover la persecución y represión de los delinquentes, será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años, a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.

CAPITULO XII

Falso testimonio

Art. 275. — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una fal-

sedad, o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente.

Si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculcado la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión.

En todos los casos se impondrá al reo, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

Art. 276. — La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya declaración fuere prestada mediante cohecho, se agravará con una multa igual al duplo de la cantidad ofrecida o recibida.

El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso.

CAPITULO XIII

Encubrimiento

Art. 277. — Será reprimido con prisión de quince días a dos años, el que, sin promesa anterior al delito, cometiere después de su ejecución, alguno de los hechos siguientes:

10. Ocultar al delincuente o facilitar su fuga para substraerlo a la justicia;
20. Procurar la desaparición de los rastros o pruebas del delito;
30. Guardar, esconder, comprar, vender o recibir en prenda o en cambio los efectos substraídos;
40. Negar a la autoridad, sin motivo legítimo, el permiso de penetrar en el domicilio para tomar la persona del delincuente que se encuentre en él.
50. Guardar habitualmente delinquentes, u ocultar en la misma forma armas o efectos de los mismos aunque no tuviere conocimiento determinado de los delitos;
60. Dejar de comunicar a la autoridad las noticias que tuviere acerca de la comisión de algún delito cuando estuviere obligado a hacerlo por su profesión o empleo.

Art. 278. — Estarán exentos de pena por ocultación los consanguíneos y afines en línea ascendente y descendente, los hermanos, los cónyuges y los afines colaterales en segundo grado.

En los casos de delitos contra las personas, quedarán también exentos de pena por ocultación, los amigos íntimos y los que hubieren recibido grandes beneficios del responsable del delito, antes de su ejecución.

Art. 279. — La exención de pena a que se refiere el artículo anterior, se entenderá siempre que la ocultación no se haya hecho por precio o participando de los efectos del delito.

CAPITULO XIV

Evasión

Art. 280. — Será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hallándose legalmente detenido se evadiere por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas.

Art. 281. — Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado. Y si fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación absoluta por triple tiempo.

Si la evasión se produjere por negligencia de un funcionario público, éste será reprimido con multa de cien a mil pesos.

TITULO XII

DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA

CAPITULO I

Falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito

Art. 282. — Serán reprimidos con reclusión o prisión de tres a quince años, el que falsificare moneda que tenga curso legal en la República y el que la introdujere expiendiere o pusiere en circulación.

Art. 283. — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años el que cercenare o alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expiendiere o pusiere en circulación moneda cercenada o alterada.

Si la alteración consistiere en cambiar el color de la moneda, la pena será de seis meses a tres años de prisión.

Art. 284. — Si la moneda falsa, cercenada o alterada se hubiere recibido de buena fe y se expiendiere o circulare con conocimiento de la falsedad, cercenamiento o alteración, la pena será de cien a dos mil pesos de multa.

Art. 285. — Para los efectos de los artículos anteriores quedan equiparados a la moneda, los billetes de banco legalmente autorizados, los títulos de la deuda nacional, provincial o municipal y sus cupones, los bonos o libranzas de los tesoros nacional, provinciales o municipales, los títulos, cédulas y acciones al portador emitidos legalmente por los bancos o compañías autorizados para ello.

Art. 286. — Si la falsedad, cercenamiento o alteración se cometiere respecto de monedas extranjeras que no tengan curso legal en la República, o respecto de billetes de banco, títulos y deuda pública, títulos al portador y documentos de créditos extranjeros, la pena será de uno a cinco años de prisión en el caso del artículo 282, de seis meses a dos años en el del artículo 283

y de cincuenta a quinientos pesos de multa en el del artículo 284.

Art. 287. — Serán reprimidos con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación absoluta por doble tiempo, el funcionario público y el director o administrador de un banco o de una compañía que fabricare o emitiere o autorizare la fabricación o emisión de moneda, con título o peso inferiores al de la ley, billetes de banco o cualesquiera títulos, cédulas o acciones al portador en cantidad superior a la autorizada.

CAPITULO II

Falsificación de sellos y timbres y marcas

Art. 288. — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años:

10. El que falsificare sellos oficiales;
20. El que falsificare papei sellado, sellos de correos o telégrafos o cualquier otra clase de efectos timbrado cuya misión está reservada a la autoridad, o tenga por objeto el cobro de impuestos.

En estos casos, así como en los de los artículos siguientes, se considerará falsificación la impresión fraudulenta del sello verdadero.

Art. 289. — Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

10. El que falsificare marcas, contraseñas o firmas de que se use en las oficinas públicas o por funcionarios públicos, para contrastar pesas o medidas o identificar cualquier objeto;
20. El que falsificare billetes de em. presas, sellos, marcas o contraseñas de fábricas o establecimientos particulares, exigidas por la ley en cierta clase de trabajos o de artículos;
30. El que aplicare marcas o contraseñas de las oficinas públicas, o los sellos, marcas o contraseñas de fábricas o establecimientos particulares, a que se refiere el número precedente, a objetos, obras o artículos distintos de aquellos a que debían ser aplicados.

Art. 290. — Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas, a que se refiere los artículos anteriores, el signo que indique haber ya servido o sido inutilizado para el objeto de su expedición.

El que a sabiendas usare, hiciere o pusiere en venta estos sellos, timbres, etc., inutilizados, será reprimido con multa de cien a cinco mil pesos.

Art. 291. — Cuando el culpable de alguno de los delitos comprendidos en los artículos anteriores fuere funcionario público

y cometiere el hecho abusando de su cargo sufrirá además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

CAPITULO III

Falsificación de documentos en general—

Art. 292. — El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público, y con prisión de seis a dos años, si se tratare de un instrumento privado.

Art. 293. — Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare a hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

Art. 294. — El que suprimiere o destruyere en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en los casos respectivos.

Art. 295. — Sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio.

La pena será de uno a cuatro años, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital.

Art. 296. — El que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado, será reprimido como si fuere autor de la falsedad.

Art. 297. — Para los efectos de este capítulo, quedan equiparados a los instrumentos públicos los testamentos ológrafos o cerrados, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador, no comprendidos en el artículo 285.

Art. 298. — Cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena.

CAPITULO IV

Disposiciones comunes a los capítulos precedentes

Art. 299. — Sufrirá prisión de un mes a un año, el que fabricare, introdujere en el país o conservare en su poder, materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este título.

CAPITULO V

De los fraudes al comercio y a la industria

Art. 300. — Serán reprimidos con prisión de seis meses a dos años:

1o. El que hiciere alzar o bajar el precio de las mercaderías, fondos públicos o valores, por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas, o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía o género, con el fin de no venderla sino a un precio determinado;

2o. El que ofreciere fondos públicos, o acciones u obligaciones de alguna sociedad o persona jurídica, simulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas, o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas;

3o. El fundador, director, administrador o síndico de una sociedad anónima o cooperativa o de otro establecimiento mercantil, que publicare o autorizare un balance a cualquier otro informe falso o incompleto, cualquiera que hubiese sido el propósito perseguido al verificarlo.

Art. 301. — Será reprimido con prisión de dos a seis años el director, gerente o administrador de una sociedad anónima o cooperativa, o de una persona jurídica de otra índole, que prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a los estatutos, leyes u ordenanzas que los rijan, o consecuencia de los cuales la persona jurídica o la asociación, quedare imposibilitada de satisfacer sus compromisos o en la necesidad de ser disuelta.

CAPITULO VI

Del paso con cheques sin provisión de fondos

Art. 302. — Será reprimido con prisión de uno a seis meses, el que dé en pago o entregue por cualquier concepto a un tercero y siempre que no concurren las circunstancias del artículo 172, un cheque o giro sin tener provisión de fondos o autorización expresa para girar en descubierto y no abonare el mismo en moneda nacional de curso legal dentro de las 24 horas de haber sido protestado.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 303. — El presente código regirá como ley de la nación desde el 1o de enero de 1918.

Art. 304. — El poder ejecutivo dispondrá la edición oficial del código conjuntamente con la exposición de motivos que lo acompaña. Los gastos que origina la publicación se imputarán a esta ley.

Art. 305. — Quedan derogadas las leyes núms. 49, 1920, 4189, 7029, 9077 y 9143 lo mismo que las demás que se opusieren a la presente.

Art. 306. — Comuníquese, etc.

Rodolfo Moreno (hijo). — Antonio de Tomaso. — C. M. Prudère. — G del Barco. — D. del Valle.

Sr. Moreno. — Pido la palabra.

Aun cuando la exposición de motivos del proyecto de código penal que ha presentado la comisión especial de legislación penal y carcelaria está impreso y es conocido por los señores diputados, considero indispensable hacer un breve informe acerca del código, no sólo por la importancia que tiene la materia, sino para llevar a conocimiento de todo el país las razones que lo han informado.

Es sabido, señor presidente, que el 1o. de marzo de 1887 entró en vigor el código penal que nos rige, sancionado por la ley número 1920, de 7 de diciembre de 1886; y es también de pública notoriedad que desde su vigencia se sintió y se insinuó la necesidad de la reforma.

El código había sido elaborado después de una cantidad de ensayos, unos sin resultado, los primeros, y otros con él, hasta que pudieron concretarse en un proyecto y en la ley actualmente en vigor.

Aquel decreto de Urquiza del año 52, por ejemplo, no tuvo eficacia, porque no se tradujo en un proyecto y enunció sólo un deseo. Vino la constitución del 53, y con la imposición al congreso de que sancionara los códigos, obligó a nuevas leyes y nuevos decretos, nombrando comisiones para que prepararan todos los códigos destinados a regir en la nación. Así le llegó el turno al código penal, que fué preparado por el doctor Carlos Tejedor y presentado el año 1868.

Ese código, señor presidente, tenía un carácter eminentemente preceptivo, carácter que derivaba del que presentaban en general casi todas las leyes antiguas. Al que haya abierto alguna vez un volumen de las leyes de partidas o de cualesquiera de las recopilaciones españolas, le habrá llamado la

atención encontrar no sólo el precepto jurídico que ordena y determina, como lo hacen las leyes actuales, sino la definición, la explicación, y a veces el comentario del artículo que pretendía fijar una regla o una conducta jurídica cualquiera. Y nuestro código primitivo no se pudo substraer a esa influencia, como no se substraía el código mismo de Vélez Sársfield, a pesar de haber suprimido una cantidad de las definiciones y de los preceptos que contenía su modelo, el proyecto de Freitas.

Bastaría recordar, señor presidente, que la obra del doctor Tejedor se ocupaba en la complicidad de señalar tres grados, que éstos fueron reducidos a dos por el proyecto subsiguiente, y que se mantuvo esta calificación en el código hasta la ley de reformas del año 1903, que los suprimió. Todo esto marca una evolución de lo complicado y abigarrado de los primeros conjuntos a lo sencillo y elástico que caracterizan a los de hoy.

Había tomado aquel código sus inspiraciones en el de Baviera y en el primitivo español, y como tenía una amplitud tan grande, se consideró que era inconveniente traerlo a la discusión legislativa en esos términos. Entonces el poder ejecutivo, debidamente autorizado, designó una nueva comisión que presentó un despacho el año 1881, firmado por los doctores Villegas, García y Ugarriza.

Vinieron los dos proyectos a la cámara de diputados, y ésta, tomando como base el de Tejedor, no obstante lo manifestado, verificó modificaciones y elaboró el código vigente. Pero fué tan ineficaz el conjunto que se había sancionado, que inmediatamente de entrar en vigor se sintió de nuevo la necesidad de reformarlo; y así, tres años después de habernos regido, el poder ejecutivo, en el año 1890, designa una comisión para que proyectara un nuevo código penal. Formaron esta comisión los doctores Rodolfo Rivarola, Norberto Piñero y José Nicolás Matienzo, quienes presentaron su despacho el siguiente año, 1891, en un proyecto acompañado de una larga exposición de motivos que

se había inspirado en la obra de los nuevos estudiosos del derecho penal, principalmente en los autores italianos y en los preceptos del código holandés, que era en ese momento el conjunto más adelantado que se presentaba en esta materia. Cuando ese proyecto se redactó, se iniciaba lo que se ha llamado el renacimiento de los estudios penales.

Este articulado no llegó a la discusión legislativa. Aquí en la cámara de diputados, donde se radicó, se produjo un despacho de la comisión de códigos que firmaron el doctor Mariano Demaría (padre), el doctor Francisco Barroetaveña y doctores Luque y Carol, que aconsejaron la sanción de aquel proyecto de 1891, con algunas modificaciones; pero la cámara no se preocupó de él, y cambiada la comisión de códigos, encontró ésta que no era oportuno sancionar un nuevo conjunto, sino hacer reformas parciales. Y viene, señor presidente, con las reformas parciales, lo que se llama todavía hoy la ley de reformas.

Yo no voy a hacer una crítica de la ley 4189, promulgada en el año 1913; pero voy a señalar, sí, algunos puntos, con el objeto de que la cámara perciba que es inconveniente en estas materias librarse a la improvisación y que se impone en cuestión de códigos verificar las sanciones a libro cerrado, porque aun cuando tengan errores e inconvenientes en el conjunto perfectamente organizado, es peor que a ese conjunto se le introduzcan preceptos de otro origen o provenientes de una impresión del momento, porque entonces, sí que son inconvenientes los resultados.

Y esta evolución que se ha hecho, injertando en el código actual el proyecto del año 1891, por medio de la ley 4189, es lo que nos da la comprobación más exacta de lo que acabo de afirmar.

Algún tiempo después — vale la pena señalar casos prácticos, pues es lo que se toca mejor — de sancionada la ley de reformas, se percibió que se

hacían condenas monstruosas por delitos insignificantes. Por ejemplo: un menor había hurtado cincuenta centavos del cajón de un almacén y se le condenaba a dos años de penitenciaría. Un obrero había hurtado un sifón de soda de la fábrica en que trabajaba y se le condenaba igualmente a dos años de penitenciaría; y en este caso que también ha ocurrido, el juez, que era un actual y distinguido colega nuestro, el doctor Veyga, inventaba, por así decir, una nueva circunstancia atenuante para no aplicarle una pena mayor, procediendo quizá con un criterio extraño a la ley, pero siguiendo las máximas de lo que se llamaba en Francia el buen juez: el juez Magnaud.

Una sirvienta, un menor cualquiera empleado en una casa hurtaba una pieza de ropa usada, un pañuelo generalmente, y también era condenado a penitenciaría por dos hasta seis años. Ha habido casos en que los propios jueces, después de haber impuesto la condena y después de haber pasado ésta en autoridad de cosa juzgada, se dirigieron al poder ejecutivo para pedirle que hiciera uso de la facultad de conmutar, porque si bien la ley era inexorable para ellos, como hombres consideraban que era profundamente repugnante mantener en la cárcel a individuos condenados por delitos que en realidad eran insignificantes o por lo menos que no estaban de acuerdo con la pena que se les había aplicado.

¿Y cuál era, señor presidente, la causa de todo esto? Precisamente ese remiendo a que antes me he referido, de dos leyes perfectamente discordantes. Así en el proyecto del año 1891 había una disposición general que regía todos los delitos contra la propiedad, disposición que disminuía la pena desde presidio o penitenciaría hasta arresto cuando el valor de lo hurtado o de lo robado era insignificante de modo que naturalmente no se podían producir esas consecuencias cuando se trataba de objetos de pe-

queño valor. Pero la ley de reformas que tomó una parte del proyecto y no la otra, no hizo la correlación, y entonces quedaron los casos de hurto calificado sin correspondencia con el precepto que disminuía la pena por razones de la cantidad, y todo caso de hurto en estas condiciones era sancionado con la pena genérica de 2 a 6 años de penitenciaría.

Análogas contradicciones aparecen en la legislación sobre los robos, por razones idénticas, tanto que había casos en que era más conveniente para el autor del hecho robar, es decir, ejercitar fuerza en las cosas o violencia en las personas que hurtar, siendo la pena menor en el delito más grave y mayor en el delito más leve. Estas mismas contradicciones se han notado en la participación criminal, donde el juez no sabe en realidad qué disposiciones aplicar, porque el código para casos determinados dice unas cosas y la ley de reformas dice otras, perfectamente diferentes.

Era natural, señor presidente, que se llegara a estos resultados. El proyecto de Tejedor, que sirvió para la elaboración del código actual, obedecía a un sistema, a un punto de vista directivo, era un conjunto que estaba inspirado en una escuela y en una teoría y el proyecto del año 1891 era otro conjunto que estaba inspirado en otras ideas y en otros principios directrices. De ahí, entonces, que sacando parte del uno para encajarlo en el otro, se producían estas consecuencias enteramente inconvenientes para nuestra legislación.

Puede decirse que el proceso de nuestra legislación penal ha sido hecho en los expedientes criminales donde se han procesado, repito la palabra, a los delinquentes y al código. Y bastaría observar, entre otras tantas cosas que tiene nuestra legislación referida, alguna de este calibre. En el título sobre revelación de secretos, se encuentra la regla general sobre reparación de perjuicios. La regla general sobre reparación de perjuicios debe estar en la parte general del

código, porque rige a todos los delitos; pues bien: en el nuestro se encuentra repetida con ese carácter general en la revelación de secretos, lo que hace decir al doctor Rivarola en su crítica, que éste es probablemente el único secreto que nos revela nuestro código penal. Basta decir, además, que aun en nuestra legislación hay un artículo que castiga ciertos delitos con la pena del servicio de las armas; de tal manera que ahora, en plena época de conscripción, en que se considera un deber ciudadano servir en el ejército, todavía en nuestro código, no en la ley del 63, sino en el código penal vigente, existe como represión para algunos delitos el servicio de las armas por dos a tres años, y otra serie de incongruencias en las cuales no me voy a detener, porque sería inadecuado, dada la hora y probablemente el cansancio de la cámara.

La ley 4189 agravó, por consiguiente, el problema penal y lo agravó trayendo todas estas discordancias y omitiendo una serie de previsiones. Tan lo consideró así el congreso, que se han dictado después de la sanción de aquella ley, una serie de disposiciones penales que han tendido a corregirla o a incorporar las nuevas previsiones que impone el movimiento social que hemos seguido. Así, hemos incorporado al conjunto de nuestras leyes represivas una ley sobre falsificación de moneda, otra ley que se ha llamado social y que es probablemente la más antisocial de las leyes que haya podido dictar el congreso argentino, otra sobre represión de la trata de blancas, que no ha resuelto el problema, por cierto, y otra sobre cheques dolosos, que derogó la jurisprudencia de los tribunales al no aplicarla y que dió lugar a que su autor, el señor diputado del Valle, presentara un nuevo proyecto que ha estudiado esta comisión especial.

Pero además de esa serie de leyes, tenemos la ley básica del año 1863, que trata de los delitos y crímenes contra la nación, y aparte de ésta, otra serie de disposiciones dispersas conte-

nidas en un conjunto de leyes que son de carácter penal y que deben aplicar los jueces en lo criminal y correccional de la república.

De manera que puede afirmarse que, a pesar de todo lo que hemos marchado en nuestra vida institucional, el congreso argentino no ha cumplido aún con el deber que le atribuye la constitución al imponerle la obligación de dictar un código penal, pues no tenemos código; existen, en rigor, una serie de disposiciones dispersas, perdidas y que no constituyen una unidad legislativa como lo ha querido y lo ha impuesto un precepto expreso de la constitución argentina.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, presenté en una de las primeras sesiones del año pasado un proyecto de código penal, que no era otra cosa que la base para la discusión y para la elaboración de un código definitivo. Presenté el proyecto de 1906, compuesto por aquella comisión de la que formaron parte Rivarola, Piñero, Saavedra, Beazley, Moyano Gacitúa y Ramos Mejía. Y lo presenté incluyendo como agregado las leyes que se habían sancionado con posterioridad por el congreso, a los efectos de promover la unidad legislativa en esta materia. Promoví, inmediatamente de hecha la presentación del proyecto, una encuesta entre magistrados y profesores, a fin de que reuniendo todo un caudal de opiniones pudiera una comisión especial de la cámara, que se nombró oportunamente, tener los elementos necesarios para redactar el proyecto de código penal definitivo.

No solamente se requirieron opiniones que están contenidas en la encuesta, sino que la comisión debió recabar también la colaboración personal de algunos jurisconsultos, que se prestaron con toda buena voluntad para la obra. El doctor Rivarola, coautor del proyecto de 1906, nos prestó esa colaboración y lo hizo también en forma especialísima el doctor Julio Herrera, ex senador de la nación,

quien se costó desde su provincia especialmente para concurrir a nuestras reuniones, trabajando con nosotros no menos de cinco veces, durante largas sesiones y examinando por completo la parte general del proyecto y también la parte especial, aunque esta última con menos detención.

Dejo constancia de esa colaboración, porque ha sido realmente interesante para la comisión que he presidido y porque no quiero ni deseo adornarme con el fruto del trabajo ajeno, sino anotar como consta en el volumen impreso los elementos diversos que se nos han allegado.

Expresada la forma de trabajo que ha tenido la comisión y que ha debido contar como ha contado con la colaboración decidida e inteligente de la secretaría de la cámara, que la ha ayudado en todo lo relativo a impresiones y correcciones, lo mismo que el jefe de división señor Da Rocha y el encargado de la misma, doctor De la Vega, quiero dar también, de una manera muy breve, los puntos de vista que ha tenido al presentar el proyecto, en términos generales, porque creo que en una reforma de esta importancia, conviene que todo el país se dé cuenta de los puntos de mira que la comisión ha tenido en consideración.

Desde luego, hemos querido presentar una ley eficaz, que sea susceptible de aplicación entre nosotros, sin enmorarnos de teorías, que a veces son halagadoras, pero que no se pueden llevar a la práctica en nuestro país por una cantidad de razones de hecho. Hemos tomado así los elementos científicos cuando han sido susceptibles de aplicación, porque hemos considerado que las teorías y los ensayos no convienen en las leyes, explicándose en los libros y en las controversias.

Un movimiento generalizado de entre todos los que se han ocupado de derecho penal es el relativo a la individualización de las penas. Cada caso en esta materia es distinto del anterior, y es preciso que demos a los jueces instrumentos flexibles para que puedan

medirlo de acuerdo con todos los antecedentes personales y sociales y hacer realmente justicia. Este no era el criterio de las leyes antiguas que, al contrario, ceñían al juez de una manera tal que éste se encontraba muchas veces en la precisión de absolver, cometiendo una injusticia, o de condenar a una pena severa, cometiendo otra injusticia; y tenían en cuenta mucho más que las condiciones del sujeto y del medio y las conveniencias de la represión, el hecho mismo material, descarnado, criterio del que puede ser modelo aquella ley del Fuego Juzgo que daba una pena, en el delito de lesiones, para la herida en cada uno de los dedos de la mano o del pie, estableciendo una represión diferente, según cuál fuere la parte del órgano que había sido afectada por la lesión.

Ahora, señor presidente, ¿cuál era la manera práctica de llegar a ese ideal de la individualización de la pena, a ese ideal que lo hacía decir a Tarde.—sociólogo, juriscónsulto y magistrado—que en el orden penal lo más conveniente sería hacer para cada sujeto delincuente una condena especial, que surgiera de todos los antecedentes del individuo y del hecho, así como los sastres hacen para cada hombre un traje de acuerdo con su medida? ¿Cuáles eran, entonces, los medios de que podía disponer una ley para llegar realmente a la individualización? Nosotros, que hemos aceptado el criterio, para desenvolverlo, hemos llegado a las conclusiones que voy a enunciar.

En primer lugar, se han consignado, de acuerdo con la doctrina científica indiscutida, penas flexibles, con un máximo y un mínimo lejanos, que permitan al juez, estimando las circunstancias de cada caso, dar la sentencia acertada, pudiendo apreciar y juzgar con criterios amplios, y no rígidos.

En segundo lugar, cambiando el punto de vista en la teoría de las atenuantes y de las agravantes, también

de acuerdo con los criterios científicos modernos, y de conformidad con todos nuestros publicistas, que aconsejan no hacer enumeración de circunstancias, sino dar normas generales. Además no establecer como medida de la penalidad el término medio del castigo elástico, sino autorizar a los jueces para que se muevan entre el máximo y el mínimo, para dar la condena más acertada en cada caso particular.

Y en último término, establecer para los delitos graves la pena paralela, es decir, un castigo que el juez elija entre dos que se colocan alternativamente para aplicar lo que más convengan al caso al cual se dirige.

Esta dirección se acepta en la parte especial, donde se prescinde de las penas fijas autorizándose una u otra.

Hemos introducido también instituciones nuevas, de acuerdo con el proyecto de 1906. Así, hemos reglamentado la condena condicional o sea la suspensión de la pena en los delitos de poca importancia, la cual se mantiene y no se aplica sino en el caso de alguna reincidencia, a los efectos de amenazar a los delinquentes primarios y no poblar con ellos las cárceles.

Y aquí, señor presidente, otra incongruencia de estas improvisaciones en materias tan serias. La ley anterior, el código, en una palabra, había establecido la posibilidad de substituir las penas corporales con dinero: pagar la pena, se llamaba entonces a esa operación.

El proyecto del año 91 había variado ese criterio, pero introducía la condena condicional. La ley de reformas no aceptó la condena condicional e impidió la substitución. De aquí, entonces, que en muchos casos, delinquentes primarios por delitos insignificantes tenían y tienen fatalmente que ir a cumplir su pena de encierro, porque no hay en la ley ningún resorte para salvarlos de esa situación; es decir, la ley de reformas vino a agravar la situación, suprimiendo una institución mala, porque no creó la

superior que se había proyectado en substitución de la misma.

Hemos reemplazado la gracia por la libertad condicional. La gracia se otorga cuando se supone la reforma positiva del penado; pero se acuerda de una manera definitiva. ¿Y si el penado no se hubiera reformado? Si cometiera al día siguiente de salida de la cárcel un delito nuevo? No habría para él ninguna clase de medida, ni de represión, sino en cuanto al nuevo delito.

Hemos considerado, por eso, que esa gracia debe darse de una manera condicional; esto es: si el penado cometiera dentro del tiempo que le falta para cumplir la condena otro delito, deberá volver a la cárcel a integrar la pena. La gracia, entonces, se acordaría como un premio real a la buena conducta comprobada y no como un ensayo en la forma que lo hace la ley actual.

Hemos reglamentado la reparación de los daños; hemos cambiado el criterio en materia de tentativa, de participación, de concurso de delitos, de encubrimiento; nos hemos ocupado de reglamentar las acciones, la extinción de éstas y de las penas, y nos hemos detenido cuidadosamente en el criterio de la responsabilidad, punto sobre el que quiero decir algunas palabras para que los señores diputados perciban todo el alcance de la reforma.

En la actualidad, nuestra ley, como la casi totalidad de las que rigen en otros estados, sancionan la falta de castigo para el que realiza el hecho en un momento particular de perturbación, por ejemplo, en los casos de locura; pero nuestra ley no toma medida alguna contra la persona que ha realizado el hecho en esas condiciones. De manera que un ebrio que asesina, comprobada la ebriedad total e involuntaria, sale a la calle a repetir el caso de ebriedad y probablemente el de asesinato, y lo mismo, señor presidente, el loco o cualesquiera de los otros perturbados que son absueltos por esos motivos.

Todo esto ha ocurrido porque la ley ha tenido en cuenta criterios expiatorios, criterios antiguos, que se relacionan, más que con las sanciones jurídicas, con las sanciones religiosas que se dan para los pecados, y no con la que debe conferir la sociedad para los delincuentes. Hemos transformado, por eso, el criterio, y hemos establecido que a estos individuos peligrosos se les debe recluir hasta que cese la situación y el estado de peligro, debidamente comprobado.

La legislación nuestra en materia de menores es tan atrasada y tan anacrónica que merecerá, seguramente, calificativos duros a todo aquel que la estudie. Baste decir que cuando comete el hecho un menor de edad, el juez se limita a averiguar cuántos años tiene. Si es menor de doce años no averigua nada más; lo pone en libertad, cualquiera que sea el medio en que este menor se encuentre, cualesquiera que sean sus condiciones y cualquiera el peligro de que pueda volver a reincidir en el hecho. Y si es mayor de doce años y menor de quince, averigua sus condiciones de discernimiento: si lo tiene, lo castiga lo mismo que a un mayor; si no lo tiene, lo pone en libertad, sin tomar sobre él ninguna medida tutelar. Es, señor presidente, el código criminal en esta parte, un código realmente criminal.

La comisión especial se ha preocupado de terminar con esta situación inconveniente, proyectando disposiciones que amparen a la sociedad y a los menores, pero autoriza a los jueces o a los tribunales a que tomen medidas tutelares contra los mismos y hasta que los encierren en establecimientos especiales, teniendo en cuenta que puede ser inconveniente la libertad de estos sujetos.

Además no adopta estos criterios rígidos de que cuando el menor tiene quince años carece de penalidad si no tuvo discernimiento, y cuando tiene quince años y un día el hecho sólo de la edad lo coloca en las mismas condiciones que un hombre de treinta o de cuarenta años. Se hacen escalas y se establecen proporciones, para colocar, se-

gún los casos, una penalidad más leve o la penalidad completa. Y por último, toma medidas contra los padres, tutores o guardadores en salvaguarda del pequeño delincuente, mañana hombre peligroso si la sociedad lo descuida.

En la parte especial, la comisión se ha preocupado no solamente de los delitos, sino de la penalidad que corresponde, tratando de adaptarla a los principios que rigen actualmente, pero contentiendo todas las previsiones que son necesarias para una buena defensa social.

Esta obra, señor presidente, que esbozo así, de una manera muy ligera, porque la exposición impresa contiene la totalidad de los fundamentos, tiene que completarse por la comisión y por la cámara. Es necesario que se dicte la ley carcelaria, una ley en que se establezca el régimen de la penalidad en primer término, pero el régimen de la penalidad en toda la república y bajo el sistema progresivo, si fuera posible, porque hoy en cada cárcel, en cada provincia y en cada lugar se cumplen las penas como les parece oportuno a los gobiernos locales, es decir que habiendo o debiendo haber un sólo código penal, la aplicación de las represiones se hace de una manera totalmente diferente en unos y en otros lugares, como si no pertenecieran todos al mismo país.

Es necesario crear, además, la dirección de prisiones que establezca la fiscalización sobre todas las cárceles y que asegure el mantenimiento del régimen penal dentro de todo el territorio de la nación.

Es necesario que se cree la oficina central de identificación, a los efectos de comprobar la reincidencia en toda la república, reincidencia que forma parte de un capítulo especial del código; y a los efectos también de acordar o denegar la condena condicional, porque si ésta no ha de aplicarse a los reincidentes, quiere decir que el que comete un delito en la misma provincia o en el mismo estado las dos veces no obtendría la suspensión de la pena, y si lo cometiera en estados diversos sí, por falta de comunicación y la au-

sencia de canje de fichas entre unas y otras oficinas.

Además señor presidente, esa ley debiera preocuparse de la construcción de establecimientos carcelarios a los efectos de poder cumplir bien las disposiciones de la constitución y del código penal; y, por último, del patronato de excarcelados. Con esto, que formaría la segunda parte del trabajo de esta comisión especial, la labor quedará completa y habremos realizado una obra realmente constructiva y civilizadora.

La comisión no ha procedido en esta materia con criterio propio ni personal: ha tratado de ser exponente de las necesidades nacionales haciendo cosa práctica, científica, humana y eficaz. Entrega su trabajo a la cámara y al país, convencida de que ha cumplido con su deber y en la esperanza de no haber defraudado la confianza de que fuera objeto cuando le cupo el honor de ser designada para realizarlo. Ha tenido como punto de mira los fines más elevados y ha demostrado con su acción, a la cual han concurrido hombres de todos los partidos políticos, que todos sabemos unirnos en propósitos sanos y patrióticos cuando es necesario propiciar el bien general y el adelanto colectivo.

He terminado. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados se acercan y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Bravo). — Si ningún señor diputado hace uso de la palabra, se va a votar en general.

Sr. Pinedo. — Pido la palabra.

No voy a hacer una observación de fondo sobre el proyecto de código penal que se discute, ni voy a contestar, siquiera incidentalmente, ninguna de las consideraciones contenidas en el informe escrito de la comisión, ni en el magnífico informe verbal con que acaba de completarlo el señor diputado por Buenos Aires; mi observación es de carácter reglamentario, es una duda que someto a la consideración de la cámara.

Siendo ministro de justicia e instrucción pública remití, naturalmente

como ministro—era presidente el doctor Figueroa Alcorta—un proyecto de código penal que fué preparado por la comisión a que se ha referido el señor diputado por Buenos Aires, comisión compuesta por el ministro de la suprema corte doctor Moyano Gacitúa, por el presidente de la cámara de lo criminal, que lo era el doctor Saavedra, por el doctor José María Ramos Mejía, médico especialista, por el doctor Beazley, jefe de policía de la Capital, y por algún otro más, me parece el doctor Rivarola, jurisconsulto especialista.

Ese proyecto fué remitido al senado. Me parece que según la ley Olmedo los proyectos de códigos no caducan; de modo que yo no sé si esto establece un derecho preferente del senado para conocer de ese asunto, o si podemos nosotros legislar sobre esta materia con entera libertad.

Es este punto que deseo someter a la apreciación de la comisión, a fin de saber si lo ha tenido en cuenta y si cree que no obstante encontrarse un proyecto de código en el senado de la nación, la honorable cámara puede despachar otro proyecto.

Sr. Moreno. — Pido la palabra.

El proyecto a que se refiere el señor diputado Pinedo y que yo mencioné es del año 1906, el cual, en efecto, fué mandado a la cámara de senadores hace más de diez años. Allí tuvo despacho, pero tengo entendido que caducó.

El año pasado, antes de presentar mi proyecto, consulté con algunos de los miembros de la comisión respectiva de la cámara de senadores para saber si iban a formular despacho y si iban a ocuparse del asunto, no por razones reglamentarias sino por motivos de cortesía; y supe que no había allí mayor propósito de hacer un estudio, a pesar de que uno de los senadores, me parece que el señor senador Zabala, se preocupaba del asunto.

Por esos motivos presenté el proyecto, que fué pasado a todos los señores senadores, cuando promoví la encuesta. Si el señor diputado Pinedo ha hojeado el volumen impreso, se habrá

apercibido que está la nota pasada a cada uno de los senadores acompañando el proyecto y pidiéndoles opinión sobre esta iniciativa que iba a ser tratada y discutida en la cámara de diputados, y ningún señor senador tuvo observación que hacer.

Excuso decir que si hubiera sabido o hubiera creído que en la cámara de senadores se iba a tratar de resolver este asunto, habría por mi parte declinado mi presentación y me hubiera adherido en el momento oportuno al trabajo que en ella se hacía o lo hubiese discutido, porque no tenía un propósito personal y sólo me guiaba el deseo de que hubiera un código penal para la nación.

Ea cuanto a la observación reglamentaria, me parece que sólo con enunciar su significado desaparece cualquier eficacia que ella pudiera tener. Bastaría decir lo siguiente: una cámara podría, según ella, apropiarse o hacer como si fuera cosa suya un proyecto por el hecho de que estuviera en ella radicado para que no se sancionase y para que ningún miembro del congreso pudiera ocuparse del mismo. Bastaría, por ejemplo, que cualquier diputado presentara un proyecto de modificación al código civil, que pasara a comisión y que la comisión no lo estudiara, para que el senado ni la misma cámara pudieran hacer trabajos alrededor de él y para que una reforma trascendental se enterrase.

Me parece que no puede haber por lo tanto ninguna clase de preocupación personal ni reglamentaria para considerar el código penal.

Por otra parte, la observación vendría tarde. Después de haberse presentado un proyecto, nombrado una comisión especial para estudiarlo, producido el despacho esa comisión, designado día para tratarlo y oído el informe del presidente de la misma para considerarlo, es tardío que surja recién en este momento la observación reglamentaria que nos obligaría al abandono de la tarea.

Sr. Pinedo. — Pido la palabra.

No he tenido los escrúpulos a que

se refiere el señor diputado por Buenos Aires. He sometido un punto reglamentario a la resolución de la cámara, porque me parecía que era mi deber hacerlo y considero que es un deber de la cámara tenerlo presente. Por mi parte, desde ya anuncio que votaré por que se trate en esta cámara el proyecto de código.

Me parece que eso es lo conveniente, aparte de todas las razones que ha dado el señor diputado por Buenos Aires, muchas de las cuales me parecen inconsistentes, pero en cambio hay una fundamental. Realmente, un proyecto abandonado en el senado y del cual el senado no se ha ocupado durante diez años, no puede suponerse que tenga derecho preferente para tratarlo.

Por otra parte, las consideraciones que ha hecho el miembro informante de la comisión, de que el senado no se ha ocupado del asunto, que el asunto no tenía ambiente en aquella cámara para ser iniciado allí, bastan para que esta cámara pueda resolver, con entera libertad, que tiene realmente el derecho de prelación.

En este sentido no es un escrúpulo, sino simplemente una aclaración para que el punto no venga después como una objeción a nuestra resolución.

Nada más.

Sr. Marcó. — Pido la palabra.

Si alguna duda hubiera tenido sobre la bondad en general de este proyecto, después de oír la brillante exposición del señor miembro informante de la comisión, habríase disipado.

Pienso como él que este proyecto debe votarse a libro cerrado y que la discusión en particular, lejos de ser ventajosa, irrogaría grandes perjuicios al mérito intrínseco substancial del proyecto. Si la discusión hubiera de hacerse en detalle, expondría mis opiniones contrarias acerca de varios puntos de trabajo de la comisión, como ser determinadas articulaciones sobre la prescripción, las circunstancias agravantes y atenuantes y otras muy interesantes, tanto más

cuanto malogran la sabia jurisprudencia adquirida.

Pero en esta ocasión quiero acen-
tuar una necesidad que ha señalado precisamente el presidente de la comisión.

El proyecto establece para los delitos de primer grado, contra la vida, por ejemplo, las penas de reclusión y de prisión y éstas deberán hacerse efectivas en nuestros establecimientos carcelarios, que no llenan las condiciones de relación indispensables con la naturaleza de esa clase de penas. La reclusión, por lo que en sí misma significa, no puede hacerse efectiva en los establecimientos carcelarios, dado que no tenemos sino la prisión nacional y la penitenciaria. De ahí que, teniendo en cuenta el número de establecimientos de orden penal y carcelario existentes en los territorios nacionales y en las provincias, sea sensible que la comisión no haya agregado a la prisión y reclusión, la detención, la cual puede ser de más fácil y general aplicación.

De esta manera, señor presidente, acentúo la necesidad que señalaba el presidente de la comisión, o sea la de preocuparnos de las leyes carcelarias.

Nada más.

Sr. Moreno. — Pido la palabra.

Para satisfacer al señor diputado por Entre Ríos, me es muy agradable manifestarle que la comisión está estudiando el proyecto de ley carcelaria y precisamente mañana se reunirá con asistencia del señor ministro de justicia, a los efectos de planear los grandes rasgos de ese proyecto, que los tengo ya preparados y que los voy a someter a la consideración de la comisión, para que si los acepta, formulemos el articulado, porque creo, como el señor diputado doctor Marcó, que es indispensable, como complemento del código, para hacer obra completa, sancionar la ley carcelaria.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Dos voy a decir, señor presidente, para salvar opiniones expresadas hace mucho tiempo y reiteradas en diferen-

tes ocasiones. Este trabajo de la comisión especial es realmente de método. Vamos a tener por fin un verdadero código penal y en ese sentido debemos hacer honor al trabajo de la comisión votándolo a libro cerrado.

Yo no estoy de acuerdo con muchas de las reformas fundamentales que hace la comisión; pero considero que si discutimos este código vamos a desarticularlo completamente. Por otra parte, él va a ser experimentado y lo será conjuntamente con la ley carcelaria que se está elaborando.

La experimentación dirá si han tenido razón los señores miembros de la comisión al proyectar reformas tan fundamentales como la de abolición de la pena de muerte y otras que no quiero recordar; y entonces tendremos oportunidad de volver sobre la materia.

Entretanto, la exigencia más inmediata de nuestra sociedad es la reforma total, la reorganización de nuestra legislación penal; y es en ese sentido que adhiero a la moción de tratar este código a libro cerrado, no solamente por una necesidad social, sino también rindiendo homenaje a la comisión que ha trabajado en tan breve término tan bien y con tanto éxito. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Sr. del Barco. — ¡Hay número, señor presidente!

Sr. Presidente (Bravo). — Sí, señor diputado.

Se va a votar en general.

—Afirmativa general.

Sr. Presidente (Bravo). — En discusión en particular.

Sr. de Tomaso. — Pido la palabra.

Para proponer, dado que hay una sola disidencia, que se vote a libro cerrado todo lo demás, haciéndose una votación aparte sobre la disidencia.

Sr. Presidente (Bravo). — Se va a votar la indicación del señor diputado por la capital, de votar a libro cerrado...

Sr. Moreno (R.) — Debo prevenir señor presidente, que yo tengo que hacer notar algunos errores, que se

han deslizado en la impresión, y lo haré al tratarse en particular, en nombre de la comisión.

Sr. del Valle. — Ahora es el momento.

Sr. Melo. — Se podría autorizar a la comisión a que ella misma corrigiera esos errores, que son simplemente de imprenta.

Sr. Escobar. — Así se ha hecho siempre.

Sr. Presidente (Bravo). — Permítame el señor diputado. Corresponde que la cámara considere la moción formulada por el señor diputado por la capital, en el sentido de que en una sola votación se apruebe en particular el proyecto, con la sola excepción del punto a que se refiere la disidencia planteada.

Si hay asentimiento, así se procederá.

—Asentimiento.

Sr. Maidana. — Pido la palabra.

Por mi parte, señor presidente, me encuentro imposibilitado para votar a libro cerrado el proyecto de código que está a la consideración de la honorable cámara, porque no había pensado que habría de tocarle hoy el turno a este asunto.

Creo que la responsabilidad de cada uno de los diputados que nos sentamos en esta cámara nos obliga a dar nuestro voto con toda conciencia. No sé si todos los señores diputados se habrán informado del proyecto en todos sus términos. Tengo la más plena confianza y fe en la intelectualidad de los miembros que componen la comisión que ha despachado el proyecto y tal vez éste sería un motivo para votarlo a libro cerrado; pero, francamente, no me creo habilitado para votar algunas de sus disposiciones que no conozco bien.

Por estas razones, señor presidente, haría indicación en el sentido de que, votado en general el proyecto, levantáramos la sesión hasta mañana, al objeto de que aquellos señores diputados que no conozcan a fondo el proyecto puedan estudiarlo y dar su voto. De

manera que esta indicación de si se considera o no a libro cerrado, correspondería votarla en la sesión de mañana.

Sr. Presidente (Bravo). — Se va a votar la moción del señor diputado por Córdoba, que es previa.

Sr. de Tomaso. — La sesión de mañana ha sido fijada para tratar el código de minería.

Sr. Maidana. — Creo que el señor diputado no puede tener inconveniente en aceptar mi indicación, porque estoy seguro de que muchos de los señores diputados no están bien interiorizados del asunto...

Sr. del Barco. — Esta sería una moción de aplazamiento.

Sr. Maidana. — ... y yo creo que en la sesión de mañana a primera hora todos estaremos en condiciones de votar con plena conciencia a libro cerrado, si así se resolviera.

Sr. Moreno (R.) — Pido la palabra.

Con toda la consideración que me merece la palabra de mi distinguido colega el señor diputado por Córdoba, me permitiré hacer notar que un código no se estudia en una sola noche.

El señor diputado que no haya tenido la precaución de leerlo antes — ésta es una reforma que está hace año y medio en el tapete de la cámara y hace casi treinta años en la opinión pública — no va a tener en las horas que median hasta la sesión de mañana, el tiempo necesario para poder formular observaciones fundamentales al proyecto.

No se podrá destruir la labor de una comisión sería con una simple improvisación. A lo que va a dar lugar esa improvisación es a que deshagamos un conjunto organizado, que podrá tener errores, que se podrán corregir a medida que la práctica los vaya observando y no por una simple lectura nocturna y ligera, haciendo anotaciones al margen, para alterar un trabajo que ha sido hecho con toda amplitud y dedicación.

Sr. Presidente (Bravo). — Se va a votar la moción de aplazamiento del señor diputado por Córdoba.

Sr. Maidana. — Pido la palabra.

Yo insisto sobre mi indicación, no porque crea que en una noche se pueda estudiar todas las teorías y los fundamentos necesarios para redactar un verdadero código penal, sino sencillamente porque me parece que en la sesión de mañana estaremos en mejores condiciones de votar con conciencia el proyecto de la comisión y seguramente de aplaudirlo.

Vuelvo a repetir que no he de estudiar en una noche todas esas teorías penales; pero como soy abogado, como he ejercido muchos años mi profesión y he estudiado muchos puntos de derecho penal, tengo algunas pequeñas disidencias con la comisión y no me encuentro en este momento habilitado para votar en globo todo un proyecto de código, que puede presentar algunas disposiciones que deban modificarse.

Por estas consideraciones, insisto en mi indicación de que, votado en general, pasemos a cuarto intermedio.

Varios señores diputados. — Que se vote.

Sr. Presidente (Bravo). — Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por Córdoba.

Sr. de Tomaso. — ¿Por qué se va a votar esa moción?

Sr. Presidente (Bravo). — Porque es una moción de orden.

Sr. de Tomaso. — Yo he formulado otra que es previa: de que continuemos con la orden del día.

Sr. Presidente (Bravo). — No, señor diputado; la moción del señor diputado por Córdoba es previa a toda otra moción, porque consiste en que pasemos a cuarto intermedio hasta mañana.

Varios señores diputados. — Que se vote.

—Se vota, y resulta negativa.

Sr. Presidente (Bravo). — Se va a votar la moción del señor diputado por la capital, para que la cámara en una sola votación, en vista de la objeción formulada por el señor diputado por Córdoba, apruebe en particular el despacho de la comisión, con la salvedad de que hace mérito la disidencia planteada en el seno de la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Maidana. — Pido permiso para ausentarme, porque no estoy en condiciones de votar este asunto.

Sr. Presidente (Bravo). — La presidencia debe someter a la votación de la cámara el pedido formulado por el señor diputado por Córdoba, porque su retiro importa dejar a la cámara sin quórum.

Sr. Maidana. — Es atribución exclusiva de la presidencia el permiso para ausentarme.

Varios señores diputados. — Vote en contra.

Sr. Bunge. — Ya ha salvado su responsabilidad personal.

Sr. Presidente (Bravo). — Se va a leer el artículo pertinente del reglamento.

—Se lee:

"Artículo 147. — Ningún diputado podrá ausentarse de la sesión sin permiso del presidente, quien no lo otorgará sin consentimiento de la cámara en el caso que ésta debiera quedar sin quórum legal".

Sr. del Barco. — Es el caso.

Sr. Presidente (Bravo). — Se va a votar si se autoriza al señor diputado a ausentarse del recinto.

Sr. Maidana. — Ante la urgencia de votar este proyecto, exteriorizada por la cámara, desisto de mi pedido y resuelvo quedarme al sólo efecto de completar el quórum.

Sr. Presidente (Bravo). — Se va a votar en particular el despacho en discusión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Maidana. — Que conste mi voto en contra.

Sr. Presidente (Bravo). — Se hará constar.

En consideración la disidencia de la comisión.

Sr. de Tomaso. — Pido la palabra.

Mi única disidencia se refiere al capítulo del duelo. En otros puntos, guiado por el deseo de coadyuvar a la obra común en que estábamos empeñados, he tratado de ser siempre, dentro de la comisión especial, un elemento de unidad, coordinación, y creo haber contribuido a su tarea en forma eficaz. Pero

en este punto he lamentado no poder concordar con el señor presidente de la comisión, con el cual hemos trabajado en perfecta armonía en la tarea menuda y pesada de hacer el articulado del código, lo que ha sido sumamente grato para mí, hasta por razones de orden personal, pues he estudiado derecho penal con el señor diputado Moreno en la universidad de Buenos Aires y conservo de aquel curso, al cual dió el señor diputado una orientación moderna y liberal, el mejor recuerdo. Al encontrarnos ahora como diputados vinculados en la obra práctica de hacer un código penal para la república, que diera unidad a toda la materia penal dispersa y eliminara de nuestra legislación todo lo que tiene de atrasado y de injusto, hemos concordado casi siempre, por tener el mismo criterio, sin ninguna dificultad; pero en este asunto del duelo no he podido abdicar de mis convicciones.

Fundaré, pues, mi disidencia, brevemente, por lo avanzado de la hora y también por respeto a la honorable cámara, puesto que debo suponer a la mayoría de sus miembros, en razón de su cultura jurídica, al corriente de todas las consideraciones de orden legal que puedan hacerse sobre este capítulo de código penal.

Tengo por delante un tomo del "Digesto jurídico italiano" y podría fácilmente desenvolver una larguísima exposición, glosando todos los antecedentes que hay en el artículo relativo al duelo, pasando revista a la legislación extranjera y trayendo a colación opiniones de autores. Pero eso me parecería, en este momento, sencillamente inoportuno. Me limitaré solamente a señalar a grandes rasgos, las razones jurídicas y políticas de mi actitud.

Sostengo que debe eliminarse de nuestro código penal el capítulo referente al duelo, que no debe hacerse del duelo un delito especial cuyas consecuencias, en cuanto se refiere a los males causados a la integridad física de las personas, se repriman con penalidades suavizadas, inferiores a las que se aplican en los casos comunes de lesiones o de homicidio.

Sé que algunos juristas dan, para

justificar esa prescripción de muchos códigos penales, el argumento de que es una institución que obedece a razones de prejuicio social, al cual todavía se paga tributo sobre todo por las altas clases de la sociedad y que en el delicto no hay propiamente la temibilidad de los delinquentes comunes, porque el lance, del cual puede resultar un herido o un muerto, se concierta previamente con intervención de terceros, se realiza sujetándose a reglas conocidas y el peligro que cada uno de los contendientes corre se mide y se acepta deliberadamente de antemano. Pero a pesar de todo eso, soy en el terreno jurídico partidario del criterio que inspira las leyes inglesas y norteamericanas en la materia, diametralmente opuesto al que siguen naciones socialmente menos adelantadas, que reprimen el duelo con penalidades menores o lo contemplan con evidente favor.

Creo que perseguir el duelo con penalidades menores que las vigentes para los delitos comunes de sangre, es consagrar un privilegio social evidente. Los códigos penales se dictan para proveer a la seguridad social, de acuerdo con las ideas y los conceptos morales que en una sociedad hay en un determinado momento. Los códigos penales contemplan situaciones generales, en las cuales puede caer cualquiera de los componentes de la sociedad, y sus sanciones se aplican a todos, siguiendo las normas que el código establece. Y las prescripciones relativas al duelo, aunque rigen teóricamente para todos, sólo existen, en realidad, para una determinada parte de la población, para las clases sociales altas que son las únicas que lo practican. Diría un lugar común conocido por todos si recordara que la mayoría de los habitantes no practican el duelo. No se concebiría tampoco que lo practicasen, porque su honor no vive de aparatosidades y porque a ellos no les sería aceptado el duelo, de acuerdo con los prejuicios y las costumbres sociales de sus partidarios. Queda, pues, prácticamente reducido a una institución que sólo sirve a un pequeño núcleo de la población, a los que tienen las posiciones sociales más altas y que, por eso mismo, debieran dar el ejemplo de

un mayor respeto por la justicia y de una mayor solidaridad humana.

Sostengo que la existencia de un prejuicio social, en nombre del cual se admiten las consecuencias jurídicas atenuantes del duelo, no es una razón de peso. Si así fuera, no se concebiría, por ejemplo, que la sociedad persiguiera con represiones penales otros prejuicios cuyas consecuencias son perjudiciales. La institución de las adivinas, cuya existencia radica en un prejuicio religioso y moral, es perseguida por la autoridad policial y por la autoridad judicial, porque de ella se derivan peligros para la salud o la vida de los habitantes que creen en su eficacia curativa. Yo desearía que en materia de duelo, práctica basada sobre un prejuicio social de otro orden, rigiera también en mi país el mismo criterio jurídico.

La legislación inglesa es en la materia, severísima. Persigue el simple desafío y, en algunos casos, como tentativa de homicidio. Y pena las consecuencias prácticas del duelo exactamente como pena los hechos de sangre comunes, considerando la muerte en duelo como asesinato. La legislación, en algunos estados norteamericanos va más allá todavía, porque asimila a los duelistas, en algunos casos, a los alienados.

Se dice por muchos que es inútil reprimir el duelo, colocándolo en la misma categoría que los delitos comunes de sangre, porque en virtud de los prejuicios que lo han mantenido hasta el presente, a pesar de haber ido atenuándose enormemente en el transcurso de los siglos y de ser esa atenuación un signo de progreso social y de civilización evidentes, el duelo seguirá viviendo. A este respecto yo no podría contestar nada mejor que las palabras del célebre penalista italiano Pessina, quien, refiriéndose a esta materia, con motivo de la intensa discusión que se hizo en Italia hace años al tratarse la reforma del código penal, decía:

"Yo no he comprendido jamás la opinión de aquellos que querían que el duelo no se castigara porque las penas, algunas veces severas, a que ha sido sometido, no han servido para desarraigarlo de la sociedad. Si las penas debieran tener por

objeto el desarraigo del delito por completo de la sociedad, toda pena debería ser abolida, porque los homicidios, los hurtos y las falsedades no han podido desarraigarse por severas que hayan sido las penalidades. El duelo desaparecerá; pero hasta que la civilización progrese y lo haga desaparecer, el legislador no debe tolerarlo, porque en ese caso la eficacia del prejuicio vulgar se acrecentaría, justamente, en la medida en que se supiera que la consecuencia jurídica de provocar a duelo, de aceptar el desafío y de ir al terreno del honor, se reduce a poco menos que a nada y prácticamente a nada, debido a la falta de persecución de la autoridad".

Debo decir, por último, entrando ya a otro terreno, que tengo también para justificar mi disidencia razones de carácter político. Perteneczo a un partido que sostiene en su programa la equiparación del duelo a los delitos comunes; que lo ha eliminado de las prácticas corrientes de sus afiliados, a tal punto que si uno de ellos lo cometiera sería separado de hecho y que ha aplicado esa regla en un caso reciente, públicamente conocido, aun a riesgo de provocar un doloroso desgarramiento interno, para ser fiel a un principio moral y a un principio social: al principio moral de que en política, más que en cualquiera otra actividad, no debe hacerse farsa ni corromper al pueblo con la mentira y al principio social de que debe respetarse la persona humana.

En la política argentina, el duelo ha sido y es a menudo una forma de salir cómodamente, con una mentira convencional, de situaciones que pueden ser personalmente desagradables. Nosotros no tememos esas situaciones personales desagradables, cuando ellas son la consecuencia del cumplimiento de nuestro deber, por decir lo que juzgamos necesario decir para la salud de la nación y por atacar lo que nuestras convicciones y nuestras teorías nos mandan atacar. Con nuestra lucha contra el duelo, práctica y valiente, hemos dado un gran ejemplo de salud moral y de honestidad política al pueblo de la república. Yo desearía que la misma práctica fuera imitada por los otros hombres públicos; que se incorporara al acervo de los otros partidos y que en las relaciones corrientes, sobre todo en el terreno político, cada uno tuviera presente en todo instante el concepto de su

responsabilidad moral, la responsabilidad que emana del ejercicio de su cargo y que no olvidara que en el cumplimiento de éste hay que ser veraz y leal. Eso es tener honor.

Dejo así salvada mi opinión sobre esta materia, en términos cuya discreción estoy seguro que apreciarán los señores diputados contrarios y espero recoger para este punto de vista, que no es específicamente socialista, puesto que el duelo se persigue por legislaciones burguesas de otros países socialmente muy adelantados, el concurso de otros votos, a fin de que sea suprimido el capítulo.

Nada más.

Sr. Moreno (R.) — Pido la palabra.

El único punto de divergencia que ha existido en la comisión es el que acaba de plantear el señor diputado de Tomaso.

Cuando iniciamos los trabajos, diferentes miembros de la comisión plantearon en determinadas materias puntos de vista diversos; pero conversamos, consultamos y llegamos a uniformes opiniones hasta poder presentar un despacho bien estudiado y armónico entre todos los miembros de la comisión.

Este punto no lo debatimos porque, como el señor diputado de Tomaso lo ha expresado, él tenía que asumir una actitud irreductible por motivos políticos y por razones de programa. Por eso, señor presidente, haciendo honor como hacía y hago a la inteligencia y a las condiciones del señor diputado de Tomaso, no consideré oportuno que entráramos a una discusión, pues sabía que él no iba a poder ser convencido desde el momento que había una valla en el propio programa de su partido.

Sr. de Tomaso. — Y en mi convicción personal.

Sr. Moreno (R.) — La comisión, señor presidente, no va a hacer sobre este punto un debate, como no lo ha hecho el señor diputado de Tomaso, que se ha limitado a salvar su opinión en términos bien claros y precisos, como cuadra a su persona; se va a limi-

tar a expresar por qué ha adoptado en esta materia el camino que ha seguido y que ha presentado a la cámara en su despacho.

Es sabido que en materia de duelo las legislaciones de la mayor parte de los países del mundo se inclinan a darle a este delito una situación especial, y es sabido también que a pesar de existir una legislación especial atenuada, son rarísimos los casos de duelo que se llevan a los tribunales, y cuando llegan a los estrados de la justicia, las condenas jamás se producen. En Francia, por ejemplo, donde se ha seguido legislativamente en forma teórica el ejemplo de la ley inglesa, los jurados han encontrado siempre la manera de absolver a los due-listas, es decir, de no aplicarles la dura sanción legal que se encuentra en los códigos, o, más bien dicho, que no se encuentra, porque allí no hay un capítulo especial para el duelo en el código penal, pues él queda sometido a las condiciones ordinarias del delito de lesiones, de homicidio o de tentativa, según que se haya realizado el lance o que se haya producido con alguno de los resultados a que acabo de referirme.

Yo reconozco — y probablemente tenemos una coincidencia de ideas con el señor diputado de Tomaso, que la tenemos en muchas cosas — que el duelo es antijurídico; reconozco que no es justo, que no repara el honor; pero la opinión pública piensa de otra manera.

Sr. Justo. — No exacto respecto de la capital de la república, que nos ha dado la mayoría.

Sr. Moreno (R.) — Será la de la capital de la república, la de una parte; no me interesa ahora debatir sobre el particular; planteo simplemente, el punto de vista de la comisión.

La opinión, señor presidente, no adopta estos criterios; y la prueba es que aun entre aquellos que repudian el duelo, no habrá seguramente muchas personas que encuentren que un duelista debe ser llevado a presidio. Yo estoy seguro de que los señores diputados que forman en esta cámara

el grupo socialista han de tener repugnancia de rozarse con los que se llaman criminales o con los autores de delitos contra la propiedad, y, sin embargo, se están dando la mano todos los días con duelistas, y a veces con duelistas inveterados, lo que significa, señor presidente, que ellos, en su fuero íntimo, no consideran que el duelista sea un individuo sobre el cual haya que hacer recaer sanciones penales. Ellos persiguen un ideal y tienen mucha razón en perseguirlo; quizás sean más valientes que nosotros al no afrontar el duelo y al resistir en la forma que lo hacen los ataques o las injurias personales. Es otro punto de vista y otra cuestión; pero el hecho, señor presidente, es que en nuestra sociabilidad aparece como profundamente repugnante el querer llevar a presidio como homicidas, como autores de tentativas, como autores de lesiones, a los que intentaran batirse o, habiéndose batido en duelo, tuvieran un desgraciado resultado en el lance.

Es por estas consideraciones, y no queriendo la comisión hacer obra propia y personal, sino obra legislativa, de acuerdo con los antecedentes, con las tradiciones y con el modo de pensar general, que hemos adoptado para el duelo el mismo criterio que hoy domina en nuestra ley.

Pero diré una cosa más, señor presidente, de acuerdo con penalistas eminentes. Si el duelo hubiera de suprimirse, es decir, si hubiera de colocarse el duelo en las mismas condiciones que el delito de sangre ordinario, habría también que hacer otras cosas más: sería necesario suprimir en los clubs las salas de esgrima, que es donde la gente adquiere la destreza necesaria para herir o para matar a sus adversarios; sería necesario suprimir el tiro al blanco; sería necesario castigar a los profesores que se ejercitarán en ese sport, porque ellos serían los que estarían enseñando al discípulo para que mañana asesinara, y nosotros no podríamos cubrir con el amparo de la ley, o con el amparo siquiera de la tolerancia, a esa clase de personas que se ejercitaran en la preparación de un acto profundamente antisocial. Sería neces-

rio también, señor presidente, crear tribunales de honor para evitar una cantidad de estas cuestiones sociales que hoy en nuestro medio no se resuelven, desgraciadamente, de otro modo, y ¡ojalá hubiera otras maneras de resolverlas! Sería necesario, por último, castigar a los que desafiaran o hicieran jactancia en estas cuestiones. Pero nosotros tenemos la tolerancia suficiente para no hacerlo.

Por eso, basado en motivos sociales, motivos nacionales y motivos propios más que en mis convicciones, que posiblemente están más cerca de lo que el señor diputado de Tomaso cree, de su manera de pensar, es que la comisión ha adoptado el criterio que ha tenido y que ha presentado a la cámara en la forma que consta en el despacho.

Sr. Martínez Zuviara. — Señor presidente: pido que conste mi voto en el sentido de la disidencia que ha fundado el señor diputado por la capital en nombre de la diputación socialista.

Sr. Presidente (Bravo). — Quedará constancia, señor diputado.

Sr. Demaria. — Pido la palabra.

Voy a decir, señor presidente, mi opinión personal sobre este asunto, en pocas palabras.

Desgraciadamente yo no coincido ni con la comisión ni con la disidencia. No admito que el duelo sea un prejuicio, como lo ha calificado el señor diputado de Tomaso: creo que el duelo en nuestra raza es una verdadera necesidad social, porque tiende a buscar soluciones a situaciones que la ley y que los tribunales no han alcanzado ni alcanzarán jamás.

El duelo ha podido ser definitivamente extirpado en Inglaterra; pero el duelo existe, sin embargo, incorporado a las costumbres sociales en Francia, en España, en Italia, en Alemania y en Bélgica, es decir, en todos esos grandes países que han llegado a una verdadera culminación de cultura y en los que el espíritu de justicia está tan desenvuelto, por lo menos, como lo está en Inglaterra.

Y yo encuentro, señor presidente, la explicación de este fenómeno en las modalidades peculiares a la raza inglesa, que no es justo ni lógico querer

aplicar a hombres de temperamentos, ideas y hasta de instintos absolutamente diferentes.

No creo que se pueda pensar, que se pueda decir, categóricamente, que se trata de un resabio bárbaro, cuando países de esa cultura lo conservan, y sería bueno profundizar el fenómeno, tratar de ir al fondo en el análisis, porque creo que si fuera la oportunidad de hacer un debate — que no lo es por razón de la hora y por otras que conocen los señores diputados — podría llegarse a la conclusión de que en los hechos mundiales hay un fenómeno que si subsiste contra todas las propagandas y contra todas las prédicas fundadas en razones de verdad y de lógica aparentes, es porque ese hecho es una necesidad social y colectiva. (*Muy bien!*)

Limitándome apenas a rozar el tema y a expresar mi punto de vista personal, cuando decía que no estaba de acuerdo ni con la comisión ni con la disidencia, debo agregar que creo que lo útil y lo práctico habría sido reglamentar mejor el duelo, para tratar de evitar una serie de crímenes, llevando al pueblo el ánimo del duelo, su espíritu del duelo y su cultivo, para que — parecerá esta idea un poco paradójica, pero tengo el valor de mis opiniones — en vez de combatirlo en la forma en que se hace, se eximiera de pena cuando fuera llevado a cabo con las armas y de acuerdo con los procedimientos que el código estableciera, previa intervención de un tribunal de honor, como lo hacen los oficiales en el ejército alemán, suprimiéndose así los tristes resultados de los encuentros, diremos erijolos, que tiene el pueblo, sin testigos y con armas más peligrosas, cuando los hombres se ven llevados irremediamente por una reacción personal a reclamar una satisfacción por lo que entienden que es una ofensa a su decoro o a su seguridad.

Dejo así establecida que mi opinión personal sería completamente contraria a la adoptada: que habría que eximir totalmente de pena al duelo cuando fuera hecho en las formas que la legislación aconsejara, calificando

cuidadosa y severamente sus condiciones. Con esto habríamos conseguido evitar la mitad de las muertes que hay en el país, casi todas ellas producidas en peleas de almacén y de pulpería, en las reuniones que el pueblo tiene los domingos. Así, todos sabrían que dirimiendo sus cuestiones en la forma reglamentaria por el código quedarían eximidos de pena; y los duelos que se produjeran se harían en forma menos peligrosa y en definitiva más culta.

Considerando la exposición del señor diputado de Tomaso, cuando decía que esto importaba hacer una legislación de privilegio, diré que creo que el argumento es inconsistente. No puede decirse que es hacer legislación de privilegio cuando se reglamenta una costumbre que, por lo menos, la inmensa mayoría de la gente acepta y practica. No creo que sea justo decir que es hacer legislación de privilegio cuando se reglamenta una cosa que practica, aunque fuera un número reducido de personas, puesto que si las demás no la quieren practicar no hay tal privilegio. Este consiste en dar a uno lo que no se da a los demás. Este es, por lo menos, el alcance y la inteligencia que yo doy al concepto de privilegio. Pero dar a los que quieren practicar una costumbre o un acto, un beneficio, sin que esto importe excluirlo para los demás no es crear una legislación de privilegio. Será una legislación destinada a aplicarse a un número de personas reducido o grande, pero nunca se puede sostener que eso importe un privilegio, desde que todos los habitantes del país están en las mismas condiciones para aprovechar de los beneficios de esa legislación.

Y para terminar, señor presidente, debo decir que comprendo y respeto los puntos de vista con que el partido socialista se ha opuesto al duelo, pero que nosotros, los que lo practicamos, los que creemos que en realidad muchas veces es el único medio de salvar el decoro, tenemos el deber de defenderlo.

No, señor presidente; no es prejuicio absurdo: es la única solución so-

cial y personal, es el único remedio para una cantidad de situaciones que los hechos y la vida crean en hombres de nuestra raza y de nuestro temperamento, que no podemos entender que no haya sanción personal no digo para la ofensa, sino hasta para la más ligera desconsideración. ¡O habremos de poder ir a llevar hasta los tribunales todas estas incidencias de los rozamientos de la vida social o política, que en realidad pueden no llegar a afectar el decoro de los hombres, pero que lo disminuyen y lo deprimen!

Por estas consideraciones, no podré acompañar la disidencia; prefiero, en definitiva, la sanción que ha dado la comisión, porque mantiene y respeta lo existente que, como he dicho, está muy lejos de ser perfecto.

He dicho.

Sr. Moreno (R.). — Que es lo existente y un poco lírico, porque las penalidades contra el duelo, a pesar del código, no se aplican.

Sr. Varela. — Y será difícil traer a la cámara una reglamentación del duelo, para hacer una ley.

Sr. Justo. — Pido la palabra.

Desde que me interesé por las cosas del mundo, el duelo me hirió como una de las costumbres más absurdas y atrasadas de la sociedad en que yo vivía, y desde que soy hombre que se ocupa de política he comprendido que en esta cuestión debo asumir la actitud neta y decidida que hice conocer desde mi ingreso a las filas del partido obrero socialista, opinión corriente entre los hombres que lo formaban, y que, por iniciativa de otros ciudadanos, ha sido incorporada a los estatutos del partido.

En mi vida ulterior de ciudadano, no he podido sino continuar firmemente en mi convicción anterior de que el duelo es un resabio de la época medioeval, mantenido todavía en Alemania por todo lo que hay de bárbaro en el imperio germánico, y en Francia, por lo que tiene de decadente aquella democracia, en parte ficticia. Y en mi experiencia parlamentaria, muy nutrida en este orden de asuntos,

he aprendido cosas que no sabía y que me hacen considerar el duelo doblemente atrasado y absurdo. He aprendido dos reglas del "código del honor", es decir, las he aprendido desde afuera, como una ciencia que no he penetrado, ni mucho menos adoptado.

He sabido que "las afirmaciones falsas se sostienen en el campo del honor", y eso sólo bastaría para que en ningún caso pueda yo aceptar el duelo, que creo corruptor y demolidor del orden social.

Jamás aceptaría, de mi parte, probar una afirmación falsa en esa forma, ni tampoco admitir que me la puedan probar. Si es falso lo que he dicho, mi deber, como hombre, es reconocer la falsedad de la afirmación, y si la afirmación falsa viene contra mi honor, no voy a dejarle a mi ofensor mantener de una manera tan deleznable su falsa afirmación.

Creo que en esta cámara alguna vez se me ha acusado intencionalmente, groseramente, de hechos completamente falsos, con el objeto de provocarme a duelo, pero tuve después felizmente la satisfacción de ver que los provocadores se desdecían por sí mismos.

El otro precepto del código del duelo, que me parece no menos obstructivo de todo orden social, de toda honestidad política y de toda eficacia en la acción cívica, es éste: cuando se ha sometido una cuestión a las leyes del honor, como lo entienden los duelistas, no se puede volver a hablar de esa cuestión. Nosotros, que no tratamos sino cuestiones de interés público, entregadas al examen de la cámara y del pueblo, y queremos insistir en ellas tantas veces como sea necesario para que se corrijan los vicios que denunciábamos, ¿cómo podemos aceptar semejante regla?

Por otra parte, tenemos impedimentos de orden casi material. Si el diputado Demaría alguna vez me reta a duelo, le voy a enviar como padrinos de mi honor al portero del local de la calle Méjico 2070, Felipe Gauna, un hombre que, solo, armado de un revólver, defendió desde la azotea de

ese local la biblioteca obrera contra una turba de asaltantes, y lo hizo con eficacia; y al obrero cepillero Pablo Luoni, muy honesto, muy digno, que recibió un tiro de la policía en un mitin socialista en la plaza Lavalle y que tiene por eso perforado el pabellón de una oreja. Serían personas competentes en el manejo y en las consecuencias del uso de las armas de fuego, pero no sé si le convendrían al señor diputado Demaría para tratar con sus padrinos.

Hemos visto en esta cámara producirse la agresión de un diputado contra un periodista, agresión completamente inmotivada, y que el diputado no aceptaba el duelo con el periodista porque, por razones de clase, lo consideraba indigno de combatir con él en el terreno del honor. Lamenté, en todo sentido, la situación del periodista; me pareció doblemente humillado, por su propio prejuicio y por el prejuicio ajeno.

Estamos, pues, señores diputados, en el terreno en que hemos estado siempre; mantenemos en forma inmovible esta posición, que no es nuestra propiamente, no es sólo de los hombres que estamos aquí representando a un partido, sino de la masa trabajadora toda, tanto más cuanto que se trata de una masa trabajadora sana y culta. Y deploramos que se haga un capítulo aparte en el código penal que se proyecta para este prejuicio bárbaro y sangriento, falso y mentido del duelo, que no hará sino prolongar la ficción en la vida política argentina, y asimilarnos a la parte netamente retrógrada, o en desarrollo más lento, del mundo moderno.

Es seguro que a medida que avanza la historia, el duelo se practica cada vez en zonas más reducidas de la tierra. Hablar hoy de la civilización de lengua inglesa es hablar del mundo del porvenir; la civilización inglesa no sólo cubre a Inglaterra, sino al inmenso continente norteamericano, a Australia, Sud Africa y la infinidad de otras colonias de esa lengua; y en ninguno de esos países se practica ni se tolera el duelo: al contrario, se le castiga con penas infamantes, una de

las cuales es la privación de los derechos políticos.

Sr. Demaría. — Pido la palabra.

No voy a hacer parlamentariamente ese hipotético duelo de que nos hablaba el señor diputado Justo. Voy simplemente a afirmar mis ideas en cuatro palabras.

Realmente me parece que el señor diputado Justo, por su opinión o su prejuicio contra el duelo—que también hay prejuicios en contra de estas cosas—no ha penetrado bien el sentido del duelo, ni siquiera el de sus reglas ni el de su criterio, a juzgar por las afirmaciones que ha hecho.

Le ha imputado al duelo que puede cubrir una afirmación falsa. Niego absolutamente el hecho...

Sr. Justo. — ¡No sirve entonces ni para esto! (Risas).

Sr. Demaría. — Dentro de ninguna de las reglas del duelo que conozco, nadie habría sostenido jamás que pueda servir para cubrir una imputación falsa. Puede servir para exigir la reparación de una injuria, nunca para cubrir una imputación falsa. Y tienen las personas que intervienen en los duelos el perfecto derecho de ofrecer la prueba de sus afirmaciones, y yo, como padrino, lo he hecho muchas veces.

La segunda afirmación del señor diputado Justo se refería también a otro error: que cuando ha habido un duelo entre dos personas, no puede volverse a hablar de ese asunto. Es otro error. Cuando ha habido un duelo entre dos personas, queda terminada entre las dos la cuestión personal a que puede haber dado lugar el agravio o la injuria; pero no sé que nadie haya entendido jamás que si por discusión de un hecho político, comercial, o de cualquier orden, se ha producido un duelo entre dos personas, ninguna de las dos renuncie a su derecho de seguir defendiendo sus ideas o intereses como entienda que deba hacerlo.

Y vamos al tercer error del señor diputado Justo—que también me explico, porque él no ha practicado el duelo, y no ha pensado en el concepto en que hay que buscar padrinos. No creo que la habilidad de tiro de los

padrinos que él me hubiera de mandar, tenga ninguna referencia con el duelo, porque los que se batían no son los padrinos sino los duelistas; de manera que si me mandara esos padrinos realmente tan peligrosos, yo no temería tratar con ellos, porque vendrían a discutir friamente conmigo la situación y los antecedentes del asunto.

De manera que podríamos hacer esta ligera recapitulación, señor presidente: el señor diputado Justo es un hombre que estudia a fondo las cosas, y que las plantea, de su punto de vista, con verdadero talento, muchas veces con la necesaria unilateralidad para darles la anhelada gravitación; pero es la primera vez, desde que es diputado, que funda una opinión en tres errores matemáticamente demostrables, como acabo de decir.

Sr. de Tomaso. — Y el señor diputado es la primera vez que está deplorablemente equivocado.

Sr. Justo. — Pido la palabra.

Yo no pretendo conocer el duelo ni los cánones del duelo como los conoce el señor diputado Demaría, y tengo que guiarme por lo que saben de esas cosas otros ciudadanos ex-duelistas, que me han hablado del tema; uno de ellos, puedo mencionar su nombre, el doctor Luis María Drago, me dijo que él no podía volver a ocuparse de juicios que había emitido sobre un abogado con quien tuvo dificultades, a pesar de que se trataba de cuestiones que afectaban a la honestidad profesional de la persona, porque habían llevado precisamente esa cuestión al terreno llamado del honor. Eso me decía el doctor Drago, que había pasado por las horcas caudinas del duelo.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente, no siendo posible percibir sus palabras.

Ni tampoco tenemos tiempo para esta forma del honor. Y me duele ver a un senador de la nación, que tiene a estado grandes planes financieros, ocupado en determinar por qué se invitó o no se invitó a

la señora tal o cual a cierta tertulia.

Sr. Escobar. — ¿Hay número, señor presidente?

Varios señores diputados. — Que se vote.

Sr. Escobar. — Esta cuestión del duelo podría continuar discutiéndose en un centro socialista; el doctor Demaría podría invitar al doctor Justo.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Para sostener el despacho de la comisión aun cuando creo advertir que hay mayoría en la cámara a favor de ese despacho.

Sr. Castellanos. — Podría concedérsele la palabra al señor diputado y levantarse la sesión en cuarto intermedio, para continuar mañana.

Sr. Melo. — No, señor diputado, le agradezco; seré muy conciso.

Todos estamos de acuerdo, señor presidente, en que el duelo es una supervivencia de las viejas ordalias; en la vida de los pueblos primitivos todo el derecho es religioso, incluso el procesal. La prueba en juicio es una apelación al juicio de un dios...

Sr. Justo. — Eso no lo cree el señor diputado Demaría.

Sr. Melo. — El duelo es una supervivencia del período en que en los grupos sociales no existía todavía justicia organizada. En la confusión que los bárbaros trajeron a la civilización romana surgieron en la Europa meridional las prácticas primitivas; y los europeos americanos conservamos como una herencia atenuada el duelo medioeval. Y como los delitos son tales según la conciencia jurídica de

la sociedad que los califica y los pena en mayor o menor grado, la comisión al calificar como tal el duelo, diferenciándolo del homicidio en sus caracteres y su penalidad, no ha hecho otra cosa que recoger el criterio vivo todavía en la colectividad argentina.

Y nosotros, que en el fondo vemos que se trata de un prejuicio, como vivimos en el seno de la opinión de nuestro medio y en nuestro tiempo, no podemos hacer otra cosa, como legisladores, que reglamentar el duelo, reprobándolo como hombres justos, y deseando que llegue el día en que los hombres de esta tierra sean tan justos que puedan entregar la solución de sus conflictos de honor a tribunales de arbitraje, que sean también tan justos que los resuelvan siempre con reparadora equidad.

Entretanto, ante la realidad innegable, sancionemos estas disposiciones.

Varios señores diputados. — Que se vote.

Sr. Presidente (Bravo). — Corresponde votar el artículo 1o., título 1o., libro 2o., pero no será posible porque la cámara ha quedado sin número.

Queda pendiente la moción formulada por el señor presidente de la comisión de que se autorice a la comisión especial para corregir los errores materiales.

Invito a la cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Son las 8 y 35 p. m.